

CIUDADES SIN MIEDO

POLÍTICAS
MUNICIPALISTAS
EN ACCIÓN

Publicado por **Fundació Sentit Comú**

sentit comú

Fundació Sentit Comú
fundaciosentitcomu.cat



La obra se proporciona bajo los términos de esta
licencia pública de Creative Commons Atribución/
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Licencia Pública
Internacional – CC BY-NC-SA 4.0

Primera edición: septiembre de 2022

Edición a cargo de **Júlia Miralles-de-Imperial**

Traducción: **Subtil. | Eva Peribáñez**

Corrección: **Subtil. | Cristina Illamola y Ana Andrés del Pozo**

Diseño y maquetación: **Pilar Sola | pilarsola.com**

ISBN: 978-84-09-43225-7

Impresión y encuadernación: Cevagraf

Impreso en España – *Printed in Spain*



**Gracias a todas las personas
que con su contribución han
hecho posible este libro.**

ÍNDICE

Introducción	8
Construyendo el movimiento municipalista	10
NOS MOJAMOS: HISTORIAS DE ACTIVISTAS Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	12
· Barcelona: Municipalismo en la práctica. <i>Elena Tarifa</i>	13
· Los movimientos sociales y el auge del municipalismo en Bolonia: breve introducción, breve contexto. <i>Francesco Gentilini y Emily Clancy</i>	17
· ¿Por qué el poder local? <i>Maga Miranda</i>	25
UN VIAJE POR LA HISTORIA DEL MUNICIPALISMO	28
· El municipalismo tiene historia. Aprendamos de ella. <i>Kate Shea Baird</i>	29
· El socialismo municipalista de los años ochenta: la experiencia de Londres. <i>Owen Hatherley</i>	33
· Chicago: Desarrollo económico con Harold Washington (1983 1987). <i>Pierre Clavel</i>	39
· La tradición municipalista en la política española moderna. <i>Pamela Radcliff</i>	43
LA MOVILIZACIÓN EN LOS AÑOS 20: RETOS E INNOVACIONES	46
A NIVEL INTERNACIONAL	
· El activismo en la década de 2020: Introducción. <i>Steve Hughes</i>	47
· Movilización: Retos e innovaciones. <i>Kate Shea Baird y Bea Martínez</i>	49
· Hacia una disciplina con liderazgo. <i>Gabe Tobias</i>	55
· Reflexiones sobre la coyuntura del movimiento. <i>Maurice Mitchell</i>	61
Nuevos retos, nuevas políticas	64
RECUPERANDO EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA GENTE	66
· Reconquistando la ciudad: Una revolución en el espacio público. <i>Anke Kleff y César Ochoa</i>	67
· Superilla Barcelona <i>Alícia Puig</i>	69
· La primera supermanzana de Barcelona: Guía de ejecución. <i>Patrick Kappert</i>	71
LA CIUDAD COMO HOGAR: EL DERECHO A LA VIVIENDA	76
· Introducción. <i>Guillem Pujol</i>	77
· El turismo: Un factor importante para el derecho a la vivienda en muchos municipios. <i>José Manuel Mejías</i>	79
· Habitar y ganar derechos en el laberinto europeo. <i>Ana Fernández</i>	83
TRANSFORMANDO CÓMO CUIDAMOS	86
· Cuidados y solidaridad comunitaria. <i>Luisa Broto Bernués</i>	87
· Transitando hacia la ciudad de los cuidados: el caso de Barcelona. <i>Gemma Tarafa Orpinell, Carolina Recio Cáceres y Elia Gran</i>	91
¿PODEMOS PROSPERAR SIN CRECIMIENTO ECONÓMICO?	96
· Hacia un nuevo modelo económico: Introducción. <i>Toni Ribas</i>	97
· Sin miedo al decrecimiento económico. <i>Gabriela Cabaña</i>	99
· Más energía verde, más industria local, más puestos de trabajo. <i>Eloi Badia, Christo Casas y Quique Gornés</i>	103

LAS ISLAS JAULA Y LOS MUNICIPIOS ENFRENTÁNDOSE A LA EUROPA FORTALEZA	106
· Lesbos. <i>Lara Lussón</i>	107
· Lampedusa, isla fronteriza en el corazón del mediterráneo. <i>Antonello Ravetto Antinori</i>	111
· Barcelona: la ciudad que quiere ser refugio en una Europa Fortaleza. <i>Marc Serra</i>	115
ORGANIZACIONES Y CIUDADES EN CLAVE FEMINISTA	118
· El movimiento feminista: palanca del cambio social. <i>Eva Abril</i>	119
· ¿Qué son las políticas feministas? Una aproximación desde la red feminista. <i>Nieves Salobral Martín</i>	121
CIUDADES QUE CUIDAN EL PLANETA	124
· Transformar el modelo económico desde los Ayuntamientos. <i>Tània Corrons y Álvaro Porro</i>	125
· Desafío climático y justicia social: Las ciudades pasan a la acción. <i>Eric Piolle</i>	129
¿SON LOS LOBBIES TODOPODEROSOS?	132
· ¿Cómo moldean nuestras ciudades los lobbies? <i>Beatriz Gomes Dias, Isabel Pires, Vasco Barata y Ricardo Moreira</i>	133
· Denuncias, noticias falsas y acoso en redes: Defender el derecho a la ciudad frente a los grandes propietarios de Barcelona. <i>Janet Sanz</i>	135
¿ES POSIBLE UNA POLICÍA MUNICIPALISTA?	140
· Una respuesta municipalista a la seguridad pública. <i>Lucia Morale</i>	141
· Campañas por la responsabilidad democrática y local en el Londres de los años ochenta. <i>Nadine Finch</i>	145
¡DESAFIEMOS LA EXTREMA DERECHA!	150
· Enfrentar el odio en las redes digitales. <i>Javier Toret</i>	151
· La neurosis de la extrema derecha y la alegría del vínculo. <i>María Eugenia R. Palop</i>	153
· Algunas reflexiones para la lucha contra la extrema derecha. <i>Gerardo Pisarello</i>	157
MUNICIPIOS TRANSPARENTES Y JUSTOS: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO	162
· Municipios contra la corrupción. <i>Júlia Miralles de Imperial</i>	163
· ¿En las ciudades hay más riesgo de corrupción? ¿Cuáles son los mecanismos de la corrupción en las ciudades? <i>Eliška Drápalová</i>	165
· La ciudad y la corrupción. <i>Joan A. Llinares</i>	171
· Blanqueo, fraude fiscal y corrupción financiera en la UE: qué es y cómo podemos combatirlo. <i>Ernest Urtasun y Jesús Hernández</i>	174
Epílogo	178
Bios	186

INTRODUCCIÓN

En 2017, el movimiento municipalista internacional se reunió en Barcelona para construir redes globales de solidaridad y esperanza. Aquella cumbre sirvió para catalizar el municipalismo y expandirlo por todos los continentes. En los años siguientes, se celebraron encuentros regionales Fearless Cities en Varsovia, Nueva York, Bruselas, Valparaíso, Nápoles y Belgrado, mostrando la fuerza organizativa del movimiento global por el derecho a unas ciudades y pueblos para la gente común.

Este libro recoge parte de los debates que tuvieron lugar en julio de 2021, en la segunda edición mundial de Fearless Cities, que nació con la ambición de abordar los temas más desafiantes y provocativos con los que se enfrentan actualmente las ciudades, los pueblos y las zonas rurales.

¿Quién corta el bacalao realmente en nuestras ciudades? ¿Cómo sería un municipalismo queer? ¿Podemos acabar con las violencias hacia las personas y el planeta?

El municipalismo se define por su voluntad transformadora. Es por eso por lo que no huimos de los debates complejos ni de las decisiones difíciles.

Para nosotras, Fearless significa ser lo suficientemente valientes para tender la mano a quien piensa de manera diferente; lo suficientemente fuertes para ser vulnerables; lo suficientemente audaces para involucrarnos en la realidad, en lugar de mirarla desde la barrera.

En la primera edición ya defendimos que existe algo capaz de quitar el miedo, algo tan sencillo y, a la vez, tan difícil; tan fuerte y, a la vez, tan frágil como la esperanza. Cinco años después y en un contexto de crisis ecológica, social y económica, estamos más convencidas que nunca de que nuestra única opción es llamar a nuestros miedos por su nombre y pensar, colectivamente, cómo hacerles frente.

¡Reivindiquemos el poder de la proximidad, aprendamos las unas de las otras y continuemos haciendo crecer nuestra red global!

CONSTRUYENDO EL MOVIMIENTO MUNICIPALISTA

NOS MOJAMOS: HISTORIAS DE ACTIVISTAS Y POLÍTICA INSTITUCIONAL

BARCELONA: MUNICIPALISMO EN LA PRÁCTICA

Elena Tarifa

«Nos quieren en soledad, nos tendrán en común» fue el lema de la campaña electoral que en 2015 llevó a nuestro proyecto municipalista a gobernar en el Ayuntamiento de Barcelona. Y es que, contra todo pronóstico, por primera vez la ciudad contaría con gente común al frente de la institución municipal, gracias a la unidad de tantas personas y organizaciones que decidimos dar un paso adelante juntos, en común.

Porque Barcelona En Comú no surgió de la nada. Todo comenzó en junio de 2014, cuando un grupo de personas de movimientos sociales de la ciudad como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), activistas vecinales de diversos movimientos cooperativos y sociales, así como ciudadanas por iniciativa individual, se unieron para invitar a los movimientos y partidos políticos progresistas del momento a unirse a un proyecto municipalista que llegara a la institución para devolver la ciudad a sus ciudadanos y ciudadanas para las siguientes elecciones municipales de mayo de 2015.

En los años anteriores habíamos tomado las calles y las redes sociales, sin embargo, encontramos que el cambio era bloqueado desde arriba, desde el poder formal; había llegado el momento de retomar las instituciones y ponerlas al servicio del bien común: decidimos recuperar la ciudad para sus vecinos y vecinas, a través de Barcelona En Comú, una plataforma ciudadana liderada por activistas y gente común. Nos decidimos por lo local porque es el ámbito más próximo a las personas, donde los cambios son más palpables y cercanos, y donde es posible conseguir la participación diversa de la ciudadanía, en las diferentes propuestas políticas para la ciudad; también porque queríamos apostar por políticas innovadoras que pudieran cambiar la vida diaria de las personas y donde ellas fueran las protagonistas.

Después de siete años, e independientemente de cuánto más estemos al frente, el Ayuntamiento de Barcelona no volverá a ser el mismo; hay un antes y un después de que la gente común llegáramos a las instituciones, porque

ha sido posible poner en práctica proyectos y políticas municipalistas e innovadoras; por ejemplo, con el hecho de tener la primera mujer alcaldesa, Ada Colau, una activista antidesahucios, una persona común, no proveniente de la clase política; estableciendo un código ético que limita los sueldos de nuestros representantes electos y también el número de mandatos; poniendo el feminismo en la primera línea de nuestras políticas, con la creación de la primera concejalía de Feminismos y LGTBI en el consistorio barcelonés, de la unidad de transversalidad de género dependiente de la gerencia municipal, del pionero Centro LGTBI; o impulsando acciones que mejoran la vida de muchas mujeres, como el servicio de canguraje municipal gratuito para las familias más vulnerables.

Otros ejemplos de políticas valientes han sido el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), un instrumento para regular y limitar los pisos turísticos y que ha permitido al Ayuntamiento revertir el proceso de expulsión de vecinos y vecinas del centro de la ciudad, o la apuesta por un espacio público saludable, con más espacio verde, más justo y seguro, que favorezca las relaciones sociales y la economía de proximidad, con las supermanzanas, ejes verdes cuyo objetivo es recuperar para la ciudadanía una parte del espacio que actualmente ocupan los vehículos privados. También, con la creación de la primera compañía de energía pública y verde municipal, Barcelona Energía, o la puesta en marcha del servicio de dentista municipal gratuito para las personas con menos recursos.

Pero, si en algo se ha incidido especialmente, esto ha sido en una relación más cercana con la ciudadanía que permita que formen parte de las principales decisiones de la ciudad a través de nuevas formas de participación; así, aprobamos un nuevo reglamento municipal de participación, pero fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia, ya que permitía la posibilidad de iniciativas ciudadanas populares, como la presentada para municipalizar el suministro de agua en la ciudad, lo que supone una gran amenaza para la actual empresa suministradora, la cual recurrió a los tribunales.

También hemos fomentado lo que llamamos *e-democracia*, a través del uso de la plataforma de *software* libre Decidim.barcelona, que se ha compartido con la ciudadanía organizada y con otros municipios e instituciones, un instrumento que ha permitido tanto construir de manera colectiva nuestro programa electoral como priorizar las acciones del Plan de Acción Municipal y de los distritos por parte de los vecinos y las vecinas de la ciudad. También ha sido el instrumento para votar los cientos de proyectos presentados por la ciudadanía en los primeros Presupuestos Participativos de la ciudad, donde la inversión de treinta millones del presupuesto municipal de 2022 ha sido directamente decidida por quienes han participado en las diferentes rondas de votación.

No olvidamos de dónde venimos.

Otro de los lemas de nuestra campaña de 2015 fue «no olvidaremos nunca de dónde venimos». Y es que para nosotras la institución es una herramienta, no un fin en sí mismo. El movimiento que hemos construido, el de los Comunes, ahora es más importante que nunca para consolidar una forma de gobierno más participativa, para apoyar las propuestas políticas del Ayuntamiento, para incidir dentro y fuera de la institución cuidando nuestros vínculos con los movimientos sociales y para construir nuestro propio discurso fuera de la institución. Uno de los retos desde fuera del consistorio municipal es gestionar las expectativas sobre lo que podemos hacer de verdad y lo que queremos hacer; porque no podemos hacerlo todo. Otro reto es el de la relación con los movimientos sociales: ¿somos parte de estos movimientos? En cualquier caso, estando dentro de la institución, no hay que perder de vista las demandas de los movimientos, algo que no es fácil pero que es absolutamente necesario, teniendo en cuenta que, a veces, pueden ser mucho más exigentes con las políticas que proponemos o que podemos implementar, y que también hay movimientos emergentes a los que debemos escuchar.

En este sentido, que muchas de las activistas de Barcelona En Comú provengan de asociaciones vecinales y de movimientos sociales diversos ayuda a mantener los canales de comunicación abiertos. Igualmente, el hecho de contar con asambleas de los Comunes en casi todos los barrios de Barcelona ayuda a tener esa interlocución con los diferentes agentes sociales y cívicos del territorio. En esa línea, tratamos de mantener canales de comunicación en tiempo real entre los concejales municipales de Barcelona En Comú y la organización, a través de espacios específicos y reuniones periódicas, para tratar de combinar las decisiones del día a día con la reflexión conjunta con la organización sobre cómo lograr cambios a largo plazo.

Por otra parte, debemos hacer frente a unos medios de comunicación a la contra, controlados por las élites y los grandes grupos económicos; a esto se suman los innumerables recursos judiciales o demandas estratégicas (*lawfare*) a nuestras políticas más radicales, como la que ha intentado frenar el PEUAT o las que han sido interpuestas contra la alcaldesa y algunos concejales y concejalas, como, por ejemplo, las presentadas por fondos buitres por haberlos obligado a ofrecer alquiler social a familias vulnerables.

Sin duda, otros retos han sido el de gobernar en coalición con el Partido Socialista de Catalunya (PSC) y el de lograr amplios acuerdos con los otros grupos en grandes temas de ciudad. Así, somos conscientes de que trabajar por un modelo de ciudad que ponga en el centro a las personas, a la sostenibilidad de la vida, debe ser compatible con lograr acuerdos en temas que

puedan sumar apoyos más mayoritarios, y construir a partir de pequeñas victorias para avanzar hacia grandes cambios que necesitan de un apoyo mayoritario de la población.

Cambios locales, efectos globales

Aunque lo local fue nuestro punto de partida, desde el principio las que participamos en Barcelona En Comú teníamos la certeza de que la rebelión democrática en Barcelona no sería solo un fenómeno local. Queríamos que Barcelona fuera el detonante de una revolución ciudadana en Cataluña, España, Europa y más allá, trabajando codo con codo junto con plataformas ciudadanas similares a las nuestras, que ganaron en otras ciudades de España y a nivel internacional, así como con plataformas progresistas y ciudadanas con el objetivo de cambiar desde abajo el actual régimen político y económico neoliberal actual.

Así, surgió Fearless Cities, un movimiento global e informal de activistas, organizaciones, concejalías y alcaldías que trabajan para radicalizar la democracia, feminizar la política e impulsar la transición hacia una economía que ponga el cuidado de las personas y del planeta en el centro.

El primer evento Fearless Cities lo organizó Barcelona En Comú en 2017 y contó con la asistencia de más de setecientas personas en representación de más de cien organizaciones municipalistas de todos los continentes. El libro que documenta este primer encuentro de Fearless Cities se ha traducido ya a cinco idiomas.

Desde entonces, plataformas municipalistas locales han organizado eventos regionales descentralizados de Fearless Cities en Bruselas, Valparaíso, Nueva York, Varsovia, Belgrado o Nápoles, hasta llegar a la segunda edición del Fearless Cities en línea en el verano de 2021; lo que muestra que los cambios locales logran efectos globales. Sea desde la institución o desde el activismo, seguiremos trabajando en red, en común, para que el municipalismo sea un verdadero motor de transformación de las vidas de las personas en cualquier lugar del mundo.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL AUGE DEL MUNICIPALISMO EN BOLONIA: BREVE INTRODUCCIÓN, BREVE CONTEXTO

Francesco Gentilini y Emily Clancy

La relación entre Bolonia y la izquierda internacional es mayor de la que uno imaginaría al pasear por las calles de esta ciudad no tan grande, situada a 80 km al norte de Florencia, al otro lado de los Apeninos. La historia de esta relación podría contarse a grandes rasgos con los relatos de dos protagonistas.

En primer lugar, hay que decir que a lo largo del «breve siglo» Bolonia ha sido la plaza fuerte del mayor partido comunista de Occidente, el Partido Comunista de Italia (PCI). Mientras este existió, gobernó en Bolonia. Y no solo eso; el partido era una entidad omnipresente en la vida de la ciudad: a mediados de los años setenta, aproximadamente el 35% de la población de Bolonia era miembro oficial del PCI. Hoy, en la era de los «partidos líquidos» y la política posmoderna, intentar ni siquiera imaginar una organización política que pudiera lograr una participación popular tan enorme es casi imposible.

El otro gran protagonista de la historia es el universo de los movimientos izquierdistas que lucharon por la emancipación y el reconocimiento de las «nuevas» subjetividades políticas, y, al mismo tiempo, exigieron reformas más radicales entre 1968 y 1978. No nos equivoquemos, este universo era tremendamente diverso y a menudo algunos de sus componentes entraban en conflicto. Sin embargo, a veces todos estos movimientos desafiaban abiertamente a la administración comunista local y chocaban de frente con el partido. Como en muchos otros países, los movimientos sociales jóvenes, centrados en los estudiantes, pretendían reemplazar los valores antiguos y grises del Partido Comunista. Como solía pasar, el partido respondió con rapidez cuando el momento lo requería, como en 1977, cuando el alcalde de Bolonia,

Renato Zangheri, y el secretario del PCI, Enrico Berlinguer, felicitaron a la policía y al ejército por despejar las calles ocupadas por los estudiantes de la zona universitaria con enfrentamientos que, entre otros incidentes, acabaron con la muerte de Francesco Lorusso, un estudiante de veinticinco años.

Esta doble dinámica de conflicto y diálogo es lo que siempre ha alimentado la dialéctica en torno a los principales puntos de debate de la izquierda italiana, tanto en Bolonia como en el resto del país. El partido y los movimientos sociales siempre han sido de algún modo enemigos naturales, con valores de referencia notablemente incompatibles. Y esta dinámica continúa en la actualidad.

Si avanzamos rápidamente una década, observamos que muchas cosas empezaron a cambiar. Solo dos años después de la caída del muro de Berlín, la historia de la izquierda italiana volvió a dar un giro en Bolonia: con el abandono explícito de cualquier referencia directa a la tradición comunista, el PCI se convirtió de repente en el Partido Democrático de la Izquierda (PDI), lo que provocó un cisma que dio lugar al nacimiento de varios partidos comunistas que pretendían ser la nueva voz de la izquierda radical italiana. Este punto de inflexión es lo que hoy muchos consideran el principio del fin: el fin de la antigua izquierda cuyos valores principales eran la justicia social, los derechos de los trabajadores y la redistribución de la riqueza.

Sin embargo, seguramente también fue un comienzo: desde aquel momento, la agenda socialdemócrata recientemente adoptada por el nuevo Partido Democrático (el partido adoptó el nombre «Partito Democratico» en 2008 y eliminó —no por casualidad— la palabra «izquierda») empezó a abrir camino hacia valores y perspectivas nuevos, «posmodernos», al mismo tiempo que acababa con los lemas y dogmas antiguos. Con este proceso implacable, una especie de versión italiana de la «tercera vía» de Tony Blair vio la luz a principios de los años noventa y se abrieron las puertas del partido a la aceptación de algunas de las peores características de la derecha política (el neoliberalismo, la privatización de los servicios públicos —desde la educación hasta la sanidad— y el aumento de la represión contra las personas migrantes, entre otras). Mientras tanto, se mantenían algunos de los legados más problemáticos del pasado del PCI (una gran irritación por las casas y los espacios sociales autogestionados y ocupados —que solían desalojarse gracias a la intervención policial—, una visión del desarrollo económico muy centrada en las empresas que no siempre tenía en cuenta los efectos sobre el medioambiente y el cambio climático). Veinticinco años después, este proceso culminó cuando Matteo Renzi asumió el liderazgo del Partido Democrático. En la actualidad, Renzi ha dejado el partido para fundar su propia organización política, Italia Viva, que es lo más parecido a una versión italiana del partido español

Ciudadanos. El liderazgo de Renzi ratificó y aprobó el abandono definitivo de cualquier tradición socialista del partido —que, todo hay que decirlo, había sufrido una erosión constante desde 1991 y, por tanto, era una presa fácil de la campaña de Renzi— y lo reubicó en el espacio político. Esta tendencia marcó el camino a una sensación nacional de abandono y traición para quienes habían creído en las profecías gloriosas de los partidos socialista y comunista.

Aun así, mientras que el partido se alejaba poco a poco de su tradición, los movimientos sociales hallaron fuerzas renovadas al actualizar y recuperar la suya. Con la llegada de los noventa, aparecieron organizaciones nuevas, se produjeron más alzamientos y se ocuparon otros espacios sociales que empezaron a autogestionarse. Los sindicatos de estudiantes volvieron a las calles y el movimiento antiglobalización empezó a moldear las nuevas formas de desobediencia civil y manifestación política creativa. El universo de los movimientos italianos continuó fortaleciéndose hasta la reunión del G8 en Génova en 2001, cuando el Estado decidió volver a reprimir con sangre sus demandas. Veinticuatro años después de la muerte de Lorusso, Carlo Giuliani fue asesinado a quemarropa por un agente de policía durante los enfrentamientos en la plaza Alimonda. Su cuerpo sin vida, captado por los fotógrafos de las agencias de noticias, se convirtió en el símbolo de la muerte de la lucha del movimiento como un frente unido.

Por eso, en los años siguientes se produjo un nuevo equilibrio: mientras que el partido se alejaba rápidamente de sus raíces, los movimientos intentaban recuperarse de su «derrota». No habían muerto, pero tampoco eran lo que habían sido. Eran también los años del «régimen» de Berlusconi y, lo que es más importante, de la involución cultural: mediante un control firme y omnipresente de buena parte de los medios de comunicación nacionales, el nuevo líder de la centroderecha italiana logró fijar una agenda para muchos de los temas que atraían la atención de la opinión pública. El impacto de esas décadas de regresión cultural y distorsión política de los valores constitucionales es hoy más fuerte que nunca. Para empeorarlo aún más, el declive de la era de Berlusconi vino acompañado del auge de una nueva agenda política grotesca, no muy distinta de la que se vivió en muchos otros países europeos: la era de la austeridad. Aunque aparentemente nunca afectaron a Italia tanto como a otros países, como Grecia y España, los dogmas económicos y políticos de la troika asestaron un golpe devastador al estado del bienestar del país, que ya no era ideal.

En estas condiciones, la izquierda y sus distintas almas han peleado por encontrar la manera de representar una alternativa para el pueblo italiano: el partido no deja de perder miembros y votantes, mientras que los movimientos han luchado para recuperar su espacio e imponer su agenda. Entre tanto,

parece que la derecha no deja de ganar impulso con el paso de los años. Y, cuanto más impulso gana, más partidos de derechas se transforman en organizaciones radicales con simpatías neofascistas. Al fin y al cabo, a diferencia del resto de los países del sur de Europa, Italia nunca ha sido testigo de una respuesta izquierdista a la eterna crisis política de las últimas décadas. Se han celebrado algunas victorias, pero el panorama político general de los últimos treinta años del país es bastante gris. Desde luego, no es rojo ni verde.

Una coalición cívica de ciudadanos sube al escenario

En estos tiempos sombríos para la situación política nacional del país que una vez acogió al mayor partido comunista de Occidente, un nuevo horizonte de la acción política progresista surge de la ciudad. En 2016, pocos meses antes de las elecciones municipales, un grupo de ciudadanos de Bolonia decidió intentar cambiar la situación de su contexto local. Sus historias personales eran muy distintas, pero lo vieron más como una oportunidad para el enriquecimiento mutuo que como un obstáculo. Así pues, decidieron reunir una serie de subjetividades políticas que coincidían en algunos valores y prácticas. Su «civismo» y su compromiso político eran las armas que pretendían utilizar para influir en su administración local: por eso decidieron que su organización se llamaría Coalizione Civica («coalición cívica»).

Se negaban a identificar su organización como «un partido izquierdista más» y empezaron a moldear su identidad planteando una fórmula horizontal, sin jerarquías: el programa electoral y los estatutos de la asociación se decidieron mediante un proceso participativo y, con el mismo método, Coalizione Civica seleccionó a sus candidatos mediante unas primarias abiertas (siguiendo el ejemplo de las primarias ciudadanas de Podemos). Fue la ocasión para que muchos ciudadanos participaran en un auténtico laboratorio político del municipalismo cuyo objetivo era reunir las mejores prácticas políticas y sociales de la ciudad, dando prioridad a las necesidades de la ciudad frente a las de cada experiencia individual.

Pese a la notoria indiferencia de los medios de comunicación locales que cubrían la campaña electoral, Coalizione Civica llegó a obtener un 7% de los votos y a elegir seis representantes en las instituciones locales: dos miembros del Ayuntamiento y también un miembro en cuatro de los seis consejos de barrio de Bolonia. Pero, además del mero resultado electoral, es fundamental mencionar un elemento para comprender plenamente el resultado de Coalizione Civica en las primeras elecciones a las que concurría: esas seis personas venían de experiencias políticas muy distintas y variadas como partidos de izquierdas, movimientos ciudadanos por la educación pública, movimientos sociales y espacios sociales ocupados. Todos estos mundos pasaron

a formar el universo que Coalizione Civica logró reunir, creando un puente entre las diferentes opiniones y tradiciones políticas con el fin de conquistar —o, mejor dicho, «recuperar»— la ciudad.

Tras las elecciones de 2016, llegó el momento de construir una estructura interna sólida y eficiente, y, al mismo tiempo, tan horizontal como fuera posible. En primer lugar, Coalizione Civica, además de ser una asociación formal de ciudadanos, es lo que en Italia se denomina lista cívica (la definición de una lista electoral que se presenta a unos comicios locales, no tiene ninguna conexión oficial con ningún partido político de ámbito nacional y hace campaña principalmente sobre asuntos locales). En la historia de la ciudad, ni una sola lista cívica había durado más de una cita electoral. Nuestro objetivo era cambiar esa tendencia creando un espacio de acción política ajeno a los partidos políticos de ámbito nacional que perdurara en el tiempo. Un espacio de conexión entre las luchas sociales que trabajara de abajo arriba y de arriba abajo en el plano institucional. Un espacio que pudiera ser el hogar común de cualquier ciudadano que desee contribuir a una lucha de poder dual para remodelar la ciudad.

Por eso, redactamos los estatutos de la organización y planeamos nuestras acciones en «grupos territoriales» (divididos por barrios) y «grupos temáticos». Además, decidimos que cada puesto de liderazgo de la organización debía ocuparse según una diarquía basada en el género. Muy pronto, en otras ciudades surgieron organizaciones que imitaban abiertamente la estructura y la estrategia de Coalizione Civica: la más célebre y exitosa de ellas es nuestra «hermana» Coalizione Civica Padova, que se creó en 2017 e, inmediatamente, entró en el gobierno local tras participar por primera vez en las elecciones municipales de Padua. El modelo común es el de un «civismo político», que puede parecer un oxímoron y que, por el contrario, representa un planteamiento radicalmente nuevo de la acción de izquierdas: la confluencia de experiencias, organizaciones y biografías diferentes es el abono que permite que cada participante conserve su propia experiencia y lenguaje, y, aun así, pueda comunicarse y colaborar con los demás. Nos gusta decir que todos renunciamos mutuamente a ponernos los «uniformes» políticos personales para ponernos el uniforme común de Coalizione Civica.

En todos estos años, además de forjar alianzas con cientos de activistas de entornos enormemente diferentes, hemos logrado influir en la opinión pública de la ciudad sobre algunos asuntos: desde la necesidad de reducir las desigualdades hasta el derecho a la vivienda; desde los derechos de los trabajadores hasta la lucha ecologista; desde la movilidad sostenible hasta la lucha por la educación pública, etc. Además de nuestras actividades diarias, nuestro objetivo a largo plazo es construir una hegemonía política nueva y radical en Bolonia.

Durante los cinco primeros años de presencia en el Ayuntamiento, Coalizione Civica estuvo en la oposición del gobierno del Partido Democrático, con el alcalde Virginio Merola. El lema de nuestro mandato era «gobernar desde la oposición» (#governaredallopposizione), que significaba que nuestro objetivo principal era intentar buscar todas las maneras posibles de hacer virar la agenda de la administración tan a la izquierda como fuera posible. Evidentemente, no siempre fue fácil, pero nuestra lucha ha dado algunos resultados tangibles: una de nuestras mayores victorias fue salvar un bosque urbano, Prati di Caprara, del cemento. Gracias a una sólida alianza con un grupo de comités ciudadanos, logramos proteger un pulmón verde de más de dieciocho hectáreas con árboles y plantas de la construcción de centros comerciales, edificios residenciales y un aparcamiento privado con varias plantas. Lo que hace tres años era el proyecto oficial del gobierno para esa zona es ahora impensable y toda la ciudad es consciente de esta batalla ecologista. Y eso, en nuestra opinión, es un buen ejemplo de hegemonía.

Además de centrarse en las luchas locales, Coalizione Civica siempre tuvo claro que la acción de un movimiento municipalista debe estar relacionada con los contextos nacional y europeo. Estamos orgullosos de formar parte de la red Fearless Cities y mantenemos buenas relaciones con otras organizaciones del continente entero, de Barcelona a Barletta, de Ámsterdam a Nápoles, de Turín a La Coruña, etc. Aun así, siempre hemos considerado importante garantizar el pluralismo interno y que cualquier miembro de nuestra organización sea libre de adherirse a cualquier otro espacio o proyecto político mientras no compita directamente con Coalizione Civica en el ámbito local.

De gobernar desde la oposición a gobernar desde el gobierno

2021 fue el año en el que Coalizione Civica logró por fin formar parte del gobierno municipal: tras meses de negociaciones con el que entonces era candidato del Partido Democrático, Matteo Lepore, Coalizione firmó un acuerdo electoral público por el que el futuro alcalde se comprometía a trabajar en siete puntos clave durante el mandato siguiente. Este proceso fue totalmente público y abierto al debate y a las aportaciones de los simpatizantes y también, por supuesto, de los miembros de la organización. La esencia del acuerdo firmado es fruto de años de elaboración programática mutua entre los grupos de trabajo de Coalizione Civica y su autoría es colectiva. Así, conseguimos recopilar las demandas y las contribuciones de muchos de los movimientos municipales y las pusimos directamente en la agenda del gobierno. Tardamos cinco años, pero lo logramos. Evidentemente, no toda nuestra agenda se ha trasladado al programa electoral, pero durante el proceso de negociación, liderado por Emily Clancy (ahora teniente de alcalde de

Bolonia), obtuvimos muchos de los resultados que deseábamos. Y no se acabó ahí: en las últimas elecciones, Coalizione Civica cuadruplicó el número de miembros electos en las instituciones locales. Mientras que en 2016 contábamos con dos representantes en el Ayuntamiento y cuatro en los consejos de barrio, hoy tenemos a tres de nuestros miembros electos en el Ayuntamiento, doce en los consejos de barrio y, como ya hemos comentado, la tenencia de alcaldía de Bolonia.

Ahora afrontamos una nueva fase llena de nuevos retos y perspectivas. Al formar parte del gobierno municipal, tuvimos que adaptar nuestra estrategia para el cambio social y político. Además, estamos atravesando un proceso de reestructuración de la organización para ajustarnos mejor a esta fase. Durante la última campaña electoral abrimos nuestras puertas para conocer a otros camaradas, algunos de los cuales se convirtieron también en candidatos de nuestras listas. Por eso, durante la campaña nos llamamos Coalizione Civica Ecologista Coraggiosa e Solidale ('coalición cívica ecologista valiente y solidaria'). Ahora tenemos que consolidar estas nuevas relaciones para continuar creciendo y ampliando nuestra capacidad de impacto en la ciudad. Gracias a nuestro trabajo en los últimos seis años, logramos desplazar el eje político de la administración municipal —después de al menos una década de conservadurismo excesivo, por así decirlo— mucho más hacia la izquierda.

Justo un año antes de las elecciones, muchos pensábamos que formar una coalición con el Partido Democrático era una misión imposible. Ahora nos encontramos en esta nueva empresa y podemos afirmar que la satisfacción de poder influir activamente en las políticas municipales supera los retos y las dificultades a los que nos enfrentamos. Creemos que, desde esta posición de poder, servimos mejor a la ciudad. Aun así, no queremos el poder a cualquier precio: trabajar en las contradicciones sin contradecirse a uno mismo no es tarea fácil, pero creemos que vale la pena intentarlo. Solo los próximos cinco años nos dirán si acertamos. De momento, lo que intentamos conseguir en Bolonia es algo que interpela a todo el país: en una época en la que la izquierda debe enfrentarse a los partidos de derechas más brutales desde la Segunda Guerra Mundial y los partidos socialdemócratas suelen estar muy contaminados por las emanaciones de los valores neoliberales, Coalizione Civica intenta señalar que existe una alternativa y que los antiguos valores de nuestro legado comunitario y socialista siguen muy vigentes. Solo necesitan adaptarse un poco a nuestra época. Creemos que juntos aún podemos ganar.



¿POR QUÉ EL PODER LOCAL?

Maga Miranda

Tengo 30 años, los mismos años que, desde la revuelta social de octubre del año 2019 en Chile, se han instalado como los grandes responsables de la desigualdad y el abuso que hoy afectan a nuestro país. «No son 30 pesos, son 30 años» fue una de las consignas que logró sintetizar el descontento expresado en diversas formas de manifestación que desde octubre sacudieron diferentes puntos de nuestro país, frente al alza de treinta pesos en la tarifa del metro de Santiago. Treinta años marcados por los gobiernos de la Concertación, otrora opositores a la dictadura cívico-militar que gobernó en el país durante diecisiete años, desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973; y que asumieron un Chile desafiado a recuperar la democracia con el plebiscito de octubre del año 1988, con la promesa de traer, además, justicia y reparación a las miles de víctimas del genocidio de Estado perpetrado por Augusto Pinochet y la derecha cómplice.

La promesa de los partidos políticos de la Concertación era que la «alegría ya viene»; sin embargo, pese a los índices macroeconómicos, al per cápita y a nuestra participación en la OCDE, la alegría no llegó; al contrario, llegó la desigualdad, la flexibilización y la precarización laboral, el encarecimiento del costo de la vida y la sensación de que, a pesar de que cada uno hiciera su máximo esfuerzo, el sueldo no alcanzaba para cubrir gastos básicos, como vivienda, salud o educación.

Y fue en la educación donde la crisis estalló con más ímpetu la primera vez desde el retorno a la democracia, porque, si bien las agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos estuvieron siempre demandando justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, lo cierto es que no lograron ser demandas masivas, como sí lo fue la denominada *Revolución Pingüina* el año 2006, movimiento del que fui parte cuando estudiaba en la enseñanza media. Con esa revolución se impugnó la Constitución ilegítima de Pinochet por primera vez. Y también la fracasada política de la municipalización de la educación pública, con criterios de mercado.

A partir de ese momento, los estudiantes secundarios se instalan, como actores y sujetos políticos, en un movimiento que solo fue creciendo con el

pasar de los años y, en parte, también debido al continuo «ninguneo» del que fuimos objeto por parte de las autoridades gubernamentales de entonces.

Fueron también los «pingüinos» (los estudiantes de la enseñanza media, al usar uniformes azul marino y blanco, reciben ese apodo por parte de la ciudadanía) los que, evadiendo el metro de Santiago, se saltaron el primer torniquete en las masivas jornadas de protesta y, por tanto, quienes inauguraron la revuelta de octubre en 2019. Una revuelta que nos tiene hoy *ad portas* de quizás uno de los procesos democráticos más importantes de las décadas recientes: escribir una nueva carta fundamental en una Convención Constitucional compuesta en un 100% por miembros elegidos por sufragio universal, con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios.

Es importante recalcar que estamos asistiendo a la apertura de un nuevo Chile, uno que despertó y que se expresó con claridad contra un modelo económico, social y político excluyente; que se trata de una oportunidad para construir juntos un Chile nuevo, que nos dé voz y espacio a quienes hemos sido sistemáticamente excluidos de las grandes decisiones, lo que a su vez conlleva una responsabilidad enorme.

Lo que se eligió en el mes de mayo del pasado 2021 demostró ser algo mucho más allá que un constituyente, un gobernador regional, un alcalde o un concejal. Se eligió la oportunidad de construir el país en el que queremos vivir los próximos años, de revertir el ciclo antidemocrático y salir de la posdictadura, de desprendernos desde el gobierno local hasta la constitución del legado de Pinochet.

Vengo del movimiento social: a los 15 años participé de forma activa en la Revolución Pingüina; luego, en mi época de estudiante universitaria, me tocó ser parte de la movilización por la educación superior más grande desde el retorno de la democracia en el año 2011, cuando llegamos a ser un millón de estudiantes movilizados. Luego, se reactivó la lucha feminista en una oleada contra la violencia, por los derechos sexuales y reproductivos, por la igualdad en el mayo feminista el año 2018. Durante esos mismos años, inicié mi activismo en defensa de los barrios y del patrimonio cultural en una organización comunitaria cuyo objetivo es defender la vida de barrio frente al avance de la especulación inmobiliaria en una de las crisis más agudas en la comuna, donde hoy tengo el honor y el compromiso de llevar adelante una concejalía, Estación Central.

En ese marco, enfrentar la decisión de ir por una concejalía tuvo más sentido que nunca. Es decir, ponerse al servicio de un proyecto colectivo con horizonte de transformación, de superación del modelo neoliberal, acompañando

el proceso de redacción de una nueva constitución, convertía la idea de contribuir desde el poder local a la apertura de la democracia y facilitar la participación ciudadana a través de cabildos en más urgente, pero también necesaria. Incluso, entendiendo que, si queremos que se produzcan los cambios que anhelamos, es necesario participar en todos los frentes; en el quizás pequeño cargo del concejo municipal, pero también en la redacción de la nueva constitución y el debate presidencial.

El día 4 de julio de 2021, tuvo lugar la ceremonia de instalación de la Convención en un hecho histórico, inédito, con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios. Tengo la certeza de que ese proceso abrirá nuestra democracia, cambiando las reglas del juego, para que los marginados hasta el día de hoy seamos quienes empezemos a tomar la dirección del timón de nuestro país. Tras ello vino el debate en torno a las elecciones presidenciales de noviembre del mismo año. Un debate con dos objetivos: por una parte, resguardar el proceso constituyente, y, por otra, acompañar desde el poder ejecutivo al mandato popular de transformaciones planteadas en el estallido social, con reformas importantes en el sistema de pensiones, en la recaudación tributaria y en la redistribución del poder.

La oportunidad con la que hoy contamos al tener el Gobierno de Gabriel Boric, más allá de la acción de los partidos políticos, es la de aperturar una democracia real que logre cumplir con estos dos objetivos y que no olvide que la sabiduría de nuestros pueblos nos ha impuesto un estándar democrático que debe estar por sobre los mínimos legales con los que solía jugar la antigua política. Asistimos a la muerte de lo viejo y al nacimiento de lo nuevo, y la forma en la que hacemos esta transición podría marcar la forma de hacer política para siempre en nuestro país.

UN VIAJE POR LA HISTORIA DEL MUNICIPALISMO

EL MUNICIPALISMO TIENE HISTORIA. APRENDAMOS DE ELLA

Kate Shea Baird

En los últimos años, el movimiento municipalista mundial ha dado grandes pasos hacia delante. Hemos tejido una red internacional y diversa de activistas, movimientos, concejales, alcaldes y partidos comprometidos con la construcción del poder desde abajo. Hemos creado una identidad municipalista compartida (con ese nombre o no) cada vez más aglutinadora. Hemos compartido historias, organizado talleres e intercambiado políticas, con el objetivo de aprender los unos de los otros. Hemos desenterrado e integrado la teoría municipalista, sobre todo de Murray Bookchin, lo que nos proporciona un referente al que podemos aspirar en nuestra práctica diaria.

La primera cumbre Fearless Cities y el libro correspondiente sirvieron para recopilar y registrar muchos de estos hitos. Pero el municipalismo no se inventó en 2017 ni en 2015. Tiene una historia larga y amplia en muchos pueblos y ciudades de todo el mundo; por ello, lo que planteo es que estas experiencias deben ser una de las principales fuentes de conocimiento e inspiración de nuestros movimientos.

Vale la pena recordar los motivos para valorar nuestra historia: en primer lugar, aunque nuestro movimiento evoluciona y crece deprisa, las experiencias contemporáneas, especialmente de municipalistas en el gobierno, son aún escasas y están muy espaciadas. Echar la vista atrás es, como mínimo, una manera de multiplicar el conjunto de prácticas de las que podemos aprender. En segundo lugar, las experiencias históricas también presentan ventajas añadidas con respecto a las contemporáneas. Por muy prosaico que pueda parecer, los primeros movimientos y gobiernos municipalistas de nuestros países, si son relativamente recientes, quizá se hayan enfrentado a contextos jurídicos y culturales más parecidos al nuestro que las experiencias contemporáneas en la otra punta del mundo. Es más, seguro que los activistas, concejales y alcaldes que participaron en esas experiencias dispondrán de más tiempo y energía para compartir sus experiencias que quienes «practican»

el municipalismo hoy; todos sabemos que el tiempo y la energía limitados son uno de los obstáculos principales para la colaboración municipalista. Por último, y aún más importante, los ejemplos históricos tienen la ventaja de la perspectiva que solo ofrecen el tiempo, el análisis y la reflexión detenida. En estos casos es donde podemos identificar con más claridad lo que funcionó y lo que no, y valorar el legado del proyecto municipalista en el pueblo o la ciudad correspondientes años, o décadas, más tarde.

Hay que dejar claro que los municipalistas actuales, que afrontan muchas dificultades, no tienen el lujo de reinventar la rueda. Aun así, no podemos contemplar la historia como una guía práctica como tal. La naturaleza misma del municipalismo implica que cada experiencia concreta sea singular en su contexto local. Lo que sí podemos y debemos buscar son ejemplos de cómo las distintas experiencias abordaban los dilemas y los temas recurrentes del municipalismo radical: la relación entre instituciones, movimientos y ciudadanía; si hay que participar en la política supramunicipal y cómo; la función de los líderes y los límites de la representación; el delicado equilibrio entre la transparencia y la atención y la protección propias; las presiones de los poderosos intereses económicos y, en consecuencia, cómo comunicarse ante un medio hostil. Observar cómo las distintas estrategias se han desarrollado en la práctica nos brindará herramientas para explorar nuestra toma de decisiones y, lo que quizás sea más útil, gestionar eficazmente las consecuencias de las decisiones que tomemos.

Si hasta la fecha nuestro movimiento ha ignorado su historia, estoy segura de que es más por falta de conocimiento que por falta de interés. Por supuesto, esto no es casualidad. Recordamos a Thatcher y Reagan no solo por su relevancia histórica, sino porque se han empleado muchos recursos económicos, políticos y culturales en conservar su legado. Fundaciones e institutos con su nombre, libros y documentales biográficos, conferencias y seminarios académicos ayudan a los neoliberales de hoy a mantener vivas su agenda política y la comunidad que la rodea. Por el contrario, se han publicado pocos libros sobre la experiencia de los radicales que gobernaron en grandes ciudades británicas y estadounidenses durante el mismo periodo. Estos libros los escribieron los mismos activistas y concejales o académicos que simpatizaban con ellos. Debemos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a quienes emprendieron esa tarea impagable de documentación y testimonio. Y lo hicieron con un espíritu activista, para que hoy podamos acceder a las lecciones municipalistas del pasado. Está en nuestras manos procurar cumplir con nuestro deber de registrar nuestras propias experiencias para los municipalistas del futuro.

Bibliografía

Londres:

- › GLC Story (Historia del Consejo del Área Metropolitana de Londres).
<http://glcstory.co.uk/>
- › HATHERLEY, Owen. (2020). *Red Metropolis. Socialism and the government of London*. Penguin Random House.
- › MACKINTOSH, Maureen; WAINWRIGHT, Hilary (1987). *A Taste of Power. The Politics of Local Economics*. Verso Books.
- › SOFER, Anne. (1987). *The London Left Takeover*.
- › FORRESTER, Andrew. *Beyond Our Ken: Guide to the Battle for London*. HarperCollins Distribution Services.
- › LANSLEY, Stewart; GOSS, Sue; WOLMAR, Christian. (1989). *Councils in Conflict: The Rise and Fall of the Municipal Left*. Palgrave Macmillan.

Estados Unidos:

- › CLAVEL, Pierre. *Activists in City Hall*
- › «Progressive Cities and Neighborhood Planning». Colección de la biblioteca de Cornell
<https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/40488>
<https://hdl.handle.net/1813/40484>

España:

- › HANCOX, Dan. (2014). *The Village Against the World*. Verso.
- › MARTÍNEZ, Guillem. (2009). *Barcelona rebelde*. Debate.
- › BOOKCHIN, Murray. (1998). *The Spanish Anarchists. The Heroic Years 1868-1936*. AK Press.



EL SOCIALISMO MUNICIPALISTA DE LOS AÑOS OCHENTA: LA EXPERIENCIA DE LONDRES

Owen Hatherley

El Consejo del Área Metropolitana de Londres (CAML) se fundó en los años sesenta, la época del *Swinging London* y de los primeros destellos de gentrificación en los barrios del centro, como Camden, pero también la época de un fuerte descenso de la población en la metrópolis. El CAML lo concibió un gobierno conservador, pero tuvo cierto apoyo de la izquierda porque reconocía que el Londres definido jurídicamente y el Londres de verdad ya no eran el mismo sitio y los barrios de la periferia pagaban sus impuestos por el centro de la ciudad, al que se desplazaban y recurrían. No obstante, gran parte de la opinión laborista se oponía a él, como Isaac Hayward, jefe del Consejo del Condado de Londres (CCL) cuando se eliminó en 1964. La oposición se debía sobre todo a un miedo comprensible a que los conservadores se hicieran con Londres, que desde los años treinta había sido una ciudad estado socialdemócrata de partido único. Y eso es exactamente lo que ocurrió. O, mejor dicho, el área metropolitana de Londres se convirtió en una marginada, en un barómetro, donde los partidos principales se alternaban en casi todas las elecciones desde 1981. Los laboristas iban camino de desplomarse en las siguientes elecciones previstas cuando en 1986 se suprimió el CAML por un decreto gubernamental. Este movimiento, sin precedentes en una democracia, dejó a Londres como la única capital del mundo sin gobierno local electo.

Pero, cuando la mayoría de la población de Londres oye las iniciales «CAML», piensa —si piensa en algo— en los cinco años en los que estuvo controlado por la izquierda radical, entre 1981 y 1986, bajo el mando de Ken Livingstone.

Los tabloides y la derecha laborista de la época los veían como los locos (la «izquierda lunática») que se apoderaban del manicomio; los socialistas

jóvenes de hoy, nacidos en su mayoría en los años ochenta y noventa, lo recuerdan como un periodo en el que sus antecesores construyeron un socialismo nuevo y viable. Muchas veces, la izquierda laborista prefiere buscar sus raíces en figuras más antiguas, como Aneurin Bevan, pero la continuidad es evidente. A la cabeza del Partido Laborista de izquierdas que rozó la victoria en 2017, pero sufrió una derrota estrepitosa en diciembre de 2019, estaban Jeremy Corbyn, diputado laborista del norte de Londres elegido en 1983, que era próximo a los debates del CAML y compartía sus ideas; Diane Abbott, que había sido jefa de prensa del CAML, y, por supuesto, John McDonnell, el segundo al mando y titular de finanzas del CAML. Con algo de retraso, ya que a principios de los años ochenta periodistas como Neal Ascherson veían en Ken Livingstone a un futuro líder laborista, la Nueva Izquierda del CAML asumió la dirección del Partido Laborista, como siempre había querido hacer. Solo les costó 34 años.

El mismo Livingstone, poco después de llegar al poder en 1981, declaró en el *Marxism Today* que el nuevo grupo dirigente del CAML era «la generación post-1968 de la política». Es decir, era maravillosa y explícitamente antirracista, antihomófobo, antiimperialista, antisexista; era festivo, creativo y propagandístico. A ese grupo le encantaban los murales, la música pop, la ropa y los colores llamativos, despreciaba la nacionalización del Estado y desviaba dinero a cooperativas y comunas. También era mucho más próximo a la izquierda extraparlamentaria y rechazaba la distinción tradicional de los laboristas entre izquierda «legítima» e «ilegítima». Gran parte de las figuras londinenses destacadas de la nueva izquierda laborista eran socialistas no alineados con ciertas simpatías por el marxismo, como Ken Livingstone, John McDonnell, Valerie Wise, Robin Murray, Mike Cooley, Linda Bellos, Hilary Wainwright, Doreen Massey y Sheila Rowbotham, pero algunos habían formado parte de grupos trotskistas. Ted Knight, que conquistó el distrito de Lambeth, y Bernie Grant, que hizo lo mismo en Haringey y fue el primer líder negro de un consejo londinense desde John Archer en la década de 1910, habían sido miembros de la Liga Laborista Socialista, que los laboristas prohibieron en los años cincuenta.

Pero hay otra manera de ver la época del CAML: como el principio de la creación de la capital multicultural de las «industrias creativas» que ahora conocemos. Livingstone, una figura mucho más cuestionable en sus dos mandatos como alcalde de Londres entre 2000 y 2008, defendía lo siguiente ante Andy Beckett en la década de 2010: «No queríamos ver cómo Londres continuaba cayendo, [aunque] no creo que la viéramos haciendo frente a Nueva York como acabó sucediendo». Eso es precisamente lo que ocurrió, aunque no de la manera que había imaginado en 1981.

El proyecto de la Nueva Izquierda en el CAML tenía varias facetas y es oportuno dividirlos en un programa industrial y un programa propagandístico. A pequeña escala, Livingstone consideraba que la replantación de parterres, después de que el departamento de parques del CAML hubiera creado jardines tristes y vacíos en los años setenta, era un ejemplo de socialismo local en acción que combinaba el cuidado y el compromiso con el espacio público, el disfrute de la vida civil y la creación de empleos cualificados, todo con una simple política. En el otro extremo de la escala, el presupuesto elevado del CAML, siempre meticulosamente equilibrado por McDonnell, se invirtió sobre todo en el Consejo Empresarial del Área Metropolitana de Londres (CEAML), un experimento de «planificación de personas». Livingstone, McDonnell y el director del CEAML, Mike Cooley, lo concibieron como una manera de crear «monopolios estatales basados en el control de los trabajadores y la autogestión de estos [para] alejarse cualitativamente de los horribles ejemplos existentes, totalmente indiferentes a los consumidores, que son los responsables de la hostilidad contra la empresa pública que innegablemente existe». London Transport, bajo el control del CAML, también formaba parte del experimento: por primera vez en décadas, se hizo una inversión adecuada y se incrementó el número de usuarios con una política de billetes baratos que se llamó *tarifa justa* y que el consejo tory del distrito periférico de Bromley tumbó de manera despreciable en los tribunales.

Las zonas de la industria ligera que habían ido a menos y habían cerrado se rejuvenecieron con cooperativas y pequeñas empresas. Y eso se combinó con los «planes populares» para las antiguas zonas de la industria pesada. Se elaboró un «plan popular» detallado para crear viviendas y empresas cooperativas en la enorme zona industrial de Royal Docks, en Newham (el último muelle cerró en 1980). Y el CAML compró sitios eventuales para llevar a cabo planes similares en Coin Street, cerca del Teatro Nacional; Battlebridge Basin, junto al canal de King's Cross, y la cervecería Courage en el norte de Southwark. En cada caso, las activistas del CEAML Hilary Wainwright y Maureen Mackintosh dejaron claro que «estos proyectos no habrían existido de no ser por un pasado de lucha organizada por parte de los grupos locales». Mike Cooley, director del CEAML, había sido el principal impulsor del plan Lucas de 1976, cuyo objetivo era convertir Lucas Aerospace en una empresa autogestionada por un colectivo de trabajadores y que produjera bienes útiles y no letales. En su informe póstumo del CEAML, Mackintosh y Wainwright rehusaron cantar victoria por nada de esto: eran experimentos, nada más, y no se había alcanzado nada de manera concluyente, aunque miles de personas trabajaban para el CEAML de un modo u otro.

El CEAML funcionaba desde un despacho de Elephant and Castle y no desde la sede antigua y grandiosa del CCL en el Salón Condal, para ser «más

accesibles, nada de largos pasillos». Su crítica del antiguo socialismo municipal era extremadamente generalista: los autores de un informe del CEAML afirmaban que los planes populares eran «una respuesta al supuesto hecho de que la mayoría de londinenses ha sido... simplemente una víctima de la planificación». Sin embargo, su trabajo sigue considerándose un programa serio y constructivo, algo que vale la pena recordar teniendo en cuenta que las políticas del CAML se consideraban, por aquel entonces, «locuras». Pero para entender esa reacción, hay que fijarse en sus políticas sobre raza, género y cultura, que eran la principal diana de los ataques constantes de los tabloides de la época.

Durante los disturbios de Brixton de 1985, provocados por una agresión policial de carácter racista y, sin duda, el mayor conflicto civil en el Londres de la posguerra, el nuevo presidente del CAML fue visto, como se señaló con horror en *The Times*, «en las calles de Brixton en medio de los disturbios». Defendió públicamente y sin reparos a los manifestantes y rechazó la invitación a la boda real que se celebraba en otro punto de la capital para poder estar en la «primera línea» de Brixton. Al pensar en la enorme y aparentemente incomprensible popularidad de la que gozaban las políticas del CAML en el centro de Londres —que apoyaban claramente el Congreso Nacional Africano, la unidad de Irlanda, el Black Power y los derechos de los homosexuales (todos ellos demonizados en la prensa, mucho más que la economía de McDonnell)—, Livingstone sugirió que «a lo mejor todos los racistas se han ido a vivir a Finchley o Croydon South». No era una declaración moralista, sino política y práctica, tal como explicaría en *New Left Review* en 1983: «Siempre he pensado que la concentración casi exclusiva del Partido Laborista en los hombres blancos de clase trabajadora y con empleo era un punto débil. Soy de la opinión de que no se puede transformar la sociedad partiendo solamente de esa base. Hace falta una coalición que incluya a trabajadores cualificados y no cualificados, desempleados, mujeres y personas negras, además de las minorías sexualmente oprimidas..., y eso significa que tenemos que cambiar».

Este tipo de declaraciones a menudo lo enfrentaba a otros experimentos del socialismo municipal radical que las autoridades locales de la época llevaban a cabo y a cuyas «tasas» (el dinero que podían recaudar legalmente mediante impuestos locales) el gobierno de Thatcher había puesto límite. Al constatar la hostilidad de algunos miembros del Consejo de Liverpool contra su apoyo a los derechos de los homosexuales, señaló que en Londres había unos cientos de liverpulianos que habían huido de la homofobia de su ciudad.

Es popularmente conocido que la revolución cultural del CAML dio lugar a una serie de festivales, conciertos y actos públicos. Los vestíbulos, las terrazas y

los cafés del Royal Festival Hall del CCL se abrieron al público todo el día como un «salón de Londres», inspirándose en la Kulturhuset de Estocolmo. El CAML bajo el mando de la Nueva Izquierda acabó totalmente con el puritanismo cultural que siempre había acechado al Partido Laborista de Londres. Los primeros socialistas municipales de Londres, el Partido Progresista de los años ochenta, se dedicaron a eliminar los pubs y cerraron todas las salas de conciertos que pudieron, lo que se convirtió en un mero recuerdo a principios de los ochenta, cuando las subculturas bohemias que habían surgido en la capital (y se habían trasladado a ella) desde los años sesenta probaron el sabor del poder. El punto álgido se alcanzó en un festival celebrado en julio de 1984 en el mismo Salón Condal durante la huelga de mineros y es imposible no continuar sintiendo un escalofrío en el espinazo al leer cómo lo describían Maureen Mackintosh y Hilary Wainwright.

Para quienes habíamos trabajado en el Salón Condal desde los primeros días del gobierno laborista, uno de los cambios impactantes que se habían producido era el tipo de personas que iban allí y caminaban por sus pasillos. Gradualmente, los oficiales y dignatarios que al principio visitaban el edificio fueron reemplazados por una muestra representativa de londinenses, desde punks y rastas, por un lado, hasta entidades de jubilados bangladesíes, por el otro; todos ellos nada intimidados por su ambiente majestuoso y tratando el lugar como si fuera suyo. En el festival de 1984, este aspecto del cambio en el Salón Condal alcanzó un cenit exuberante. A lo largo del día, el Salón Condal fue un hervidero de punks, cabezas rapadas, rastafaris y otros londinenses. Acamparon en la gran escalinata (antes reservada exclusivamente a personalidades) y en los pasillos revestidos de madera de la planta principal. La cámara del consejo se utilizó para celebrar un debate abierto sobre la eliminación del CAML, que en algún momento dejó espacio a los discursos de Anne Scargill y las viudas de los mineros. El ambiente era extraordinario, nadie en el Salón Condal había visto nada igual.

Fue una exhibición de democracia y accesibilidad, un espejismo pasajero de la ciudad que la Nueva Izquierda de Londres quería construir. Nunca sabremos si habría perdurado, pero está claro que a Margaret Thatcher la aterrorizaba que pudiera hacerlo. Livingstone gobernó en una ciudad que viraba hacia la izquierda en un país que había girado claramente hacia la derecha. Las encuestas y las elecciones locales entre 1983 y 1986 mostraban que el giro a la izquierda de la capital era muy popular dentro de sus confines. Livingstone y el CAML radical querían que Londres fuera un microcosmos de cómo sería un gobierno socialista en el conjunto del Reino Unido. El gobierno lo sabía y lo aplastó.



CHICAGO: DESARROLLO ECONÓMICO CON HAROLD WASHINGTON (1983-1987)

Pierre Clavel

«Ser progresista» significaba en realidad llevar a cabo políticas redistributivas y participativas y tenía el potencial de propagarse por el gobierno. En Chicago, durante la alcaldía de Harold Washington, la unidad más importante encargada de eso era el Departamento de Desarrollo Económico (DDE), en el que el comisionado Robert Mier dio una serie de pasos con el fin de retener la industria. A continuación, enumeraré y comentaré dichos pasos.

Chicago es una ciudad complicada

Washington era un alcalde carismático y hábil, con un programa sólido al que, por motivos raciales, se oponía una mayoría blanca del Ayuntamiento que desde hacía mucho tiempo era leal a la maquinaria consolidada del Partido Demócrata. El programa de Washington priorizaba la igualdad racial en la distribución de los servicios y también un planteamiento del desarrollo económico basado en el vecindario y centrado en las fábricas pequeñas y medianas.

Ambos objetivos fueron un golpe en la política nacional y la historia local, pues la segregación racial en la vivienda y en otras políticas y servicios estaba muy arraigada. En general, la industria no contaba con el favor de los fondos privados ni de la política nacional. Ante estos obstáculos, el gobierno de Washington no logró unos beneficios considerables ni visibles. La idea mayoritaria era que las políticas de Washington, aunque las encabezara un alcalde carismático, estaban obsoletas y eran irrelevantes para las cuestiones de actualidad.

Respuesta a los cierres de plantas

Sin embargo, el esfuerzo que se hizo en Chicago para retener la industria fue destacable. Con los años, habían aparecido el apoyo institucional y un movimiento social basado en la comunidad y, gracias a Mier y el DDE, así como a la

implicación de otros departamentos, la ciudad se adaptó a la situación. Será ilustrativo describir la situación:

- Mier había llegado a Chicago en 1975 para enseñar ordenación urbana en la Universidad de Illinois-Chicago (UIC) y, como director del Centro para el Desarrollo Económico Urbano, para divulgarla entre las organizaciones comunitarias. Se implicó en el trabajo de las organizaciones vecinales y estableció alianzas con sus líderes activistas, llevándoles estudiantes para trabajar como becarios y, más adelante, colaborando con ellos en proyectos de investigación y actuación. Esta cooperación entre académicos y activistas era poco habitual, pero el éxito de Mier ya llamaba la atención antes de que entrara en el Ayuntamiento.
- El movimiento social estaba representado por organizaciones vecinales que se habían creado alrededor de unos ejes orientados a unos objetivos y buscaban una financiación que implicara a varias fundaciones locales. CANDO, la red Rehab y CWED fueron ejemplos destacados de organizaciones que trabajaban en cuestiones relativas al desarrollo económico de la comunidad (DEC) y demostraron que eran capaces de trabajar con Mier en el Ayuntamiento.
- Una cuestión fundamental para los activistas de todo el país era la resistencia a los cierres de plantas. En las fábricas había presión, despidos y cierres, que empezaron a incrementarse a finales de los años setenta. En Chicago, se prestó mucha atención a cinco grandes plantas siderúrgicas de la zona sureste que despidieron a algunos de sus trabajadores durante la campaña de Washington en 1983. También se mostró interés por las fábricas más pequeñas, algunas de las cuales parecían casos en los que se podía intervenir, como adquisiciones por parte de los trabajadores, la comunidad o la ciudad. Fue objeto de atención Dan Swinney, primero representante sindical y luego sindicalista del West Side de la ciudad, que estaba detrás de la publicación de la revista *Midwest Labor Review*.
- Muchas personas que habían sido activistas vecinales ocuparon cargos en el Ayuntamiento y demostraron su capacidad para colaborar con la red vecinal; Mier fue una de estas personas. Pero había muchos obstáculos. Las nuevas incorporaciones se enfrentaban a las viejas glorias leales al mecanismo interno del Ayuntamiento, mientras que en la ciudad había una estructura elaborada, aunque derrotada, que veían como la «coalición del crecimiento» estaba liderada por las élites y los aliados de la maquinaria en sectores como el desarrollo inmobiliario, que Washington contaba con contravenir. Kari Moe, asesor y aliado clave de Washington, había descrito el trabajo en el Ayuntamiento como «ir a la guerra con el ejército de otro».

- Pero también tenían apoyos. Las fundaciones locales creían en el interés por las fábricas pequeñas, basado en el vecindario, que Washington apoyaba. Los activistas sindicales fueron otra base de apoyo. Un ejemplo destacado fue Dan Swinney, que había liderado el activismo fabril en el sindicato de los obreros siderúrgicos y más adelante creó el Centro para la Investigación del Trabajo y la Comunidad (CITC) y una publicación, *Midwest Labor Review*. Esta iniciativa más bien pequeña mantenía viva una parte del apoyo a una política económica descentralizada, aunque, en términos generales, la actividad sindical permaneció vinculada a la «maquinaria Daley» y sus intentos de resurgir tras la muerte de Washington.
- Una vez en marcha después de que Washington saliera elegido, el DDE y el Ayuntamiento implantaron una serie de políticas que reforzaban muchos de los diferentes intereses descentralizadores:
 - › El DDE creó la Iniciativa Local para la Retención de la Industria (ILRI), apenas media docena de agencias de desarrollo comunitarias que, aparentemente, eran las más organizadas y capaces entre los organismos dedicados a la orientación de «empleos no inmobiliarios» de la política.
 - › La planificación de los distritos industriales, un proyecto iniciado por una joven urbanista y activista, Donna Ducharme, y el New City YMCA, contaba con el apoyo popular y acabó logrando que Washington asumiera un compromiso que se persiguió en gran medida tras su muerte.
 - › El Grupo de Trabajo del Acero se tradujo en una gran labor de investigación que generó un debate a favor de una presencia industrial en Chicago.
 - › La política de desarrollo laboral se inició bajo el gobierno de Washington y se reconoció su papel en el éxito de los «aciertos» de la ciudad con Richard J. Daley, mucho más tarde.
 - › Tras la muerte de Washington, las fuerzas de la oposición intentaron controlar una narrativa menos esperanzadora, pero, cuando en agosto de 1988 se publicó un ataque pactado en el Tribune de Chicago, varios ejecutivos de algunas fundaciones decidieron contraatacar. La respuesta más destacada fue la creación del Grupo de Acción de Investigación de Políticas (GAIP), bajo los auspicios de la Fundación McArthur: el GAIP era un consorcio de cuatro universidades locales y quince organizaciones comunitarias que, durante varios años del gobierno de Richard J. Daley, ofrecieron periodos de prácticas para apoyar a los barrios.¹

¹Nyden, Philip y Wim Wiewel, "Collaborative Research: Harnessing the Tensions between Researcher and Practitioner" (1992) *The American Sociologist* 23, 4b (Winter) 43-55

Observación

De esta historia surgió un capital intelectual compartido que defendía una política alternativa de desarrollo urbano capaz de ofrecer una alternativa a la «coalición del crecimiento» y una fuerte estrategia central asociada a la maquinaria Daley antes de 1983.

Hasta cierto punto, y para algunos de manera importante y costosa, la coalición vecinal de Chicago se vio sorprendida por la muerte repentina de Washington en noviembre de 1987. Gran parte del capital intelectual estaba intacto, muchas organizaciones e instituciones eran sólidas y estaban aprendiendo a trabajar de forma colaborativa. Sin embargo, es innegable que gran parte de su base cayó en un vacío de liderazgo y el Ayuntamiento se encontró en una posición incierta: con el alcalde en funciones Eugene Sawyer, hubo dieciocho meses de inestabilidad hasta la elección de un sucesor permanente, prevista para junio de 1989. Y, después, Richard M. Daley, hijo del veterano líder de la maquinaria Daley (1955-1976), continuó durante varios años apoyando algunas partes de la estrategia del DDE (aunque al final Jarrett y Ducharme fueron despedidos en 1995).

Este desenlace debería decirnos algo del carácter de las coaliciones progresistas, especialmente por la manera en que el declive de la iniciativa de Chicago estuvo vinculado a estructuras concretas del Ayuntamiento y el sistema de apoyo, que también decayeron —aunque a veces, quizás, crecieron—. Parte de la historia fue la creciente capacidad del Ayuntamiento de «titulizar» lo que habían sido unos ingresos periódicos, que llegaron poco a poco, pero de manera predecible durante varios años. El personal de Daley lo comprendió en los años noventa, con movimientos como la venta de Skyway, una autopista de peaje, y, más adelante, con los derechos sobre la recaudación de los parquímetros municipales. Lo más notorio para los activistas comunitarios fue el uso creciente de la «financiación mediante el aumento de los impuestos» (FAI), por la que las propiedades destinadas a ser reurbanizadas podían «venderse» en función de los ingresos previstos durante un periodo de tiempo. El conjunto de estos proyectos permitió a Richard J. Daley obtener ingresos municipales para «embellecer» la ciudad y así reclamar dólares del turismo, que facilitarían el reembellecimiento del centro de la ciudad, lejos de los vestigios del énfasis del DDE de Washington en las pequeñas fábricas y la prosperidad de los barrios.

LA TRADICIÓN MUNICIPALISTA EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA MODERNA

Pamela Radcliff

En la narrativa tradicional de la modernización política de la Europa occidental, la nación liberal y luego democrática se ha consolidado como el espacio normativo de la ciudadanía, la autoridad y las reivindicaciones. En esta narrativa, la población ha evolucionado de una visión del mundo local implícitamente primitiva a la integración en la nación moderna, impulsada por un proceso de integración estructural dirigido por el Estado. De hecho, gran parte de los movimientos políticos hegemónicos de los siglos XIX y XX situaban al Estado como motor de progreso, arquitecto de la nación y defensor de la ciudadanía y sus libertades. Desde esta perspectiva, el localismo y el provincialismo eran obstáculos para el avance de la historia, reliquias singulares de la estrechez de miras premoderna. Las críticas a este modelo vertical han puesto de manifiesto una dinámica existente más compleja entre las identidades y las instituciones locales, provinciales y nacionales en lugar de un proceso lineal de fusión y consolidación. En concreto, un gran número de estudios sobre los movimientos regionalistas y provincialistas los han situado directamente dentro de la dinámica de modernidad política y construcción nacional.

Sin embargo, se ha prestado menos atención a la función más discreta que los movimientos municipalistas desempeñan en esta dinámica, como un contrapeso sistemático a las fuerzas homogeneizadoras y centralizadoras dominantes de la política española moderna. Desde posturas ideológicas diferentes y en contextos históricos distintos, los movimientos políticos municipalistas de los dos últimos siglos han defendido una esfera política local autónoma como núcleo fundamental del autogobierno, la identidad comunitaria y la participación ciudadana. Aunque hay estudios de casos concretos

de movimientos y plataformas municipalistas, todavía no se ha analizado todo el arco del fenómeno a largo plazo.

Mi argumento es que la tradición municipalista ha sido un tema importante de la política española moderna desde la guerra de la Independencia (1808-1814) y que debería incorporarse íntegramente a la narrativa histórica de la modernidad. Nacidas en la guerra de la Independencia, las plataformas municipalistas, implícitas o explícitas, fueron un rasgo sistemático y permanente del paisaje político, desde el Partido Progresista de la década de 1830 hasta el Partido Republicano Federal de la de 1860, los anarquistas de finales del siglo XXI y principios del XX, el movimiento ciudadano de los años setenta del siglo XX y las plataformas municipalistas del XXI. Sin ánimo de minimizar los diferentes contextos e ideologías, para todos estos movimientos la municipalidad era el punto de intersección de la comunidad de ciudadanos comunes y los órganos de gobierno más cercanos y ofrecía una base natural para el autogobierno. Gracias a la participación ciudadana en materia de defensa de los intereses de la comunidad, los municipios serían los elementos básicos que, a su vez, conectarían lo local con la unidad política más amplia. No hay duda de que todos estos movimientos fueron «perdedores» relativos de las largas batallas políticas por la concentración de la autoridad y la toma de decisiones. Sin embargo, el hecho de que no se haya resuelto la tensión entre los proyectos políticos locales, regionales y estatales significa que el conflicto sigue reapareciendo y que el municipalismo va y viene en función de las corrientes políticas rivales. La consecuencia ha sido un patrón sistemático de movimientos municipalistas y, lo que es igualmente importante, la consolidación de una narrativa del municipalismo como un marco político alternativo muy arraigado en la historia de España.

Entonces, ¿qué debemos hacer con esta tradición de movimientos municipalistas de más de doscientos años? En este periodo, el municipalismo ha sido un lenguaje recurrente de la renovación y la reconstrucción políticas en momentos de crisis y ha articulado aspectos comunes de la descentralización, la autonomía local y la participación comunitaria como valores fundamentales a partir de los cuales la vida política debe regenerarse. El debate municipalista crecía o menguaba en respuesta a las otras fuerzas políticas y en función de las oportunidades que ofrecían los momentos preliminares de transición, desde la década de 1830 hasta 1868, 1931, 1936 o 1978. En concreto, se trataba casi siempre de voces minoritarias en estos momentos de transición, cuando las fuerzas políticas dominantes se centraban en la transformación del poder estatal o, en menor medida, regional, pero raras veces local. Sin estar vinculadas a una perspectiva ideológica determinada, las ideas municipalistas han surgido de todo el espectro político y comparten la convicción de que, si el poder, la autoridad y la toma de decisiones se mantienen cercanos a

la vida cotidiana de la ciudadanía, es más probable que surjan políticas que beneficien al conjunto de la comunidad. A diferencia del individuo autónomo del liberalismo o la democracia liberal o de la clase trabajadora socialista, los municipalistas parten de la comunidad geográfica de vecinos y residentes como núcleo básico del sistema político más amplio. Al contrario que el localismo, el municipalismo suele considerar el gobierno local un elemento básico o un canal, no una fortaleza autárquica.

Además de los principios comunes que abogan por la continuidad, es también importante comprender las cuestiones concretas que han provocado las recurrentes olas de entusiasmo municipalista, desde la venta de tierras comunales en la década de 1860 hasta la construcción no regulada del paisaje urbano de los años sesenta del siglo XX. Aunque estos movimientos deben situarse en su contexto histórico, llama la atención cómo aparentemente apostaban por construir una narrativa de continuidad que legitimara el proyecto vigente mediante los precedentes históricos. Desde este punto de vista, la historia del municipalismo como una constante se ha contado muchas veces, pero casi siempre lo han hecho los propios movimientos desde los márgenes.

Entonces, ¿por qué es importante trasladar esta narrativa de los márgenes al centro del análisis histórico y qué cuestiones hay que investigar más? Una respuesta contundente surge del objetivo presentista de proporcionar un contexto histórico a la reactivación actual de las plataformas municipalistas, incluidas las diferencias y las similitudes entre este momento concreto y los contextos anteriores que favorecieron tales ideas. Dicho de otro modo, ¿cómo moldea la historia de la tradición municipalista nuestra comprensión de lo que ocurre en la actualidad? En términos más generales, reconocer que la cuestión municipalista es un componente de las batallas políticas que se han librado en los dos últimos siglos dificulta aún más nuestra comprensión de la trayectoria de la política moderna. Algunas de las cuestiones que hay que resolver desde esta perspectiva son los contextos particulares en los que los discursos municipalistas han aflorado y se han sumergido, y cómo este proceso ha moldeado y reflejado la configuración de las fuerzas políticas desde 1808. Por último, ¿cuán específica es esta constante para la política española moderna? Y, si no lo es, ¿cuáles son los puntos de comparación y contraste con otros Estados? Alejarnos de un modelo de evolución lineal en el que el desarrollo de organismos más complejos es sinónimo de progreso e integrar la constante municipalista revela una tensión dinámica sobre el foco de la autoridad, la toma de decisiones y el poder que todavía hoy no se ha resuelto; una prueba más de que no hay ningún «fin de la historia» a la vista.

LA MOVILIZACIÓN EN LOS AÑOS 20: RETOS E INNOVACIONES A NIVEL INTERNACIONAL

EL ACTIVISMO EN LA DÉCADA DE 2020: INTRODUCCIÓN

Steve Hughes

Solía tener una cita —por aquel entonces no sabía de quién era— en una nota manuscrita pegada en la pared: «Los grandes cambios no vienen de soluciones rápidas e ingeniosas que sugieren personas inteligentes y nerviosas, sino de largas conversaciones y silencios prolongados entre personas que saben cosas diferentes y necesitan aprender cosas diferentes». (Más tarde supe que estas palabras las había pronunciado la escritora Anne Herbert).

Nuestra conversación sobre activismo e innovaciones a escala internacional, que tuvo lugar el verano de 2021 en el encuentro Fearless Cities, fue una de esas largas conversaciones. La distancia entre algunos de los proyectos activistas representados en este debate garantiza que los periodos intensos de intercambio y aprendizaje mutuos, como este, muchas veces vayan seguidos de largos periodos en los que la gente puede reflexionar, experimentar e innovar por su cuenta.

En este apartado, conoceremos a activistas que trabajan en áreas geográficas diferentes y con sectores distintos. Conoceremos los puntos de vista de personas que buscan estrategias complementarias, aunque ligeramente distintas, para lograr un cambio político en Estados Unidos. Conoceremos la tarea de construir el poder en el gobierno y en los barrios que lleva a cabo la lucha municipalista de Barcelona. Y conoceremos la sindicalización de diferentes países del mundo.

La pregunta es la siguiente: ¿y todo eso cómo encaja? En este tiempo de crisis globales que se entrecruzan y se intensifican, ¿en qué centran su trabajo los diferentes activistas? ¿Cómo ven que lo que hacen contribuye a una mayor alineación de fuerzas que podría lograr una transformación social a gran escala y hacer frente de forma eficaz al poder del capital globalizado?

No hay respuestas fáciles. Y hay que desconfiar de quien diga que el activismo que hacemos es solo algo que no cambia, que está congelado en el tiempo.

En realidad, el activismo está en constante evolución y quienes lo practican siempre trasladan lo que aprenden de los demás a la época, el lugar y las condiciones en que trabajan.

Las personas que escriben en las siguientes páginas son activistas que hablan entre sí, no solo en esta mesa redonda o en este libro, sino a lo largo de los años. Estos activistas sienten interés por los retos de crear movimientos con liderazgo y también por las dificultades del llamado activismo *sin liderazgo*. Se preguntan cómo mejorar el movimiento para que tenga los conocimientos técnicos para ganar y, al mismo tiempo, cultivar la base ideológica de los miembros y los líderes. Nos están urgiendo a conquistar el poder para gobernar y, una vez en el gobierno, hacer cambios reales en la vida de las personas.

Así pues, estos movimientos y estos activistas tienen cosas diferentes que aprender y cosas diferentes que enseñar. Y en el silencio elocuente después de su último intercambio, están preparándose para actuar.

MOVILIZACIÓN: RETOS E INNOVACIONES

Kate Shea Baird y Bea Martínez

Desde que compartimos nuestra experiencia en materia de participación y movilización en el primer encuentro (y libro) de Fearless Cities, algunas cosas en Barcelona En Comú (BComú) siguen igual. Nuestros objetivos políticos globales no han cambiado: sumarnos para ganar las elecciones y transformar la ciudad y hacerlo de una manera abierta, democrática y que empodere a quien se implique. No obstante, el contexto sí ha cambiado y, como no puede ser de otra manera, hemos adquirido nuevos conocimientos a través de la experiencia propia y del intercambio con otras organizaciones políticas. Con este texto queremos socializar estos conocimientos con relación a tres cuestiones concretas: 1) La campaña electoral municipal de 2019, con la que conseguimos revalidar la alcaldía de Barcelona; 2) El proceso de consolidación organizativa que ha seguido su camino desde la creación de la estructura formal de BComú en 2015, con especial énfasis en los mecanismos de participación y empoderamiento activista, y 3) El choque que nos ha supuesto la pandemia como organización municipalista que radica en la proximidad y el contacto directo entre personas.

La campaña electoral de 2019

En el último trimestre de 2017 nos pusimos ya a preparar la hoja de ruta hacia las elecciones del 26 de mayo de 2019. Si en 2015 «no nos venían venir» y, por lo tanto, partíamos de cierta ventaja como candidatura desconocida y minusvalorada, sabíamos que en 2019 sería todo lo contrario: seríamos el enemigo al que todos los partidos debían batir. En este sentido, consideramos imprescindible seguir innovando en las técnicas de movilización y comunicación, tanto para atraer a más activistas como para poder desestabilizar a nuestros adversarios. Dos ejemplos importantes que representan este espíritu de innovación son la incorporación de las campañas puerta a puerta y la creación del Cor Rebel de Barcelona.

El puerta a puerta fue, sin duda, uno de los pilares de la campaña de 2019 y lo será también en la de 2023, pero ¿por qué puerta a puerta?

Tenemos que reconocer que no lo habríamos hecho si no fuese por la red internacional. Fueron compañeras de organizaciones de los EEUU quienes nos convencieron de que era una buena opción que encajaba con nuestros valores y nuestra forma de hacer política, nos formaron e incluso llamaron a puertas con nosotras. Al inicio había cierto escepticismo sobre si sería una experiencia extrapolable a Barcelona. Pronto vimos que sí. El gran potencial del puerta a puerta es la combinación de la escucha, la cercanía y el compartir momentos con las vecinas, con la «ciencia» de decidir a qué puertas es mejor llamar y el «arte» de saber escuchar para poder obtener la información que necesitamos.

Si hablamos de radicalidad democrática, ¿qué es más radical que escuchar y dar voz a esas vecinas a las que nunca nadie les preguntó, por ejemplo, qué piensan de su barrio? De todas las técnicas de movilización que hemos puesto en práctica tanto antes como después del puerta a puerta, esta es, claramente, la que permite llegar a las personas menos politizadas. Por eso, fijando el objetivo adecuado según el momento político, debe poder utilizarse más allá de las campañas electorales. Esa fue siempre nuestra idea; lo que no sabíamos era que viviríamos dos años de pandemia.

Comenzamos la formación de activistas de la organización en julio de 2018. Tarde, visto con perspectiva. Primero, nos formamos una veintena de personas muy motivadas de los diferentes barrios y, poco a poco, fuimos sumando a otras compañeras. Nuestra primera práctica fue en el barrio de Sant Antoni en septiembre y allí descubrimos que nuestros números eran mejores que los de otros países: un mayor número de puertas abiertas y de conversaciones. Además, para nuestra sorpresa, la gente fue mucho más amable de lo que nosotras pensábamos y así, poco a poco, el miedo al puerta a puerta se fue disipando. Al principio las formaciones eran más largas e intensas y, a medida que el número de personas formadas iba aumentando, íbamos reduciendo el tiempo de formación. Para ello, fue clave asegurar que las personas nuevas pudiesen ir con la gente con más experiencia, lo que nos permitió ir descentralizando cada vez más las salidas. Así, unos meses después, teníamos pequeños grupos autoorganizados que iban saliendo según los horarios y por los barrios que más convenía. Pronto descubrimos que el puerta a puerta era un espacio de entrada de nuevas activistas, de empoderamiento y de generación de cuadros. Llamar a puertas y escuchar a las vecinas no solo sirve para llegar a personas más diversas, sino también para integrarlas dentro de la organización. Además, de las personas que se incorporaron a la organización llamando a puertas durante los meses de campaña, no son pocas las que ahora tienen responsabilidades orgánicas o son consejeras de distrito.

Si tenemos que hacer autocrítica, un consejo: es fundamental que toda la organización comparta la importancia del puerta a puerta y lo legitime como elemento clave de la campaña. Esa será la única manera de poder extraer todo su potencial. Una comunicación comprometida con movilizar para involucrar a nuevas activistas y, asimismo, que las cosas que escuchamos en las puertas sean tomadas en consideración por el comité de campaña y comunicación para modular y segmentar los diferentes mensajes. En definitiva, para que la movilización funcione, toda la organización tiene que estar comprometida con ella.

La idea del Cor Rebel de Barcelona fue crear una coral que inyectara emoción en los actos de campaña a través de canciones que reflejaran los valores de BComú. Asimismo, la voluntad era poner en práctica nuestro compromiso político con la cultura como herramienta de transformación social. La iniciativa se inspiró en una coral activista neoyorquina, el Resistance Revival Chorus, y tuvimos la suerte de contar con el liderazgo artístico de Uri Mas, un director de corales de largo recorrido, que se encargó de montar la coral desde cero en un tiempo récord de seis meses. Entre el repertorio de campaña se encontraban temas clásicos como *Bella Ciao* o *Grândola Vila Morena*, además de grandes éxitos contemporáneos como *Somos*, de Operación Triunfo. Aunque pueden parecer iniciativas muy distintas, el Cor Rebel tiene algo en común con el puerta a puerta: amplía el acceso a la participación política y la diversifica. Nos permitió implicar en la campaña a muchas personas que de otra manera no habrían participado, simplemente porque les gustaba cantar y veían que podrían ser útiles aportando su voz y su ilusión.

Consolidación organizativa

En el primer Fearless, compañeros y compañeras de BComú explicaron los principios de la confluencia, cómo se creó la organización, la elaboración del código ético y los mecanismos de participación que regían entonces, entre otras experiencias. Vemos interesante compartir algunas reflexiones nuevas en este ámbito.

Una primera reflexión que nos parece clave recae en que la contraposición que a veces se establece entre la movilización activista en clave electoral (a veces tachada de «electoralismo») y, por el otro lado, el impulso de la participación y la profundización democrática es errónea. Son dos elementos igual de importantes y que, lejos de contrarrestarse, se complementan. Es más, según nuestra experiencia, las campañas electorales suponen una oportunidad única para sumar nuevas personas a la organización, tomar decisiones y hacer política entre todas y abrirnos a la ciudadanía: por un lado, provocan un interés elevado en la política municipal por parte de la ciudadanía y, por otro lado, el horizonte de la contienda electoral y sus posibles

consecuencias activa la implicación, ya que la gente ve la «utilidad directa» de su participación.

El reto de seguir sumando y diversificando la participación es una preocupación ampliamente compartida en el seno de BComú, como en toda organización con voluntad transformadora. Es un ámbito en el que el aprendizaje es continuo y, aunque nos quedan muchas preguntas sin responder, nos gustaría compartir aquí algunas claves que nos parecen importantes.

En primer lugar, para poder aumentar la participación, hay que llamar e invitar a la participación de manera constante, activa y clara. En nuestro caso, dejamos de hacerlo durante un tiempo después de las elecciones de 2015, seguramente por una falta de capacidad organizativa en un periodo durante el cual asumimos el gobierno de la ciudad por primera vez, formalizamos la estructura organizativa y celebramos elecciones internas, y fundamos un espacio político a nivel catalán, entre otras muchas actividades. El resultado fue que entre 2015 y 2018 fue bastante difícil que entrasen personas nuevas en BComú. Quienes se sumaron durante este periodo lo hicieron por iniciativa propia y tuvieron que encontrar su espacio de participación sin ningún apoyo formal. A partir de 2018 rectificamos este déficit y empezamos a llamar a la gente por redes sociales y desde la calle para que se sumase. El resultado fue impactante: entre veinte y treinta personas acudían a los encuentros de bienvenida que organizábamos, de modo que llegamos a convocar una bienvenida masiva de más de un centenar de personas. Aunque invitar a participar jamás será suficiente para ampliar la participación, constatamos que sí resulta necesario si se quiere sumar el máximo de personas dispuestas a implicarse.

La segunda clave está estrechamente relacionada con la primera: una vez formalizada la invitación para participar, hay que tener una puerta de entrada clara y un circuito de acogida y movilización ágil y amable. Para nosotras, en la práctica esto se traduce en convocar a quien se apunte a participar en BComú a un encuentro de bienvenida donde se le explica cómo participar y, aún más importante, se crea un espacio donde conocer a otras personas activistas y donde divertirse con ellas. En este sentido, estos encuentros aspiran a reflejar las tres máximas de la movilización: *movilizarse tiene que ser fácil*, *tiene que ser divertido* y *tiene que crear comunidad*. Después del encuentro, se lleva a cabo un seguimiento de los participantes para ponerlos en contacto con las personas que coordinan los espacios donde quieren participar y ofrecer el apoyo adicional que necesiten. Seguimos sufriendo un porcentaje de retención más bajo de lo que quisiéramos a lo largo de este circuito, motivo por el cual estamos trabajando en afinarlo y mejorarlo de manera continua. Una iniciativa en este sentido ha sido la de llamar por teléfono a las personas que han asistido a los encuentros de bienvenida para saber si

siguen participando en algún espacio de la organización y, si no, averiguar el porqué. También valoramos que podría ser interesante dar continuidad a cada encuentro de bienvenida, aprovechando así la incipiente comunidad que se crea en los encuentros, para que las personas que se conocen allí puedan acompañarse en sus primeros pasos políticos dentro de la organización.

Pero invitar a la participación y crear un circuito de seguimiento no es suficiente. Lo idóneo es crear una cultura de acogida y participación en toda la organización; es decir, que cada activista entienda que sumar y acompañar a personas nuevas es una responsabilidad compartida donde todo el mundo tiene un papel importante. Para fomentar esta cultura, después de las elecciones de 2019, creamos una red de acogida donde los referentes de acogida de cada espacio de la organización se coordinan. Esta red se organizó cuando nos dimos cuenta de que, si la acogida de nuevas personas activistas no es responsabilidad de alguien concreto, a menudo acaba siendo una responsabilidad que nadie asume. De esta manera, adquiere importancia al tema de la acogida y los referentes pueden intercambiar aquellas prácticas que funcionan en sus espacios, mediante un proceso de aprendizaje entre iguales.

Esta cultura de acogida no es importante solo para implicar a la gente en las actividades que ya se realizan, sino también para detectar la posibilidad de lanzar otras nuevas. Porque el empoderamiento del activismo también tiene que contemplar los intereses y las capacidades particulares de cada cual. Es aquí donde se encuentra la leña que alimenta e impulsa el activismo; en la capacidad de sacar lo mejor de cada persona, ya sea programadora, bailarina o apasionada de los reglamentos. Pero para poder hacerlo alguien tiene que interesarse por conocer a cada activista y hacerle un acompañamiento personalizado, para que así se lance a aportar de la manera que más sentido tenga. Y esto, de nuevo, es trabajo de todos y todas.

Por último, cabe decir que este ámbito lo hemos dotado de recursos, con la creación de una nueva área de Participación y Movilización dentro del equipo técnico, con dos personas a jornada completa; porque sabemos que las prioridades solo lo son si se ven reflejadas en el presupuesto de la organización.

Pandemia y municipalismo

Por último, no podemos cerrar este texto sin hablar del impacto que la pandemia provocada por la covid-19 ha tenido en BComú. Ha supuesto, en primer lugar, la pérdida de activistas a quienes queríamos, de familiares y de amistades. Estamos de duelo y ni siquiera hemos podido abrazarnos y llorar juntos. Asimismo, hemos tenido que lidiar, como todo el mundo, con el impacto psicológico de la pandemia: con la soledad, la ansiedad, la depresión e,

incluso, la desesperanza. No se deberían infravalorar los efectos de esta experiencia en un proyecto político asambleario que se basa en la comunidad, en la proximidad, en el contacto directo con nuestros vecinos y vecinas, y en hacer política desde la alegría.

Evidentemente, ha sido imposible desarrollar muchas de las actividades políticas previstas durante los últimos años: asambleas, festivales, debates, mesas informativas en las calles, el puerta a puerta... Por mucho que nos hayamos inventado formatos nuevos y seguros, como las bicicletadas, y hayamos apostado fuerte por las infraestructuras digitales y por las campañas de llamadas, los límites han sido importantes. Apenas hemos podido vernos entre nosotras, y mucho menos con el resto de la ciudadanía. Siempre decíamos que la fuerza principal del municipalismo era el hacer política de tú a tú, mirándonos a los ojos, y estos años hemos podido constatar, al privarnos de ello, que así es.

Hemos notado la falta de comunicación directa con los vecinos y vecinas, como fuente de información que permite tomar el pulso de la calle y como mecanismo para desmontar bulos y *fake news*. Al no contar con esta capacidad, hemos sido debilitadas comunicativamente ante las campañas de desgaste en las redes sociales y los grandes medios tradicionales.

Entre el cansancio pandémico y la dificultad para llevar a cabo actividades, hemos sufrido cierta desmovilización interna, también. Por tanto, uno de nuestros retos principales será evitar que este fenómeno se cronifique. Lo que más va a costar será recuperar el «tiempo perdido» en materia de creación de nuevos cuadros políticos; un proceso que requiere de vivir la política en primera persona e ir asumiendo responsabilidades de manera gradual. En tiempos «normales», muchas de las personas activistas que se sumaron en 2019 ahora estarían asumiendo papeles de liderazgo en sus espacios, pero, por la pandemia, «el ciclo de vida» del activismo se ha quedado congelado en el tiempo y el desarrollo de las personas activistas más nuevas se ha visto perjudicado. Se trata de «una generación perdida» dentro del activismo que echaremos de menos durante los próximos años.

La recuperación individual y colectiva de la pandemia nos plantea un reto sin precedentes. No hay recetas mágicas, pero, gracias a la creatividad y al atrevimiento de nuestra gente durante los últimos años, disponemos de más herramientas que nunca a la hora de afrontarlo. Contamos con herramientas como el puerta a puerta o el Cor Rebel, que se basan en los pilares del municipalismo: la proximidad, la empatía y la acción conjunta. Es así como vamos a conseguir recuperar el músculo, la alegría y el empoderamiento perdidos durante estos años de aislamiento y distancia.

HACIA UNA DISCIPLINA CON LIDERAZGO

Gabe Tobias

Una de las demostraciones de fuerza más impresionantes del planeta la hace la seta de tinta (*Coprinus comatus*). La seta de tinta, por decirlo de una manera suave, no parece muy impresionante. No produce toxinas psicotrópicas ni tiene unos colores fabulosos. Cuando se recoge, su cuerpo blando de color grisáceo se descompone rápidamente en un líquido oscuro, pero la seta de tinta tiene un poder oculto: los hongos se reproducen diseminando cuerpos fructíferos por el suelo, las partes que solemos ver y comer. Gran parte del organismo está enterrado y se extiende mediante redes de filamentos por amplias franjas de tierra. Cuando la seta de tinta decide dar fruto, simplemente es imparable. Hace que el agua circule por su organismo interconectado hasta alcanzar un punto, y entonces puede atravesar incluso gruesas capas de hormigón y roca. En lo que básicamente es un proceso de fracturación inversa, este modesto hongo utiliza una amplia red de hilos microscópicos y fibrosos para generar miles de kilos de presión y así lograr que una sola seta de tinta salga a la superficie.

Entre los progresistas, solemos hablar de construir movimientos «con liderazgo», movimientos que no giran alrededor de un individuo, sino que se construyen alrededor de la resiliencia de un flujo constante de líderes tanto consolidados como futuros. Barbara Ransby escribió lo siguiente sobre Ella Baker, icono de los principios fundacionales con liderazgo de los derechos civiles:

«Baker no era contraria al liderazgo. Se oponía al liderazgo jerárquico que desempoderaba a las masas y daba más privilegios a quienes ya los tenían. Reclamaba a la gente que dejara de creer en el concepto del líder mesiánico y carismático que promete la salvación política a cambio de respeto».

Lo que la estrategia que Baker (y Ransby) sugiere, y lo que muchos activistas progresistas se han esforzado por construir, es un movimiento con un auténtico liderazgo. Desde el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos hasta la Revolución de los Paraguas en Hong Kong o las protestas

estudiantiles en Chile, los activistas progresistas reivindican con orgullo estos mismos valores con liderazgo una y otra vez.

Y una y otra vez topamos con la misma paradoja. Independientemente de lo igualitarios y democráticos que sean nuestros valores, los movimientos más potentes y duraderos se forman alrededor de líderes individuales. El senador Bernie Sanders tenía precisamente el lema «No soy “yo”, sino, “nosotros”», y aun así es evidente que el resurgimiento político de la izquierda estadounidense desde 2016 está directamente vinculado a su figura y sus campañas presidenciales, por mucho que parezca que ese resurgimiento va a la deriva sin la perspectiva de que Sanders vuelva a presentarse en 2024. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez pronunció una frase célebre: «Para que uno de nosotros lo logre, cien deben intentarlo». Pero esos otros noventa y nueve no tienen millones de devotos seguidores en las redes. La creación a principios de 2022 del primer sindicato en una sede de Amazon en Estados Unidos la lideró un comité sindicalista increíble que agrupaba a más de cien trabajadores. Pero los focos de los medios iluminaron sobre todo a un hombre, Christian Smalls, por más que él intentó presentar su triunfo histórico como un trabajo en equipo.

Siempre habrá líderes individuales con papeles formales, unas biografías atractivas y un carisma personal que los conviertan en piezas emblemáticas e imprescindibles de nuestros movimientos. El poder de una Alexandria Ocasio-Cortez o un Christian Smalls se debe en gran parte a la modestia que transmitían pocos días antes de triunfar. Si un camarero puede derrotar al próximo presidente, si un supervisor de una línea de embalaje puede derrotar a la mayor corporación del planeta, los poderosos nunca estarán a salvo. Estos triunfos son el combustible necesario para que nazca el movimiento, pero también implican inevitablemente que haya un líder famoso. Y eso, a su vez, tiende a fomentar una jerarquía muy marcada hasta ese líder, de modo que se crean intermediarios y se repiten privilegios en el camino.

Entonces, ¿todo este discurso de los movimientos con liderazgo es solo postureo ético? ¿Es posible mantener un movimiento sin la fuerza gravitacional de los líderes carismáticos?

Propongo que no pensemos en el «liderazgo» como una serie de valores aspiracionales ni como una restricción de la fama que debería permitirse tener a cualquier líder. En lugar de eso, deberíamos pensar en el liderazgo como una disciplina, una serie de prácticas, integrada en cada estructura y actividad de un movimiento. Esta disciplina crea líderes nuevos incesantemente, con la libertad de desarrollar su propio trabajo y sin dejar de existir en los objetivos y los valores que el movimiento se ha marcado. Esta disciplina sostiene las

estructuras organizativas y las redes interorganizativas que infunden responsabilidad. Hay muchas maneras de crear esta disciplina, pero me gustaría describir una de ellas con más detalle.

En Movement School, la organización que cofundé en 2018 con Ilona Duverge, intentamos pulir las prácticas que fomentan una disciplina con liderazgo. Una práctica importante que cabe destacar es nuestro uso de «juegos freireanos». Un juego freireano, llamado así por el activista y educador brasileño Paulo Freire, es un ejercicio de simulación en grupo pensado para estimular tanto el desarrollo de aptitudes personales como una comunidad de aprendizaje llena de valores. La simulación puede ser de cualquier contexto importante para el movimiento y los participantes pueden ser cualquier persona que se enfrente, ahora o más adelante, a los desafíos que ese contexto plantea. Pensemos en un programa modelo de las Naciones Unidas. En los últimos cuatro años hemos hecho simulaciones con juegos freireanos de diferentes campañas electorales y activistas, cada una con decenas de participantes de todo el país. Cada juego freireano se diseña con profesionales destacados que ejercen de mentores durante y después del juego. Se incluyen formaciones técnicas que proporcionan aptitudes a los participantes, que más adelante tienen la oportunidad de poner en práctica. El diseño del juego es fundamental. Tal como Freire escribió:

«Ninguna pedagogía que sea auténticamente liberadora se mantiene alejada de los oprimidos tratándolos como desgraciados y presentándoles modelos de emulación de los opresores. Los oprimidos deben ser su propio ejemplo en la lucha por su redención».

Los juegos freireanos tienen tres objetivos clave, indicativos de una disciplina con liderazgo. El primero: los juegos freireanos son un espacio para que todos aprendan, mejoren e innoven. Una de las principales barreras para crear nuevos líderes es sencillamente que la mayor parte de sindicalistas y activistas no tiene ninguna oportunidad de liderar. Un juego freireano es un espacio en el que todos tienen la oportunidad de abordar los mayores retos del día y poner a prueba su potencial ante sus camaradas y, lo que quizá sea más importante, ante sí mismos. Y, como Freire sugiere, el diseño del juego garantiza que un equipo de participantes no puede triunfar replicando el *statu quo* de un sistema político que no funciona, sino aprendiendo a liderar la capacidad de movimiento de la gente.

El segundo: los juegos freireanos generan comunidad y solidaridad entre quienes los practican. En un movimiento con liderazgo, perfeccionar las aptitudes con las que alguien alcanza el éxito no puede ser un ejercicio puramente solitario. Debemos ver que el valor que aportamos está vinculado

fundamentalmente a nuestros camaradas. Los juegos freireanos están enfocados a equipos, tanto para la responsabilidad como para el apoyo. Las relaciones que se establecen durante un juego freireano intensivo son más duraderas que las que se establecen durante las formaciones tradicionales y son más igualitarias que las que se forman en un espacio de trabajo tradicional.

Y el tercero: los juegos freireanos ayudan a derribar puertas y diversificar nuestros espacios. Con una selección intencionada de participantes que suelen quedar apartados de los puestos de liderazgo y pidiendo a quienes normalmente ejercen de intermediarios que hagan de mentores, la práctica de los juegos freireanos ayuda a romper barreras. Los miembros de cada grupo empiezan a verse como líderes legítimos a pesar de lo poco que se parecen a los hombres blancos con formación de élite que nos han dicho que deben ocupar los puestos de liderazgo, o quizá precisamente por eso. Y los participantes tienen en los mentores a futuros empleadores y una estructura de apoyo que les ayudará a triunfar en el futuro.

En medio de varias crisis mundiales simultáneas, nuestros movimientos necesitan una disciplina con liderazgo. Hay que escuchar la llamada de Ella Baker para crear poder en cada espacio en el que existimos y en torno a cada persona que conocemos. Debemos construir una nueva generación de líderes, y luego otra, y otra más. La primera seta de tinta que brote por sorpresa después de atravesar una placa de hormigón siempre será una heroína. La entrevistarán en el telediario. Se hará viral en las redes sociales. Bueno, el movimiento con liderazgo dice: «¿Y ahora a quién le toca?».

Bibliografía

- › RANSBY, Barbara. (2015). «Ella Taught Me: Shattering the Myth of the Leaderless Movement». *ColorLines Magazine* [en línea].
<https://www.colorlines.com/articles/ella-taught-me-shattering-myth-leaderless-movement>
- › AMOSU, Akwe. (2021). «How Hong Kong's "leader-full" movement attracted international support». *The Symposium on Strength and Solidarity in Human Rights* [en línea].
<https://strengthandsolidarity.org/blog/717/>
- › FREIRE, Paulo (1968). *The Pedagogy of the Oppressed*. Nueva York: Seabury Press.



REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA DEL MOVIMIENTO

Maurice Mitchell

Llegué al Working Families Party (WFP) justo después de que Trump saliera elegido. Antes, me había pasado unos cuantos años catalizando el Movement for Black Lives, empezando con el trabajo que desempeñé al participar en la primera ola de levantamientos que se produjo tras el asesinato de Michael Brown por parte de la policía en Ferguson, Misuri.

Desde mi punto de vista, es evidente que no fue una casualidad que Trump emergiera cuando lo hizo en Estados Unidos ni tampoco que recientemente hayamos sido testigos del mayor movimiento social de la historia estadounidense. A escala global, ha habido una serie de crisis crecientes que se entrecruzan. Se hacen muchos cálculos y no está ni mucho menos decidido cómo acabará todo esto.

Por eso, me centraré en el trabajo que llevamos a cabo en Estados Unidos en este contexto más amplio. Considero que mi tarea ahora es conseguir que el WFP esté preparado para luchar contra el crecimiento de la política identitaria blanca y cristiana, y crear una amplia alianza multirracial de gente trabajadora que pueda liderar esta lucha en Estados Unidos, ciclo electoral tras ciclo electoral.

Al mismo tiempo, celebro estas oportunidades de dialogar con amigos y camaradas de todo el mundo. Pese a todos nuestros esfuerzos para que el movimiento estadounidense sea localista, de algún modo encontramos vías de intercambio y aprendizaje en la escena internacional. Y la facilidad con la que se produce este intercambio, de maneras tanto formales como orgánicas, sigue dándome esperanza.

La cultura política de Estados Unidos es muy empresarial. Cada día hay cientos de personas, si no miles, que se levantan, se miran al espejo y se dicen: «Hoy me toca brillar». Deciden que son *ellas* quienes están listas para ser

candidatas. A continuación, contratan a unos cuantos asesores, llevan a cabo un sondeo para saber qué mensaje deben lanzar y empiezan a recaudar dinero.

Desde mi punto de vista, esto es un absoluto retroceso. Por un lado, las personas que se levantan por la mañana y se dicen que están predestinadas a ocupar un cargo muy raramente pertenecen a la clase obrera, a comunidades racializadas o a comunidades a las que les han dicho, implícita y explícitamente, que Estados Unidos, en realidad, no es para *ellas*. Por eso, una de las tareas organizativas del WFP es dar un giro al guion de esta historia. Debemos encontrar personas candidatas que no encajen en ese molde, que ni siquiera se vean como tales. Esta es una tarea organizativa fundamental de nuestro movimiento.

Por otro lado, las elecciones son una táctica; un medio para un fin. Y la coyuntura electoral es nuestra oportunidad de conversar con miles e incluso millones de personas. Los candidatos desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a los votantes a dar sentido al mundo que los rodea. Si estos candidatos han formado parte de sindicatos, si son activistas experimentados, si tienen sentido de la responsabilidad con las comunidades a las que pertenecen, pueden desempeñar un papel esencial al ofrecer una orientación estratégica a las amplias mayorías de votantes que necesitamos generar para ganar las elecciones. Pero esto es más que ganar unas elecciones: estos candidatos son un ingrediente básico para crear un contrapeso mayoritario a la fuerza creciente de la derecha organizada.

La coyuntura política en la que vivimos ha afectado profundamente a mucha gente. En Estados Unidos la pandemia provocó unas condiciones en las que gente que jamás había pensado que le ocurriría algo así hacía cola para recibir ayuda alimentaria. Millones de personas encendían el televisor y veían la realidad que muchas comunidades de Estados Unidos viven a diario: que la policía hostiga y persigue con violencia a nuestra gente. También fue un momento en el que muchos estadounidenses empezaron a mirar las elecciones con otros ojos. La clase media acomodada empezó a radicalizarse y los radicales empezaron a presentarse a las elecciones. En resumen, este periodo ha abierto un nuevo espacio para que nos organicemos. Esta coyuntura continúa cambiando, pero creo que, como movimiento, independientemente del lugar del mundo donde estemos, debemos seguir atentos a cuáles son las coyunturas futuras que se abren para nuestra organización.

Una de estas coyunturas, en mi opinión, es cómo las ideas sobre liderazgo cambian, o necesitan cambiar, para responder a dicha coyuntura. En parte como respuesta a errores del pasado y en parte como respuesta a una crisis generalizada de legitimidad que afecta a todas las instituciones que operan

bajo el neoliberalismo, en el movimiento hemos visto experimentos con «ausencia de liderazgo» o estructuras ultrahorizontales. Sin embargo, de la lucha histórica por la liberación de la población negra y de mis propias experiencias en el seno del Movement for Black Lives, he aprendido que, en realidad, es una cuestión dialéctica: necesitamos líderes y liderazgo. Necesitamos integrar las aportaciones de muchas personas y también comprender que el liderazgo es necesario. Y debemos comprender que, en función del organigrama, el liderazgo será diferente. El tipo de liderazgo necesario en un movimiento social no es el mismo que en un partido político o en un sindicato, por ejemplo. Pero el liderazgo es necesario en todos estos espacios para seguir con nuestra lucha colectiva.

Para mí, esta es una orientación ideológica para el activismo que yo practico, pero la ideología no es algo que empuñemos como un arma para hacernos sentir más inteligentes o parecer más justos. Es un instrumento que empleamos para dar una base a nuestra tarea de construir un movimiento con la clase trabajadora. Es una estrella que podemos seguir en la noche oscura y que nos guía hacia la libertad que necesitamos para la victoria colectiva.

NUEVOS RETOS, NUEVAS POLÍTICAS

RECUPERANDO EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA GENTE

RECONQUISTANDO LA CIUDAD: UNA REVOLUCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO

Anke Kleff y César Ochoa

Después de casi un siglo de diseñar nuestras ciudades en torno a los vehículos, lo que nos ha llevado a tener áreas urbanas más grandes, contaminadas, peligrosas y menos habitables, por fin, desde principios de esta década, una revolución está transformando el espacio urbano europeo.

Como en las últimas décadas se habían llevado a cabo muy pocos planes no disruptivos de pacificación de las calles, el dominio del espacio dedicado a la circulación y el estacionamiento de vehículos se había vuelto abrumador. En Barcelona, los vehículos ocupaban un 60% del espacio, mientras que, en realidad, solo el 20% de las personas utilizaba el coche para trasladarse.

Actualmente, la combinación de las pruebas científicas de la amenaza que la contaminación supone para la salud —especialmente de niños y personas mayores—, la emergencia climática y la pandemia provocada por la covid-19 ha creado el marco perfecto para una revolución urbana urgente: recuperar el espacio público que ahora ocupan los vehículos, reconquistar este bien común del gran depredador de espacio.

En lo que se llamaba *guerra cultural contra el vehículo*, diferentes actores, como políticos de la institución, el *lobby* automovilístico y los ciudadanos organizados han defendido intereses contrapuestos. La forma de nuestro espacio público en el futuro y la velocidad de los cambios dependen de la fuerza y la valentía que demuestre cada uno. Las «armas» para la revolución urbana son sencillas pero eficaces: crear supermanzanas y conectarlas, pacificar los entornos de las escuelas, abrir las calles a los peatones y ciclistas, y regular los límites de velocidad en el centro de las ciudades.

En esta revolución urbana, la participación ciudadana es absolutamente necesaria. Por ejemplo, cuando ciudades como Barcelona o París protegen los entornos de las escuelas pacificando sus inmediaciones, recurren al urbanismo estructural y táctico. Para planificar estas transformaciones,

la función de las asociaciones de familias y de la comunidad educativa es fundamental: piden, proponen y participan en el diseño de la nueva configuración del espacio.

El urbanismo táctico, en cuya lógica incluimos el primer paso para crear gran parte de las supermanzanas o la pacificación de muchos entornos escolares, es un tipo de intervención potente en el espacio público con varias ventajas: su coste se sitúa entre el 10% y el 20% de la misma transformación en el urbanismo estructural clásico, lo que le proporciona mucho más poder de transformación de los usos, es más rápido y, lo que quizás sea más importante en una lógica democrática, permite la producción conjunta al situar a la ciudadanía en el centro. Usar elementos como pintura, bancos, mesas y jardineras permite experimentar con distintas configuraciones y hacerlas evolucionar cuando se conoce el uso real que la ciudadanía hace del espacio.

Las supermanzanas ofrecen un modelo para incrementar la pacificación de una zona de la ciudad. Reducir el número de vehículos y su velocidad se traduce en un barrio habitable donde la gente se sienta, habla y escucha a los demás sin gritar. Reabrir las calles a las comunidades y para nuestra vida cotidiana, juntarnos para jugar y crear comunidad, es algo muy político, significa dar espacio y devolver la vida al centro de nuestros barrios.

La transformación del espacio urbano siempre debe ir acompañada de la lucha por una vivienda asequible. En este sentido, es fundamental que se apliquen mejoras en todos los barrios, no solo en el centro de la ciudad. En Barcelona, la distribución homogénea de las mejoras en el espacio urbano por toda la ciudad es parte de la estrategia urbanística. Todas las zonas de la ciudad deben ser más habitables, no solo el centro urbano.

En nuestras ciudades, las transformaciones topan con la resistencia de los grupos de presión, la prensa conservadora, etc. Debemos unir fuerzas y defender la reconquista del espacio público como un movimiento municipalista internacionalista. ¡Supermanzanistas de todas las ciudades, uníos!

SUPERILLA BARCELONA

Alícia Puig Fernández

En Barcelona estamos lanzando el proyecto Superilla Barcelona, que pretende transformar la morfología de nuestra ciudad, nuestra manera de gobernar e interactuar con nuestras calles y adaptar Barcelona al siglo XXI.

¿Por qué lanzamos este plan?

Este plan responde a la necesidad de hacer que Barcelona sea una ciudad habitable, ya que tenemos una ciudad muy densa y contaminada, con una distribución muy desigual del espacio público.

Cada día, 1,4 millones de vehículos cruzan la ciudad y durante la mayor parte del año estamos por encima de los 50 microgramos/m³ de NO₂, cuando la OMS recomienda no superar los 40 microgramos/m³. Además, el 60% del espacio público es para los vehículos.

Por tanto, la ciudad tiene que reorganizar sus prioridades: necesitamos un plan que democratice el espacio público y reduzca la contaminación. Y el proyecto Superilla tiene la fórmula para alcanzar estos objetivos.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Lo llamamos *Superilla* ('supermanzana') porque muchos barrios de Barcelona están diseñados en manzanas, que forman parte del plan Cerdà. Durante la pasada legislatura (2015-2019), aplicamos la estrategia Superilla por zonas. Elegimos nueve manzanas y cortamos el tráfico de la zona. Creamos algunas manzanas sin tráfico, lo que ayudó a ganar espacio público.

En los barrios en los que ejecutamos el proyecto Superilla durante la pasada legislatura ya observamos algunos resultados: en Sant Antoni, uno de estos barrios, hemos observado una reducción del 25% de los niveles de NO₂ y el 17% de los niveles de PM₁₀.

¿Cuál es nuestro plan de futuro?

Actualmente, en la presente legislatura, queríamos ampliar este proceso: en lugar de elegir algunas áreas y convertirlas en zonas sin vehículos, queríamos que una de cada tres calles de la ciudad fuera ecológica.

Esto cambiará la morfología de las calles y nuestra manera de entenderlas, porque no solo convertiremos una de cada tres calles en una calle ecológica para peatones y zonas verdes, sino que en dos de cada tres calles deberán priorizarse el transporte público y los carriles bici. Por eso hemos diseñado un sistema de autobuses más eficaz, con la red ortogonal, y estamos construyendo un tranvía que conectará los dos extremos de la ciudad en veinte minutos. En cuanto a los carriles bici, en seis años hemos doblado la red, que ha pasado de 120 km a 240 km, y estamos construyendo otros 30 km.

En la actualidad, Barcelona es una ciudad muy amable con los vehículos y eso hay que cambiarlo: necesitamos tener una ciudad amable con el transporte público, donde la manera más eficaz de desplazarse por la ciudad sea la movilidad sostenible. Como he dicho al principio, cada día 1,4 millones de vehículos motorizados circulan por Barcelona y el 40 % de estos se desplazan por dentro de la ciudad. Esta cifra podría reducirse drásticamente si desplazarse con vehículos motorizados no fuera tan fácil como ahora.

En resumen, el cambio climático lo está modificando todo, así que debemos cambiar nuestras ciudades para adaptarnos y mitigar sus efectos. Debemos creer que una ciudad del futuro es posible, una ciudad que será habitable en 2050. Una ciudad verde, en la que todo el mundo se desplace en transporte público o bicicleta, una ciudad que podría ser energéticamente autosuficiente... Superilla Barcelona es el primer paso hacia este futuro.

LA PRIMERA SUPERMANZANA DE BARCELONA: GUÍA DE EJECUCIÓN

Patrick Kappert

Septiembre de 2016 fue la fecha inicial de la supermanzana piloto en el barrio del Poblenou de Barcelona. Tuvieron que pasar casi dos años antes de que este proyecto piloto fuera definitivo y tuvieron que pasar otros cinco años y una epidemia de covid-19 para que la Administración apostara por un cambio de modelo y empezara a defender e implantar las supermanzanas en Barcelona. Ahora, a principios de 2022, cuando Barcelona va al extranjero para explicar lo que marca la diferencia en la ciudad, solo se usa una palabra mágica: «supermanzana».

Prioridad para los peatones, eliminación de semáforos, uso de circuitos para impedir el tráfico sin prohibir el acceso a los vehículos que vayan a 20 km/h. El espacio liberado se llena con mesas de picnic y parques infantiles, o simplemente se deja vacío.

Los cambios, en general, reciben críticas. Los cambios para proteger la naturaleza, el entorno o la salud de los habitantes de las ciudades suelen ser abstractos y difíciles de comprender. Con la supermanzana, sucede lo mismo y, a la vez, algo diferente. Ocurre lo mismo porque al principio recibió muchas críticas. Y pasa algo diferente porque, a diferencia de casi todas las medidas para mitigar el cambio climático y mejorar la calidad del aire, tiene un impacto sorprendente y muy notable en las ciudades y su espacio público: mejora la calidad de vida de las personas que lo usan y lo habitan.

En este artículo, primero hablaremos de las mejoras en la calidad de vida, que no siempre se perciben de manera directa, desde la perspectiva de la asociación de vecinos Col·lectiu Superilla Poblenou, @superillap9.

Para acabar, nos gustaría sacar algunas conclusiones sobre cuál sería el próximo paso lógico para continuar transformando las ciudades en una entidad dinámica habitable, sostenible y moderna.

La asociación de vecinos Col·lectiu Superilla Poblenou

La supermanzana del Poblenou no es perfecta. Hay algunos problemas conceptuales respecto a cómo marcar los carriles de circulación, cómo indicar que los peatones tienen prioridad, o la existencia de un carril en el que el tráfico está permitido y que tiene semáforos. Pero al principio hubo una gran campaña organizada que casi logró que el proyecto piloto se cancelara. En la televisión pública nacional, se emitieron noticias falsas sobre atascos en las calles adyacentes y sobre la inaccesibilidad para servicios como ambulancias y camiones de bomberos. Además, se alegaba que había espacios sin uso y que el espacio era feo. También se reivindicaba el derecho a recorrer todas las calles de la ciudad en coche. Por otro lado, en algunas votaciones, los políticos estaban muy asustados por las cartas y los artículos contra la supermanzana que se publicaban en los periódicos más importantes.

Como vecinos, nos sorprendió el revuelo que se generó contra la supermanzana sin observar la realidad, solo para satisfacer a las empresas que se anunciaban en los medios de comunicación: las marcas automovilísticas. En realidad, sentíamos que estaban jugando con nuestra salud y nuestro bienestar.

Fundamos nuestro colectivo para defender el proyecto piloto de supermanzana y, por tanto, la propuesta de la ciudad de Barcelona.

Col·lectiu Superilla Poblenou es una asociación de vecinos excepcional. Normalmente, los vecinos se unen para luchar contra alguna medida que las ciudades quieren aplicar y detener su ejecución.

Pensábamos —y seguimos pensándolo— que la manera en que se ejecutó la supermanzana puede mejorar mucho. Propusimos mejoras e ideas sobre qué hacer con el espacio. Pero, al ver el revuelo en los medios de comunicación y darnos cuenta de que el partido político que había ejecutado el proyecto piloto de la supermanzana era un gobierno en minoría y que no tenía en ella su principal defensa contra toda la presión política a la que la sometían, empezamos a defenderla nosotros. Publicamos imágenes y hablamos en todos los grupos locales de Facebook y en Twitter con cualquiera que atacara la supermanzana con argumentos que nada tenían que ver con la realidad. Abundaban las noticias falsas sobre la supermanzana. Además, nos reunimos con todos los partidos políticos del distrito para recordarles que en su programa se indica que quieren un aire limpio, que votaron a favor de un plan de

movilidad en el que se contemplaban las supermanzanas y que los políticos tienen una responsabilidad para con la salud y las ciudades habitables para los vecinos.

También asistimos a las reuniones del consejo de distrito para hacer oír nuestra voz. Por otra parte, y debido a que nosotros publicábamos muchas fotos y vídeos de la supermanzana y el Ayuntamiento de Barcelona no publicaba nada ni la mencionaba (por miedo a perder las elecciones a causa de la mala prensa), todos los medios nacionales e internacionales vinieron a hablar con nosotros y atendimos a la televisión local, a la prensa, a estudiantes e investigadores, a urbanistas y arquitectos de todo el mundo. Nos invitaron a hablar de la supermanzana en Mallorca, Zaragoza, Ámsterdam e incluso Reikiavik.

Pero, con el tiempo, cada vez más gente empezó a utilizar el espacio, a publicar imágenes de gente disfrutando y reuniéndose en el espacio público y a contar su experiencia personal. La supermanzana del Poblenou sobrevivió solo porque los vecinos mostramos a los políticos cuál era la realidad.

Al mismo tiempo, empezamos a conocernos, a organizar actividades y a disfrutar de las ventajas de la supermanzana, e intentamos documentarlas. De hecho, detectamos algunas ventajas ocultas, como la calidad del espacio público, el ruido y la creación de una comunidad.

La calidad del espacio

Todos hemos crecido en una época en la que la accesibilidad y el tráfico fluido de los vehículos son las principales limitaciones urbanísticas al pensar en el urbanismo. En una época en la que el individualismo y la clase media iban en aumento, lo ideal era tener coche propio, jardín particular y servicios como las mejores escuelas (privadas) y centros comerciales juntos a las afueras de la ciudad, con su correspondiente espacio para estacionar.

Los urbanistas eran en su mayoría personas con ese mismo perfil. Pero en ciudades como Barcelona, con una densidad elevada y un sistema de transporte público fuerte, solo el 25% de los desplazamientos se hace en coche. Sin embargo, un 70% del espacio público se destina a carriles de circulación y estacionamientos.

Dar prioridad a los peatones y liberar los centros de los cruces tuvo algunos efectos secundarios curiosos. La gente empezó a hablar en medio del espacio público, no solo junto a los edificios. Automáticamente, eso invita a charlar en grupo. Si dos personas hablan en una acera estrecha, parece que tengan una

conversación privada. Las personas que hablan en un cruce invitan a participar. Como consecuencia, empezamos a hablar y a conocernos.

Otra pregunta que se plantea es la siguiente: ¿por qué casi siempre dejamos la mejor parte del espacio público, el centro, a los vehículos?

Ruido

Cuando empezamos a hablar, con el tiempo detectamos otro problema: si pasaba un coche, nos callábamos, esperábamos a que el coche se fuera y seguíamos. En casi todas las calles de Barcelona siempre se oye el ruido del tráfico y la gente se ve obligada a gritar para entenderse. La reducción del ruido mejoró considerablemente la calidad de la conversación.

Y, de repente, oíamos el sonido de los pájaros y los insectos. Ser conscientes de que no somos la única especie que tiene su hábitat en la ciudad fue un gran descubrimiento.

Como conductores

Los vecinos que son propietarios de un vehículo observaron otra cuestión curiosa: era más agradable, menos frustrante e igual de rápido ir en coche por la supermanzana. Con la retirada de los semáforos, se conduce en un flujo en el que reducir la velocidad para dejar pasar a peatones y ciclistas normalmente no obliga a dejar de conducir. Y todo el estrés relacionado con los semáforos desaparece. Ya no hay que acelerar para intentar pasar en ámbar ni hay que esperar más de un minuto para que el semáforo se ponga en verde. Para un conductor que vive en la supermanzana, entrar es casi como llegar a casa y relajarse.

Relaciones sociales

Antes de la supermanzana, en el barrio no había comunidad, pero con la ella empezamos a conocernos, empezamos a organizar actividades y nos hicimos amigos. Durante la pandemia provocada por la covid-19, autoorganizamos sistemas de ayuda mutua para la gente con problemas logísticos y en cuarentena. Y ahora nos quejamos del «turismo de la supermanzana»: en Barcelona hay muy pocas manzanas y la gente viene a la nuestra a celebrar fiestas infantiles, a aprender a ir en bici o patinar, y el fin de semana tenemos los famosos botellones. Y todo eso porque estar en la supermanzana es agradable.

El futuro de las ciudades

Los vehículos son instrumentos muy prácticos, pero sin darnos cuenta hemos estropeado nuestro hábitat social humano, «el espacio público», dándonoslo casi íntegramente al tráfico. Pero vivimos en el siglo XXI y debemos reaccionar al cambio climático, y sabemos que nuestra esperanza de vida se reduce a causa de la contaminación acústica y, sobre todo, atmosférica. Y eso también afecta enormemente a la salud general y a la capacidad de aprendizaje de niños y niñas.

También disponemos de tecnología: en 2023, todos los vehículos nuevos tendrán un sistema para geolocalizar la velocidad máxima y forzarlos a respetar los límites de velocidad. Podemos eliminar de forma drástica un 70% de los semáforos y devolver la prioridad a los peatones. Casi el 85% de los desplazamientos dentro de la ciudad tiene una distancia máxima de 10 km, que puede recorrerse fácilmente a pie o en bicicleta (eléctrica), que es una forma de movilidad agradable y activa que mucha gente no escoge por los problemas de seguridad que los vehículos provocan. En los próximos diez años, tenemos que implantar un sistema de supermanzanas que permita que cada vecino tenga la suya a menos de dos calles de distancia y que permita también cruzar la ciudad a pie o en bicicleta exclusivamente a través del sistema de supermanzanas conectadas. La gente es más lista de lo que los políticos creen y sabe apreciar una mejor calidad de vida. Hay que eliminar las carreteras que cruzan la ciudad: es algo anticuado y que atenta contra la vida y el bienestar de las personas. Debemos ser valientes y tomar estas medidas y concederles dos años para que la gente se acostumbre.

Y el modelo de supermanzana sí permite que los vehículos accedan a todas partes, pero solo para lo que estaban pensados: ser una herramienta útil al servicio de las personas.

LA CIUDAD COMO HOGAR: EL DERECHO A LA VIVIENDA

INTRODUCCIÓN

Guillem Pujol

La relación que establecemos con nuestra vivienda habitual es tan especial que no tiene comparación con ninguna otra estructura arquitectónica u objeto inanimado. Nuestra casa nos protege del frío viento invernal, de las lluvias torrenciales que caen al llegar la primavera, de los intensos rayos del sol estival... Pero el hogar es algo más que un simple refugio. Cuidamos nuestra casa con cariño, vestimos las paredes con recuerdos de nuestro pasado y sabemos que en ellas podemos proyectar nuestros sueños futuros. El hogar es el sitio al que deseamos regresar después de un largo viaje, el lugar que nos sigue acunando cuando ya somos adultos.

Esta relación íntima que mantenemos con nuestro hogar ha ido encontrando en las constituciones modernas un acomodo legal que, sobre el papel, debería garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de tejer ese vínculo privilegiado. Sin embargo, sabemos que no es así, y lo sabemos desde ya hace mucho. Los procesos de industrialización y de crecimiento urbano característicos de la modernidad generaron una serie de problemas relacionados, como el hacinamiento o la insalubridad, que imposibilitaron que una parte de la población accediera a una vivienda en condiciones dignas. Pero también sabemos otra cosa: aquello que fue enmarcado por los políticos e «intelectuales» de la época como «el problema de la vivienda» fue, en realidad, el problema de la vivienda de las clases populares y trabajadoras. Y así sigue siendo. Los grandes propietarios de antaño —nobles, aristócratas y una parte de la burguesía— continúan hoy acumulando grandes cantidades de viviendas que no habitan, perpetuando unas desigualdades sociales que pueden datar de siglos atrás. Multitud de estudios lo muestran con precisión. Ciertamente, las políticas de construcción de viviendas por parte de los estados crecieron durante la segunda mitad del siglo XX, pero lo hicieron de manera desigual y no lograron solventar un problema que, lamentablemente, pervive en nuestras sociedades actuales.

Con el paso de los años, la vivienda fue mutando de manera acelerada y pasó de ser un valor de uso a ser un valor de cambio, convirtiéndose en el principal mecanismo de especulación financiera que nos llevó a la crisis económica de 2009. Además, el negocio global de la vivienda ha contribuido a minar su

estatuto de objeto privilegiado, troceándola sistemáticamente hasta convertirla en aquello que los brókeres llaman «activo financiero».

Son muchos los movimientos sociales que se han levantado, y que se levantan todavía, para reivindicar una vivienda digna. Movimientos que han luchado para regular el precio de los alquileres y frenar el poder desmedido de los propietarios. Movimientos para conseguir que el desahucio no sea una caprichosa arbitrariedad. A menudo —y ante la incapacidad económica de sufragarse una vivienda—, ha tenido que ser también la comunidad autoorganizada la que con sus propias manos alzara tabiques y construyera tejados. Mientras siga habiendo casas sin gente en lugares donde hay gente sin casa, no viviremos en sociedades que aspiren a llamarse «justas». El mundo, sin un hogar, es un lugar verdaderamente inhóspito.

La solución, por otro lado, no puede pasar por reducir cada vez más los mínimos del espacio habitable. A menudo, se presentan como presuntas soluciones al problema de la vivienda proyectos que cabe definir como infraviviendas: espacios tan reducidos, sin ningún acceso al exterior, que pueden convertir el dulce recogimiento del hogar en un traumático encierro. La pandemia provocada por la covid-19 lo ha dejado patente.

Hoy, distintas ciudades de todo el mundo buscan asociarse para abordar conjuntamente un problema que es tan universal como la lucha contra el cambio climático o el feminismo; de Valparaíso a Río de Janeiro hasta llegar a Barcelona, al otro lado del Atlántico. En las ciudades vive ya más de la mitad de la población, y se espera que en un futuro no muy lejano este porcentaje siga aumentando. Las ciudades tienen una mirada más precisa y actualizada de lo que ocurre dentro los límites de su administración que la que tienen los estados; es coherente que tengan un rol más importante que el que tienen en la actualidad en la articulación de las políticas de vivienda. Es más: si el objetivo es el de construir soluciones reales que nos permitan avanzar hacia la resolución definitiva del problema de la vivienda, están destinadas a hacerlo.

EL TURISMO: UN FACTOR IMPORTANTE PARA EL DERECHO A LA VIVIENDA EN MUCHOS MUNICIPIOS

José Manuel Mejías

¿Puede la proliferación del fenómeno de las viviendas turísticas condicionar de alguna forma el derecho a la vivienda en nuestras ciudades? Enunciada así la pregunta parece una obviedad. Claro que lo condiciona. De hecho, en nuestro país la masificación turística en grandes ciudades ha provocado un incremento desahogado del precio de los alquileres, una drástica disminución de la oferta de vivienda residencial en determinadas zonas, múltiples problemas de convivencia o una pérdida de identidad de barrios enteros.

En nuestro caso, hemos tomado la iniciativa de adelantarnos al problema de la turistificación de nuestro municipio, utilizando las herramientas a nuestro alcance. Somos una pequeña agrupación municipalista (Ganemos Jerez), con una sola concejalía en la oposición, de una ciudad media andaluza (Jerez de la Frontera) en la que se está haciendo una apuesta muy fuerte por el turismo como monocultivo económico. Y, aunque hoy por hoy no existe un grave problema con las viviendas turísticas, le vemos las orejas al lobo, pues tenemos un centro histórico muy deteriorado —en algunas zonas en ruina— y se está abriendo paso la opción de convertirlo en un verdadero parque temático.

Hemos querido actuar con tiempo, de manera preventiva y con rigor, impulsando un estudio financiado con recursos de la propia agrupación municipalista, que lleva por nombre *Análisis de la vivienda turística en Jerez de la Frontera: situación actual y perspectivas de futuro*, elaborado por una empresa consultora independiente de nuestra propia ciudad: Agua y Territorio. El estudio está ya disponible en nuestra web: <http://ganemosjerez.es/wp-content/uploads/2021/09/P07.21.-Inventario-VFT-Jerez-7-septiembre.pdf>

La investigación se ha desarrollado a través de un análisis cuantitativo, utilizando fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma y del Ministerio (Registro

de Turismo de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística, etc.), así como de empresas y portales especializados en el negocio de las viviendas con fines turísticos. También ha sistematizado toda la información documental oficial disponible en materia urbanística, de desarrollo económico en el ámbito turístico, así como de los planes oficiales de vivienda. Para finalizar, se celebraron varios encuentros participativos, quizá lo más interesante del estudio: uno, con profesionales del sector inmobiliario, turístico y técnicos de la administración local, y otro, con personas integrantes de distintos movimientos sociales relacionados con la vivienda. Estos encuentros ayudaron a dimensionar y matizar la información disponible, tanto cuantitativa como cualitativa, que estuvo a disposición de todos los participantes.

Las conclusiones principales han sido las siguientes:

1. Hoy por hoy, no existe un grave problema con las viviendas turísticas en Jerez, pero, de no empezar a actuar pronto, puede llegar a serlo. Se ha producido un incremento explosivo en los últimos cinco años, aunque sigue habiendo una baja densidad turística. No tenemos un problema actual de gentrificación, pues el centro está muy despoblado, muy deteriorado, con algunas zonas en ruinas, pero su rehabilitación progresiva se está centrandó en construir apartamentos y viviendas turísticas. Solo un dato: en la última década, el grupo de edad que más se ha reducido en la escasa población del centro de la ciudad es el de menores de 45 años. Se está constatando el envejecimiento y la falta de relevo generacional.
2. El «turismo de plataforma» totalmente desregulado tiene un impacto negativo en el sector hotelero tradicional. También podemos estar ante un fenómeno sobredimensionado, un nuevo efecto burbuja en el sector inmobiliario, pues en general se observa un crecimiento de la oferta de alojamientos turístico, pero las pernoctaciones no crecen al mismo ritmo.
3. Si ahora no se actúa con otras políticas de vivienda que contemplen la repoblación como estrategia integradora, el centro de nuestra ciudad será una gran terraza de bar, donde no habrá vida, ni comercios tradicionales, ni escuelas, ni familias residentes, ni convivencia y, todo ello, terminará por desconfigurar totalmente nuestros barrios tradicionales, que perderán su identidad y cultura.

Lamentablemente, por ahora no está en nuestras manos implementar políticas públicas que protejan el derecho a la vivienda digna y asequible, puesto que no estamos en el gobierno municipal, pero sí estamos, dentro de nuestra posibilidades, asesorando y poniendo nuestra estructura política al servicio de la paralización de desahucios, impulsando propuestas sobre rehabilitación

integral de barrios de infravivienda, facilitando el acceso a la vivienda para los jóvenes, ofreciendo alternativas habitacionales para jóvenes extranjeros extutelados, poniendo suelo a disposición de cooperativas de viviendas en cesión de uso o la compra de vivienda de segunda mano para alquiler social.

En el marco de esas propuestas y de nuestra defensa del derecho a la vivienda, hemos propiciado este estudio sobre la vivienda turística, que es también una acción política, con la que pretendemos lo siguiente:

- Desenmascarar la actual política del gobierno municipal de construcción y rehabilitación del centro histórico en Jerez porque disfraza de «*política de vivienda y revitalización del centro histórico*» algo que no lo es.
- Reclamar la necesidad de regular esta actividad económica, las viviendas turísticas, para que sea transparente, para que tenga una fiscalidad adecuada que no compita deslealmente con el resto de establecimientos para pernoctar que hay en nuestra ciudad y para que no vaya en contra del derecho a la vida y a la vivienda de las vecinas de Jerez.
- Explicar que lo que se vende como inversiones beneficiosas para Jerez en realidad no son una inversión de ciudad, pues confrontan con el derecho y el acceso a la vivienda, expulsan a la poca gente que vive ya en el centro y limitan enormemente el acceso a la vivienda de las nuevas generaciones. Estas inversiones conllevan la terciarización del centro de la ciudad, unas inversiones extractivas de los valores y unas condiciones del territorio como mera explotación económica al servicio del sector turístico e inmobiliario.
- Denunciar la falta de voluntad municipal de afrontar esta situación. El Ayuntamiento de Jerez tiene recursos de sobra para haber estudiado hace años estas características, incluso de forma mucho más exhaustiva; sin embargo, ha tenido que llegar un grupo político pequeño, con un solo concejal, a hacer lo que tendría que haber sido su trabajo.

Apostamos por un modelo sostenible que ponga a las personas en el centro de su actividad, que garantice el derecho a la vivienda digna, que no dé pie a la especulación, al «todo vale» ni a acciones salvajes e irrespetuosas con nuestro entorno; un modelo amable en el que puedan convivir casas, para que los vecinos y vecinas vivan, con hoteles y hostales, para el desarrollo económico del sector turístico. Y también, por qué no, con apartamentos y viviendas turísticas, pero con una regulación lógica y sensata.



HABITAR Y GANAR DERECHOS EN EL LABERINTO EUROPEO

Ana Fernández

En los dos últimos años de pandemia, la defensa del derecho a la vivienda, en el marco de una gran crisis sanitaria y social, viene topándose con los muros de siempre, fuertemente apuntalados por ese ente sin rostro, pero con tentáculos muy largos, que llamamos «mercado». El 14 de diciembre de 2021 vimos cómo la iniciativa legislativa popular por una ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, presentada por varias organizaciones sociales en el Parlamento español, quedó sin posibilidad de tratamiento y debate en sede parlamentaria por obra y gracia de quienes dicen ser los representantes del pueblo. En eso de vetar —y callar— a la iniciativa ciudadana en una cuestión tan trascendente como el derecho humano a la vivienda, PP, VOX y PSOE no parecen tener diferencias. Mejor «lo arreglan» entre ellos.

Paralelamente, justo un día antes, el 13 de diciembre, pero con nula trascendencia mediática en nuestro territorio, vencía otro plazo de tanta o mayor trascendencia para la defensa de este derecho, que podría llegar a tener un impacto no solo sobre la voracidad del mercado, sino también sobre la capacidad misma de hacerle frente al nivel local. Me refiero al plazo para presentar alegaciones a la iniciativa de regulación europea de los alquileres de corta duración (*short term rentals*). Y es que ese ente sin rostro sabe muy bien cómo operar silenciosamente y persuadir a los actores clave en varios frentes a la vez.

Quienes, como yo ahora, habitamos Barcelona sabemos que una voluntad política municipal firme posee cierto margen, aunque limitado, para poner coto a procesos expulsivos y de gentrificación vinculados a la especulación inmobiliaria y que afectan directamente a las condiciones de acceso a una vivienda digna. Estos son unos procesos que discurren en paralelo a la mercantilización de la vivienda como instrumento financiero de obtención de renta y de la turistificación de las ciudades a modo de nuevas minas para una

economía extractiva. Herramientas como el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos) de Barcelona han puesto en evidencia que es posible hacer frente a estos procesos a nivel local, a pesar de las limitaciones de competencia y de recursos. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, entre 2016 y 2020 este municipio ya había recuperado para uso como vivienda 1 982 de los pisos que se ofrecían como alojamientos turísticos.

Si se aprobaran iniciativas de regulación europea como la arriba comentada, este tipo de herramientas locales podrían peligrar, pero también podrían ser de ayuda si se hicieran en la línea de defender el derecho a la vivienda. Todavía no hace un año, tras la movilización de diferentes redes como la iniciativa ciudadana europea Housing for All, el Parlamento europeo aprobó una histórica resolución sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos [2019/2187(INI)]. Esta hacía especial referencia al impacto negativo de los alquileres turísticos en relación con los precios del alquiler residencial y a procesos de despojo que tornan inasequibles las viviendas para la población, así como al vaciamiento de los centros históricos de las ciudades y el deterioro de la habitabilidad, en general. Por ello, se requirió a la Comisión Europea para que regulara los contratos de corta duración. Sin embargo, y en clara contradicción con el espíritu de dicha resolución, el informe emitido por la Comisión Europea (*Inception Impact Assessment*) para fundamentar la nueva propuesta de regulación va en la dirección opuesta. Es decir, plantea una regulación para incentivar el alquiler de corta duración con una estricta orientación de mercado, buscando eliminar lo que denomina «carga administrativa» de cada lugar, que genera «barreras de acceso al mercado» (eufemismo para referirse al control de licencias y limitaciones de nivel local).

En la era de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la turistificación de las ciudades, ocurrida en paralelo al incremento de las desigualdades y al retroceso del poder adquisitivo de la clase trabajadora frente a la rentabilidad del capital, hoy en día las propuestas de regulación deben tener en cuenta, más que nunca, el fuerte componente transnacional y translocal que atraviesa estos procesos. La acción ciudadana debe articularse no solo al nivel local, como ha ocurrido con la plataforma Iniciativa Ley Vivienda, la cual celebramos, a pesar de su aparente «derrota», por evidenciar el déficit y las falencias de la democracia que llamamos «representativa», sino también a otros niveles. Por lo tanto, la acción ciudadana debería aprovechar con la misma inteligencia la posibilidad de ocupar y reclamar para sí espacios de incidencia en el nivel regional, en este caso, el europeo, porque el potencial impacto de lo que allí se juega y se decide es enorme.

Por eso, en esta línea de defensa de los derechos fundamentales como es el del acceso a una vivienda digna, y quizá también para seguir alimentando el

espíritu de rebeldía e inconformismo que debe mantenernos firmes y alerta en la lucha, quiero aprovechar esta ventana al mundo para comunicar y celebrar espacios de construcción colectiva e interlocal, generados también gracias a la era digital. Me refiero a la iniciativa impulsada por la coordinación europea de la Alianza Internacional de Habitantes (IAI, por sus siglas en inglés), que supo convocar en tiempo récord a organizaciones y referentes del entorno para informar, debatir y proponer una alternativa a la actual propuesta de regulación de alquileres de corta duración planteada por la Comisión Europea. Con la participación de personas expertas de diferentes ciudades y más de un centenar de asistentes, la IAI realizó un encuentro virtual el 10 de diciembre de 2021, cuyo resultado fue redactar un compromiso conjunto basado en los derechos humanos para regular dichos alquileres. Este texto ha sido remitido a la Comisión Europea dentro del período de consulta a organizaciones y administraciones locales que finalizaba el 13 de diciembre. Tanto el encuentro celebrado como la propuesta pueden consultarse en la página de Facebook de la IAI.

Todavía con el sabor amargo de lo ocurrido con la iniciativa legislativa popular española, es difícil mantener la esperanza en que las instituciones europeas escuchen el clamor de las organizaciones y la ciudadanía frente al poder de «persuasión» de los operadores del mercado inmobiliario. Pero, en este tiempo de *Matrix Resurrections*, seguir fortaleciendo espacios de resistencia, articulación y encuentro ciudadano para democratizar instituciones, coordinando la incidencia política transfronteriza en defensa de los derechos fundamentales y de las necesidades básicas, me sigue pareciendo imprescindible.

Este artículo se publicó por primera vez el día 11 de enero de 2022 en la columna «Una ventana al mundo: la actualidad global con mirada local», de La Futura Channel (lafutura-channel.net).

TRANSFORMANDO CÓMO CUIDAMOS

CUIDADOS Y SOLIDARIDAD COMUNITARIA

Luisa Broto Bernués

Como nos ha enseñado el feminismo, cuando hablamos de *cuidados* estamos hablando de poner en valor nuestra vulnerabilidad y nuestra interdependencia, nuestra responsabilidad respecto a las otras personas y la necesidad de poner en el centro la sostenibilidad de la vida, una vida que merezca la pena ser vivida. Por ello, el mayor reto de las políticas públicas es no solo la satisfacción del *cliente*, sino sobre todo su cuidado, a partir de medidas para la gestión comunitaria de estos cuidados.

Normalmente, la concepción de las políticas sociales se ha basado en lo que tradicionalmente se ha denominado las éticas de la justicia, una serie de procedimientos y normas que han tenido una gran importancia como elemento para reducir la arbitrariedad y como garante del acceso en igualdad a los derechos sociales, a los servicios y a las prestaciones. Son estas unas éticas esencialmente universalistas, de carácter igualitario (no de equidad), racionales, imparciales, centradas en los derechos de los individuos y de carácter formalista que se centran no tanto en los resultados como en los procedimientos.

Pese a la importancia de este planteamiento desde cualquier modelo que busca una perspectiva de derechos sociales, su propia lógica uniformadora, objetivista y aséptica de las necesidades y su satisfacción es muy limitada para abordar la individualidad y desarrollar alianzas emocionales y estratégicas con los ciudadanos. Es aquí donde la ética del cuidado cobra todo su potencial al poner en el centro el contexto, las variaciones entre situaciones concretas, la vivencia subjetiva y los factores emocionales, el cuidado del otro, el cuidado mutuo y el cuidado del entorno. Es decir, una apuesta por la dimensión social del ser humano y por el protagonismo de las personas en la construcción de su propia realidad, a través del empoderamiento personal y colectivo en el contexto de nuestras redes de existencia. Porque solo desde la participación se puede construir una ciudad donde quepamos todas; porque ser ciudadana o ciudadano es mucho más que vivir en la ciudad: supone la reivindicación, el reconocimiento y el ejercicio de derechos políticos y sociales que permitan intervenir en las políticas de nuestras ciudades.

Si las ciudades y sus barrios son el espacio en el que se manifiestan de manera más cruda las dinámicas globales, es también en las ciudades y en sus barrios donde podemos poner en marcha políticas para el cambio, que desde la cercanía y la proximidad den respuesta a las verdaderas necesidades que hemos redescubierto. Por ello, es cada vez más necesario implementar políticas públicas que, desde una lógica de gestión públicocomunitaria, avancen en esta dirección. Y nos atrevemos a proponer algunas ideas sobre las que hemos venido trabajando en Zaragoza durante los últimos años, en su mayor parte sin un desarrollo en la práctica y que en el fondo se encuentran fuertemente interrelacionadas y vinculadas.

Las Islas de cuidados (quizá sería mejor llamarlas «Archipiélagos» de cuidados, como conjunto de islas que forman un todo) son espacios interdisciplinarios y públicocomunitarios para atender las necesidades de las personas mayores o en situación de dependencia.

Su intención, además de dar respuesta a las necesidades de apoyo domiciliario atendidas actualmente desde el Servicio de Ayuda a Domicilio y la prestación de otros servicios y ayudas técnicas, será convertirse en un espacio de apoyo comunitario en coordinación con los servicios médicos, el comercio de proximidad, los vecinos y las entidades sociales, con el fin de tejer redes de proximidad, apoyo social y emocional a los cuidadores no profesionales, y detectar y dar respuesta a las situaciones de soledad no deseada. Pero no únicamente con ese fin, sino que también estarían destinadas a responder a las necesidades de las familias de atención a los niños y niñas 24 horas al día los 365 días del año, a partir de un amplio dispositivo de servicios para la conciliación familiar de base comunitaria y adaptados a las necesidades de los territorios. Estos dispositivos, además, incluirían tanto sistemas de conciliación y de cuidado en el domicilio, de niños y niñas, ya sea de manera individual o colectiva, como espacios para atender situaciones excepcionales o de urgencia que, como se ha mencionado, den respuesta las 24 horas del día los 365 días del año.

La utilización de estos dispositivos sería por horas y a un precio reducido, permitiendo adaptar su uso a las necesidades reales de conciliación, y las familias podrían asumirlo económicamente.

La necesidad de cuidados desde este proyecto deja de ser una mera necesidad individual a la que hay que dar una respuesta igualmente individual con una lógica de menú de servicios para considerarse una necesidad colectiva en un contexto concreto, no aislada, sino que forma parte de una realidad compleja a la que es necesario dar respuesta. Se corresponsabiliza así a toda

una comunidad sin que esto suponga una dejación de funciones por parte de lo público.

Un instrumento importante para gestionar estas políticas y como parte de las Islas de cuidados sería la potenciación de las cooperativas de cuidados, entendidas como cooperativas de personas usuarias y trabajadoras que, con un menor nivel de burocratización, suponen un mayor intercambio de información informal, de construcción de redes comunitarias y, en definitiva, de autogestión comunitaria en la resolución de las propias necesidades.

Situar el cuidado en el centro supone un imperativo ético, una exigencia jurídica y una responsabilidad política para la construcción del mundo privado y público, que contribuye a consolidar la equidad de género, la igualdad, la solidaridad, el tejido y el apoyo social, así como la justicia social.



TRANSITANDO HACIA LA CIUDAD DE LOS CUIDADOS: EL CASO DE BARCELONA

Gemma Tarafa Orpinell, Carolina Recio Cáceres y Elia Gran

El trabajo de cuidados es imprescindible para sostener la vida. Esta afirmación, tras el impacto de la pandemia provocada por la covid-19, se ha hecho más obvia y comprensible. A pesar del cambio de percepción, los cuidados aún no han logrado desprenderse de su halo de invisibilidad. Es como si «aquello» que sostiene la vida de las personas no existiera, como si fuera un elemento natural e inherente a las mujeres por el mero hecho de serlo y, por tanto, no fuera merecedor de reconocimiento social y económico. En este sentido, la prestación y la recepción de cuidados aún no han sido capaces de constituir un derecho de ciudadanía. No hemos contado con políticas públicas robustas que consideraran el derecho a dar y recibir cuidados como uno de los elementos esenciales de la construcción de un estado social.

Desde el movimiento feminista y por parte de un buen número de académicas de las ciencias sociales, la dimensión del cuidado se ha vindicado como un elemento esencial de nuestras vidas. Este trabajo que permanece invisible es el que nos sostiene en nuestra vida cotidiana; necesitamos alimentarnos, tener unos mínimos de higiene, vivir en condiciones óptimas de limpieza y seguridad, de bienestar emocional y físico, etc. Y a ello debe añadirse que convivimos con personas que en determinadas etapas de la vida requieren una mayor atención por su falta de autonomía personal, especialmente al inicio y al final de la vida.

La pandemia provocada por la covid-19 ha expuesto nuestra vulnerabilidad como individuos y como colectivo. La actividad productiva se vio frenada durante unos meses, sin embargo, nunca dejamos de cuidar. Un ejemplo de ello es que muchos de los trabajos que se declararon esenciales durante esta etapa de excepción fueron precisamente aquellos relacionados con el cuidado de la vida: desde la atención sanitaria, que obviamente fue central para

paliar la pandemia, al cuidado de colectivos con vulnerabilidad social, pasando por el cuidado de personas mayores y con discapacidad en residencias y domicilios. Trabajos, además, que por su naturaleza están muy feminizados. Tampoco se redujo el trabajo de cuidados en los hogares, pues con el cierre de las escuelas y los centros de día se incrementó. Con escuelas cerradas y con menos recursos abiertos, las familias tuvieron que asumir el coste de cuidar las 24 horas del día a la par que teletrabajaban. Fue evidente entonces que la vindicación feminista no era un lema, sino una realidad (a veces muy dura para quien debió asumir la sobrecarga de cuidados).

La situación sin precedentes que hemos vivido debe ser aprovechada para que el cuidado emerja de la zona gris en la que se encuentra y reivindicarlo como un elemento esencial para construir sociedades más justas, planteando una revisión de los sistemas y las políticas actuales que inciden en el cuidado. Debemos actualizarlas, dotarlas de recursos y pensarlas desde la necesidad de dar y recibir cuidados a lo largo de la vida. Las ciudades deben ser los espacios donde pensar fórmulas nuevas, innovadoras y que planteen que el cuidado debe estar en el centro de las políticas.

Las ciudades son los espacios de vida cotidiana en los que nos movemos y nos relacionamos, donde consumimos, trabajamos y cuidamos diariamente. La ciudad es el lugar idóneo para repensar los sistemas de organización social de los cuidados avanzando hacia lugares más humanos, más igualitarios y más comunitarios, donde la idea de interdependencia guíe las actuaciones público-comunitarias.

Barcelona, ciudad cuidadora

Desde el Ayuntamiento de Barcelona ya hace algunos años que se está liderando este cambio de óptica. Somos una ciudad que quiere ser reconocida como ciudad cuidadora, como una ciudad para la vida. Por ello, la perspectiva feminista atraviesa todas las políticas para poner la vida en el centro: desde políticas urbanísticas que están transformando la ciudad para que sean las personas quienes se reapropian del espacio público hasta las políticas sociales que ponen en el centro las necesidades de las personas.

Esta mirada se condensó en la medida de gobierno por una **Democratización de los Cuidados**² presentada en 2017. Desde esa perspectiva, se han concebido muchas de las intervenciones transformadoras que tienen la voluntad de hacer políticas que generen nuevos marcos basados en derechos y que

² https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/mg_para_la_democratizacion_de_los_cuidados.pdf

desenmarcarán el cuidado del ámbito exclusivamente privado (y fuertemente desigual).

En primer lugar, se repensaron algunos de los servicios de atención a la dependencia que se prestan en el marco de lo que define la ley de dependencia estatal y la ley autonómica de Servicios Sociales. El objetivo era redefinir y mejorar aquellos servicios que el Ayuntamiento debe prestar, buscando todos aquellos elementos de mejora que fuéramos capaces de encontrar con las herramientas de la ciudad.

La revisión del servicio municipal de asistencia domiciliaria (SAD, Servicios de Atención Domiciliaria) fue un primer avance hacia una nueva fórmula de organización del servicio pensado desde la calidad de la atención de la persona usuaria hasta la mejora de las condiciones y del reconocimiento de las personas trabajadoras. Asimismo, lo hemos acompañado con otros servicios que ya forman parte del modelo de Barcelona, como las viviendas con servicios para personas mayores, que están resultando un excelente recurso para fomentar su autonomía.

En segundo lugar, se apostó por la innovación social como elemento distintivo de las políticas sociales. Y, de ahí, han surgido propuestas novedosas que tratan de poner en el centro los cuidados: el centro Barcelona Cuida y el proyecto VilaVeïna, o el canguraje municipal. Son respuestas nuevas que parten del análisis de la complejidad que acompaña actualmente la vida en la ciudad.

Por un lado, el centro **Barcelona Cuida**³ es un centro municipal pionero que se dedica a asesorar, acompañar y ofrecer información a trabajadoras de los cuidados. Su objetivo es convertirse en un punto de encuentro de diferentes servicios, programas y recursos relacionados con el cuidado. Entre los programas que ofrece destacan aquellos relacionados con el asesoramiento y el acompañamiento tanto para las trabajadoras del hogar como para las familias que necesitan contratar cuidados, tratando de ofrecer herramientas para que esta contratación sea legal y genere derechos. Esto ha significado que en 2021 los equipos de asesoramiento jurídico hayan atendido a 1 308 personas, 874 de las cuales eran familias cuidadoras y 348, trabajadoras del hogar. Estos asesoramientos, entre otros resultados, permitieron que en 2021 se produjera la regularización de 140 contratos de trabajadoras del hogar que, hasta entonces, tenían una relación laboral de informalidad. El centro también pretende ser un espacio de coordinación de profesionales y servicios, y acoger a entidades que puedan prestar algún servicio grupal y de apoyo mutuo relacionado con el cuidado.

³ <https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/espacio-barcelona-cuida/que-es>

Otro paso hacia la ciudad cuidadora es el proyecto iniciado en 2021 y conocido como **VilaVeïna**⁴. Dicho proyecto pretende organizar la ciudad en unidades territoriales de entre 10.000 y 30.000 habitantes, y organizar y dar respuesta a necesidades de cuidado desde la proximidad. Se plantea que una unidad territorial reducida puede facilitar esta orientación hacia los cuidados y favorecer la existencia de comunidades que se cuidan en toda la ciudad. El proyecto se inspira en el modelo de ciudad de los 15 minutos y en la voluntad de generar un imaginario de «pueblo». El objetivo final es construir comunidades de cuidado desde la proximidad, favoreciendo lazos y relaciones comunitarias para cuidar desde una dimensión colectiva y no desde la soledad. Hasta 2023 se desplegarán 16 VilaVeïnes por toda la ciudad y, desde el mes de octubre de 2021, cuatro de ellas ya están en funcionamiento. En cada VilaVeïna se despliega una cartera de servicios vinculada al asesoramiento en torno al proceso de cuidado (facilitando información sobre todos los recursos que ofrece la ciudad), servicios de respiro para personas cuidadoras (espacios de apoyo mutuo, caminatas saludables), proyectos dirigidos al cuidado de la infancia (espacios familiares, espacio de canguro municipal), y pretende también acompañarlo de pequeñas intervenciones en el espacio público para que los barrios también sean espacios cuidadores desde el punto de vista urbanístico.

Finalmente, otro de los servicios innovadores destacables es el Servicio Concilia, un servicio gratuito de cuidado de niños y niñas después del horario escolar. El objetivo del proyecto municipal es contribuir a armonizar la vida laboral, familiar y personal mediante un servicio que responda a las necesidades de conciliación existentes, principalmente por parte de las mujeres, en lo que a la atención de los menores y sus cuidados se refiere.

En definitiva, en el Ayuntamiento de Barcelona actualmente tenemos la determinación de ser una ciudad feminista y cuidadora. Esto no es un mero lema. En Barcelona, los hechos muestran que estamos poniendo las bases no solo discursivas sino también transformadoras desde lo tangible para avanzar hacia una ciudad que cuida. El cuidado emerge tanto en la concepción del modelo urbano (las supermanzanas son una propuesta urbana que humaniza la ciudad y le da protagonismo al peatón y a las relaciones humanas) hasta la revisión e innovación constante en el ámbito de las políticas sociales. Una ciudad justa y sin miedo es una ciudad que acompaña y cuida, que pone las bases para desarrollar una vida digna y plena de todas las personas que viven en ella. Este es el camino elegido por Barcelona.

⁴ <https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/vilaveina>



¿PODEMOS PROSPERAR SIN CRECIMIENTO ECONÓMICO?

HACIA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO: INTRODUCCIÓN

Toni Ribas

Desde que el neoliberalismo se convirtió en la ideología predominante en los años ochenta, la obsesión por el crecimiento económico ha condicionado fuertemente la política y la gestión empresarial en todo el mundo.

Por eso, las normativas gubernamentales a todos los niveles se centran en el crecimiento y en facilitar que las empresas y los inversores obtengan mayores beneficios. Al mismo tiempo, ignoran consideraciones importantes como el bienestar social, la igualdad, las condiciones laborales, el equilibrio entre vida laboral y personal, y, por encima de todo, la conservación del medioambiente.

Como consecuencia, muchos derechos de los trabajadores, ganados dolorosamente durante décadas de lucha, han dejado de existir. La superpoblación y la automatización, entre otras causas, son sinónimos de un menor número de empleos disponibles, y la perversión de la ley de la oferta y la demanda implica que uno tenga dificultades extremas para encontrar un empleo decente independientemente de su nivel de formación.

La brecha entre los que tienen y los que no tienen se amplía cada día más. La riqueza está en manos de unos pocos y quienes verdaderamente necesitan un empleo (es decir, unos ingresos adecuados para vivir) se ven obligados a aceptar los empleos que las empresas ofrecen, a menudo con unas condiciones deplorables: turnos largos, salarios bajos y una actitud desafiante de «lo tomas o lo dejas» por parte de su futuro empleador.

Hace tiempo que la economía circular y humana de nuestros abuelos ha quedado atrás y ha sido reemplazada por un modelo lineal de extracción, producción, consumo y desecho. Este modelo agota los recursos naturales, consume una cantidad ingente de energía y genera millones de toneladas de residuos que no podemos gestionar.

Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este modelo crecen exponencialmente y ahora ya nadie argumenta que el cambio climático no lo provoca el ser humano. Los efectos del cambio climático provocan

que las condiciones de vida sean extremadamente difíciles, sobre todo en los países en vías de desarrollo, lo que se traduce en flujos migratorios y en una posible competición por los empleos, que, a su vez, da lugar al racismo y a políticas exteriores totalmente inaceptables.

Sin embargo, los países desarrollados no son inmunes al cambio climático: el aumento de las temperaturas y el clima extremo afectan mucho a las cosechas y a la fauna salvaje, de modo que la producción alimentaria se reduce y los precios suben de acuerdo con las leyes capitalistas. Así que las promesas de un crecimiento económico perpetuo (empleos para todos, mucho dinero para todos y bienestar generalizado) resultan ser una fantasía y, de hecho, nos hacen retroceder unas cuantas décadas en cuanto a derechos sociales, ingresos medios y servicios públicos.

Pero estos son los conceptos ampliamente utilizados para definir el desarrollo o la prosperidad y, como vemos claramente que el crecimiento económico no supone prosperidad para la mayoría, quizás deberíamos buscar otras maneras de alcanzar este objetivo. La prosperidad no son solo los ingresos, es el acceso universal a la sanidad, a la educación y a la vivienda; es la conservación del medioambiente para que todos vivamos en un lugar bonito y seguro; es conciliar nuestra vida laboral con la personal; es poder mejorar nuestra relación con los demás creando comunidades que se ayuden mutuamente; es, en esencia, dar a todo el mundo la posibilidad de tener una vida feliz.

Así pues, el reto es pasar a un sistema económico que tenga en cuenta todos estos elementos y sirva a toda la humanidad para tener una vida mejor sin arrasar con los recursos naturales que permiten que la vida humana sea posible.

El modelo capitalista del crecimiento eterno, en el que el PIB es el rey, en el que cuestiones como los «factores externos» (daños directos e indirectos al medioambiente o a la sociedad provocados por el sistema de producción, que no se incluyen en indicadores como el PIB), la economía de la prestación de cuidados o la justicia social no se tienen en cuenta, no garantiza la igualdad ni el bienestar universales. ¿Hay alternativas a este modelo?

En este capítulo analizaremos algunas de esas alternativas e intentaremos arrojar algo de luz sobre el problema y abordar la ortodoxia predominante en el pensamiento económico. Desde hace ya décadas, las universidades y facultades de economía de todo el mundo han dejado de cuestionar el sistema capitalista y enseñan a los futuros economistas casi como si se enseñara una religión, incluyendo solo los conceptos y las ideas que defienden el crecimiento económico como la única manera posible de prosperar. **Ha llegado la hora de adoptar otra estrategia.**

SIN MIEDO AL DECRECIMIENTO ECONÓMICO

Gabriela Cabaña

Hay pruebas cada vez más sólidas de las estrategias económicas de decrecimiento y poscrecimiento que demuestran que desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos (lo que se denomina *crecimiento verde* o incluso *desmaterialización*) es extremadamente improbable, si no imposible. Imposible al menos a la escala, la profundidad, la velocidad, la magnitud y la elasticidad que necesitamos con tanta urgencia. Esto es tan evidente que en nuestros escenarios políticos actuales, como los que se desarrollan en los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), continuamos confiando en la implementación de tecnologías que todavía no existen para capturar y eliminar carbono, y así compensar nuestro exceso de emisiones. Es una estrategia muy irresponsable ante la crisis ecológica a la que nos enfrentamos.

Al contrario de lo que afirman las estrategias dominantes de crecimiento ecológico, las tecnologías de energía renovable tienen límites (respecto al uso del suelo y los requisitos materiales como la madera de balsa y los minerales de tierras raras) y además dependen considerablemente de los combustibles fósiles y sus derivados, como el plástico. Por otro lado, muchas veces se conciben como grandes empresas, lo que se basa en una lógica de desplazamiento de la población de su tierra. En consecuencia, no podemos limitarnos a esperar que las energías renovables sostengan convenientemente nuestro consumo actual de energía. Este aspecto crucial suele desestimarse con la quimera de algún avance tecnológico milagroso que todavía está por llegar.

Hay un hecho histórico que debemos entender: la explotación de los combustibles fósiles nos proporcionó una fuente increíble de energía muy concentrada y aparentemente barata durante un par de siglos. Digo «aparentemente» porque tenía, y sigue teniendo, muchas consecuencias negativas que se han ignorado a propósito para que la energía barata circule sin dificultades por

todo el mundo. Sería un error poner las mismas expectativas y exigir lo mismo a las tecnologías renovables como la eólica y la solar, no solo por los impedimentos técnicos, sino también porque se continuarían reproduciendo las relaciones imperialistas y explotadoras de nuestra civilización productivista. En lugar de quedarse sentado a esperar a que los responsables políticos inventen un nuevo remedio tecnológico (el último de los ecomodernistas es volver a la energía nuclear, ahora calificada como «verde»), un pensamiento político verdaderamente radical debe poner en duda la ideología del crecimiento económico. Hasta ahora el crecimiento económico ha sido un muro inamovible al que hemos intentado ajustarnos, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Ha llegado la hora de echar el muro abajo. Mejorar las condiciones de vida y proteger los derechos sociales de todas las personas puede alcanzarse con la riqueza y los recursos existentes —y, probablemente, incluso con menos— si lo que queremos es hacer frente a las estructuras de poder que mantienen ese patrimonio compartido de la humanidad en manos de unos pocos. La ideología del crecimiento se basa en la generación de residuos y en la creación forzada de escasez. Podemos transformar los principios políticos que rigen nuestras economías para hacer lo contrario: crear una forma compartida y radical de abundancia. Es lo que ofrece el decrecimiento.

El nuevo mundo después de la pandemia (el cual aún no sabemos cuándo llegará) ofrece una posibilidad de replantear y cuestionar las bases de nuestro sistema económico actual. O al menos es lo que cabría esperar, ya que hemos visto claramente la incapacidad de nuestras sociedades de cuidar a toda la gente cuando nos enfrentamos a una amenaza directa contra nuestra salud. Este podría haber sido un buen momento para recordar que no hemos creado lo que llamamos «la economía» para producir una cantidad determinada de bienes, sino para que todos estemos cómodas, alimentadas y protegidas. Empujar a la gente bajo el autobús para que «la economía» no se detenga solo tiene sentido en un sistema obcecadamente cosificante como el nuestro. Los diferentes fondos de recuperación poscovid-19 señalan tristemente en esta dirección. En Chile, por ejemplo, nuestro plan repite una fórmula conocida: grandes proyectos de inversión en infraestructuras y hacer que la gente vuelva a trabajar. Incluso se ha propuesto «acelerar» la evaluación de los estándares medioambientales de los grandes proyectos de inversión. Y eso cuando hay pruebas sólidas de que la degradación de los ecosistemas y la biodiversidad nos expone a sufrir más pandemias y a otras consecuencias todavía insospechadas de la destrucción de nuestro planeta.

Quizás sea controvertido, pero podríamos crear un ejército de infraestructuras verdes y continuar inmersos en una gran crisis social y ecológica. Si nos centramos únicamente en las emisiones, a expensas del cuidado del tejido de vida, seguiremos repitiendo los mismos errores y las mismas injusticias que

nos han llevado hasta aquí. Una transición energética dirigida por las empresas no será una transición justa. El problema que todos estos planes grandilocuentes comparten es que señalan que el problema principal es una actividad económica escasa (poco crecimiento, contracción o recesión y miedo a una crisis en el futuro), y por eso quieren volver a impulsar el crecimiento. Estos principios epistémicos nos impiden observar el paradigma desde fuera y darnos cuenta de que algo de esta lógica no funciona. ¿Por qué hemos diseñado una economía que se basa en el crecimiento para ofrecer estabilidad y bienestar a las personas?

¿Cómo podemos transicionar de nuestra obsesión por el crecimiento al decrecimiento o, mejor dicho, a un pluriverso de alternativas a las que el decrecimiento daría espacio? Por lo visto, muchas veces esta es la pregunta más difícil de responder. Cuando uno se da cuenta de que ni siquiera estamos cerca de estar en un «espacio seguro», tal y como se establece en el modelo del donut, y quiere trasladarse ahí, empieza a preguntarse por qué es tan difícil. ¿Qué lógica y qué suposiciones orientan nuestras decisiones económicas? Tenemos que abrir la caja de la economía política, de la historia mundial, el colonialismo y la destrucción ecológica. Ahí, el decrecimiento ofrece un paradigma explicativo muy potente.

Ya existe un jardín exuberante de alternativas, otras maneras de convivir que cuestionan la hegemonía y se centran en los cuidados. Los pueblos indígenas en concreto ofrecen diferentes proyectos de civilización, mecanismos políticos fascinantes que han logrado crear otras formas de tomar decisiones de modo comunitario y mantener sus medios de subsistencia de una manera no destructiva. Estos pueblos tienen mucho que enseñarnos acerca de adoptar maneras más saludables de vivir, relacionarnos con los demás y con el resto de los seres vivos. Replantearse ideas como el «trabajo» y la «propiedad», por ejemplo, son buenos puntos de partida para ampliar estas conversaciones. No es casualidad que precisamente estos pueblos, a menudo marginados y oprimidos, hayan estado denunciando durante mucho tiempo las consecuencias catastróficas y los crímenes de nuestro sistema capitalista y su obsesión por expandirse y crecer infinitamente. También nos animan a no tener miedo del decrecimiento económico.

MÁS ENERGÍA VERDE, MÁS INDUSTRIA LOCAL, MÁS PUESTOS DE TRABAJO

Eloi Badia, Christo Casas y Quique Gornés

La emergencia climática ha trastocado todo lo que conocíamos sobre el funcionamiento de la economía. Y para muestra, un botón: todavía no hemos superado la crisis sanitaria causada por la covid-19 y ya nos encontramos de lleno en una crisis de suministros, especialmente combustibles fósiles, agravada por la guerra en Ucrania por parte de Rusia. Si no actuamos con tiempo y planificando las transformaciones, al salir de esta crisis —si es que lo hacemos— nos encontraremos en una peor.

No existe la opción de elegir entre fortalecer la economía o hacer frente a la emergencia climática, esta es una falsa dicotomía. Una lucha y la otra tienen que ir de la mano: se harán juntas o no se harán. El futuro de nuestra sociedad pasa por la transición ecológica y el futuro de la economía pasa por la descarbonización. Solo así conseguiremos una mejor soberanía energética por no estar sujetos a conflictos internacionales, a combustibles que escasean y a los flujos de capital. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo para España y el resto de la Europa del sur son bastante claras en cuanto a los impactos económicos de la emergencia climática si no se actúa ya: la contracción de la economía superaría el 6%, mientras que las inversiones necesarias para mitigar los efectos de la crisis climática estarían en torno al 1% del PIB.

No tenemos la posibilidad de mantener el viejo modelo energético basado en los combustibles fósiles, tenemos que transitar hacia un nuevo el modelo basado en las energías renovables donde la generación esté descentralizada y repartida equitativamente por el territorio. La necesidad de suministro de componentes, la instalación de nuevos equipos de generación y la adaptación de las redes de distribución a la nueva realidad son una oportunidad para los sectores industriales que no podemos permitirnos perder. El precio actual de la luz puede ser la palanca que empezó este cambio, pero es mucho más que una cuestión material: nos va la pervivencia del planeta.



La transición energética justa, aparte de promover la creación de nuevos puestos de trabajo, debe permitir dejar atrás el modelo extractivista, contaminante y caro para llegar a un nuevo modelo verde, barato y justo que no deje a nadie atrás y garantice el derecho a la energía. Además, debe hacerlo garantizando el equilibrio con el territorio que nos rodea: las ciudades compactas con mucha densidad de población tenemos una responsabilidad hacia las áreas más dispersas, que debe fundamentarse en la generación local con los recursos existentes. Barcelona es la metrópoli más densa de Europa, pero no disponemos de potencial eólico ni hidráulico. De lo que sí disponemos es de miles de metros cuadrados de techos y azoteas, y del doble de días de sol que muchas capitales europeas; una oportunidad que no podemos dejar pasar. La energía fotovoltaica será la clave.

Pero, sobre todo, nuestro modelo debe fundamentarse en la eficiencia y la reducción de consumo, permitiendo aprovechar todas aquellas energías residuales que actualmente se diluyen. De repente, la rehabilitación energética del parque de edificios actuales permitirá reconvertir el sector de la construcción en lo que realmente aporta más al bien común. Solo en Barcelona, el 65% de las viviendas (casi medio millón) son anteriores a la primera normativa técnica de aislamiento térmico. Toda la energía que ahorraremos en la ciudad será menos presión para el resto del territorio y más puestos de trabajo cualificado.

También deberemos transformar nuestro modelo de consumo para dejar de generar toneladas de residuos, convertirlos en los recursos necesarios y cerrar su círculo de vida. En este sentido, la Unión Europea ha hecho una apuesta geoestratégica para ganar autonomía respecto a otras regiones en el suministro de materias primas mediante el desarrollo de una economía circular capaz de generar un gran empleo.

Un último reto mayúsculo será la descarbonización de la movilidad en todas sus vertientes. Primero, promover el transporte ferroviario frente a los trayectos de avión de radio corto y al transporte de mercancías por carretera. Esto requerirá que actualicemos unas infraestructuras que necesitan adaptarse para asumir estos compromisos. Segundo, aumentar y fortalecer las infraestructuras del transporte público de pasajeros en el ámbito de la región metropolitana para que la movilidad privada se reduzca lo máximo posible. Tercero, electrificar la movilidad privada que quede, tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías y, preferentemente, como vehículo compartido. Esto nos acerca a entender la movilidad, también la privada, como servicio y no como propiedad. Tenemos derecho a movernos nosotros y a mover cosas, lo que no significa derecho a poseer un vehículo.

Sin embargo, no podremos atajar esta nueva movilidad sin considerar también un nuevo modelo de ordenamiento territorial y otros factores que han venido para quedarse, como el teletrabajo. El paro de la actividad en la ciudad de Barcelona durante los meses de la pandemia provocada por la covid-19 causó una gran reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: solo en 2020 se redujeron un 22% las emisiones respecto a 2019. Pero hay que ser extremadamente conscientes de que esta reducción no fue de carácter estructural y que, una vez pasada la pandemia, podemos volver a los números previos. Esto constata el enorme esfuerzo que hay que hacer para reducir las emisiones y alcanzar los ambiciosos objetivos planteados, garantizando el bienestar de la ciudadanía.

La transición ecológica que experimentarán todos los sectores económicos generará miles de puestos de trabajo en todos los niveles de formación y educativos, un empleo más estable y duradero que el que dependa de la enésima burbuja inmobiliaria o la asociada al monocultivo turístico que hemos sufrido en los últimos años.

Sabemos que esta transición no se podrá hacer solo con los presupuestos de las administraciones, ya sean locales o europeas. Y vamos a necesitar, por tanto, llegar a acuerdos con todos los sectores productivos, sabiendo también que, si queremos una transición energética justa y una economía con reglas democráticas, el liderazgo público es indispensable.

LAS ISLAS JAULA Y LOS MUNICIPIOS ENFRENTÁNDOSE A LA EUROPA FORTALEZA

LESBOS

Lara Lussón

El foco mediático en Lesbos se puso en 2015. La guerra en Siria llevaba ya cuatro años, pero no fuimos conscientes de la magnitud de aquel conflicto hasta que comenzamos a ver en nuestras televisiones cómo cientos de miles de personas llegaban a esa y a otras islas griegas en pateras de juguete y con aquellos chalecos naranjas que quedan para la historia; esos chalecos que protegen cuerpos dignos mientras despojan a Europa de cualquier atisbo de dignidad; esos chalecos que cubren las vergüenzas de las ropas mojadas y sucias de las personas desplazadas mientras sacan a relucir la gran vergüenza que es la Europa fortaleza.

Lesbos se convirtió en aquel momento en una de esas «islas jaula» a las que hace referencia este capítulo, llegando a concentrar a más de treinta mil solicitantes de asilo a la vez en los tres campos de personas refugiadas que estuvieron activos. Hoy solo queda el conocido como Moria 2, una cárcel para mujeres, hombres, niñas y niños inocentes, resultado del incendio de su predecesor, que no fue sino una muestra más del hartazgo y la desesperación de esos seres humanos a los que se pretende despojar de toda identidad, a los que se les promete, porque tienen derecho a ella, una vida, que nunca llega.

Hacinar personas jamás es la solución ni puede serlo. Como tampoco puede serlo la falta de solidaridad. Tal y como están diseñados nuestros sistemas, así como el sistema de acogida en Europa, es completamente imposible que hagamos desaparecer todo este problema de las «islas jaula» sin la empatía del resto de municipios y regiones a pequeña escala y sin la solidaridad ni el apoyo estatal y europeo a una escala mayor. Europa sabe que, si no habilita vías legales para solicitar asilo en los países de origen, las personas se verán obligadas a llegar al destino para pedirlo. Por más metros que se suban los muros que se pretenden construir, seguirá ocurriendo. Es un hecho tan evidente que negarlo y seguir obligándolos a jugarse la vida y pagar a una mafia tras otra no puede explicarse si no es por el lucrativo negocio de la seguridad.

Pero ¿qué ocurre con aquellos municipios que por su localización asumen que son zonas calientes? ¿Por qué se carga con la responsabilidad de asumir la emergencia y la posterior consolidación de la situación a lugares que no están preparados para ello? Está sobradamente demostrado que un reparto

más equitativo de personas desplazadas, así como la inversión de recursos, no solo aliviaría tensiones, sino que favorecería el cumplimiento de normas tan simples como que cada persona tiene derecho a cuatro metros de espacio individual, mientras se resuelve su situación administrativa, o el derecho a estar a menos de tres kilómetros de servicios básicos.

Por si quedan dudas: no, esto no ocurre en muchas ocasiones. Desde luego en Moria no ocurría. Como tampoco ocurre que se cumplan las directivas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por sus siglas en inglés), que marca en seis meses la duración del proceso desde que se llega a territorio y se pide asilo hasta que se resuelve el caso. La media en España, como en Grecia, es de dos años. Por no hablar de la falta de formación en materia de género de la mayoría de quienes están a cargo de la seguridad en los campos, por lo que no son capaces de detectar casos de violencia de género; de la falta de formación en infancia que, de haber contado con ella, quién sabe si quizás habría sido capaz de prevenir los suicidios de tres menores en Moria en 2021; de la falta de formación en derechos LGTBI, que, de existir, podría ayudar a detectar y prevenir decenas de agresiones... Porque no, porque los campos para personas refugiadas jamás deberían existir; pero como no es así, es obligatorio que se estructuren con perspectiva de género y con el personal a cargo formado en todas estas áreas.

Todo lo descrito anteriormente crea en estos territorios jaula un clima de empatía inicial, posterior hartazgo y tensiones finales que se repite una y otra vez, y siempre responden a las mismas etapas.

Cuando se produce una tragedia o una situación de emergencia como, por ejemplo, la llegada masiva de gente que huye del hambre o la guerra, la población local suele volcarse y empatizar. Seamos honestos: a nadie le gusta mirar al drama a los ojos y no hacer nada. Suele ser muy admirable cómo la sociedad civil se organiza. Sin embargo, a los pocos meses, cuando la situación se empieza a enquistar y comienza el sentimiento de desesperación entre la población migrante, suelen surgir los primeros altercados propios de esa pérdida de esperanza. Comienza entonces a correrse el rumor de que estas personas son violentas y es justo en este momento cuando la extrema derecha entra en escena.

A través de la repetición del mensaje del miedo consigue hacer calar su discurso de odio. Basta con el acto de una persona para condenar a decenas de miles. Es imposible sorprenderse porque siempre ocurre de la misma manera. En este punto es justo cuando comienza a desaparecer la empatía y ese enfoque de derechos humanos que inicialmente había calado entre la población local. Esa pérdida de solidaridad se suma a la desesperación de quienes

ven como sus papeles nunca llegan y no pueden continuar sus viajes si no es, de nuevo, previo pago a las mafias y arriesgando la vida entre fronteras y concertinas, por no hablar de las deportaciones y el miedo a estas.

Así, cuanto más se perpetúa la vida de las personas migrantes en los campos, más sensación de estorbo y de rechazo se produce. Porque igual que a nadie le gusta ver una emergencia y no hacer nada, por una cuestión básica de moralidad, a nadie le gusta vivir cada día con ese drama en la puerta durante seis o siete años, mientras observa, además, que la Unión Europea no aporta soluciones; o mientras ve como las ONG llegan cargadas de mantas, ropa, medicamentos y material escolar donado en otros países europeos en lugar de invertir en los comercios locales el mismo dinero que les cuesta transportar en contenedores marítimos todos esos artículos de segunda mano.

Por poner algunos ejemplos de ese rechazo, en Lesbos comenzó a haber establecimientos que prohibían la entrada a solicitantes de protección internacional y, en urgencias, ya podían llegar con la cabeza abierta o a punto de parir, que debían esperar a que fuese atendida hasta la última persona griega. Es el caldo de cultivo perfecto para las peores situaciones. La tensión sigue en aumento y se producen las primeras agresiones hacia las personas migrantes. En Grecia, se han llegado a organizar marchas desde todos los puntos del país hacia la isla con la única consigna de «cazar inmigrantes». Tras estos hechos, las personas migrantes protestan porque se sienten atacadas, sin olvidar la vulneración continua de derechos que arrastran desde hace meses o incluso años.

Y esas protestas hacen que resurja el discurso de la violencia, del odio, del miedo y de la estigmatización, lo que da lugar a nuevas protestas locales, que, a su vez, da lugar a nuevas protestas de migrantes... Y así en un bucle infinito que no termina jamás. Mientras, la Unión Europea envía dinero a Turquía, a Marruecos o a Libia, y se lava las manos sin ofrecer ningún tipo de alternativa para quienes solicitan asilo ni para los ayuntamientos que tienen que hacer frente a esa presión migratoria solos.

Ciudades como Barcelona, Lampedusa o La Laguna (e incluso Lesbos, en los primeros años), que se ponen de cara ante estas situaciones y tratan de dignificarlas, merecen todo nuestro respeto y admiración. Pero termino este texto con rabia, rabia por tener que referirnos a ellas como «ciudades sin miedo». ¿Miedo a qué? ¿A defender los derechos humanos? ¿Debemos sentirnos orgullosos y orgullosos de aquellos lugares que cumplen con su deber legal? ¿Debemos aplaudir como extraordinario lo que se presupone básico en esta Europa en la que está demostradísimo no solo que cabemos todas y todos, sino que necesitamos a la inmigración? La respuesta es no.



LAMPEDUSA, ISLA FRONTERIZA EN EL CORAZÓN DEL MEDITERRÁNEO

Antonello Ravetto Antinori

Soy periodista, me dedico a este oficio desde hace veinticinco años y una de las reglas fundamentales de mi profesión es observar los hechos de manera objetiva. Sin embargo, cuando estás en Lampedusa y ves que acaban de traer ataúdes al cementerio, y ves que en esos ataúdes hay personas que han perdido la vida pocas horas antes a unos cientos de metros de la costa, sientes rabia, consternación y dolor. Y entonces cuesta, incluso como periodista, no sentir la tentación de «ponerse del lado bueno», de ponerse del lado del respeto por los derechos humanos, de ponerse del lado de quienes creen que salvar a quienes corren peligro en el mar es una obligación que se antepone a cualquier ley, a cualquier medida gubernamental. Sí, porque en Italia, en 2019, el entonces ministro del Interior había firmado una medida, llamada el *decreto de seguridad*, que preveía sanciones para quienes rescataran a migrantes en aguas marinas territoriales, sanciones dirigidas sobre todo a las intervenciones de las ONG⁵.

Como consecuencia de ese decreto, el alcalde de Lampedusa y Linosa, Totò Martello (de quien empecé a ser portavoz en 2018), publicó una foto en su perfil de Facebook luciendo una camiseta con la impresión #iosonopescatore (#soypescador, en español). Publicó esa foto para insistir en un concepto: para la comunidad de Lampedusa, una pequeña isla de solo 22km² en el corazón del Mediterráneo, más cercana a la costa de África que a la de Italia, la «ley del mar» es de aplicación prioritaria, como las reglas de los pescadores, según las cuales, si una persona está a punto de ahogarse, hay que rescatarla, independientemente de su nacionalidad, el color de su piel o de si se encuentra en aguas territoriales o internacionales.

⁵ Nyden, Phillip; Wievel, Wim. (1992). «Collaborative Research...». *The American Sociologist*, vol. 23, n.º 4b (invierno), p. 43-55.

Lampedusa es un territorio fronterizo, el primer puerto para la mayoría de pateras que quieren llegar a Italia y Europa desde la costa septentrional africana. Pero Lampedusa es sobre todo una isla «alejada de todo», donde lo más sencillo suele complicarse y lo «imposible» se vuelve normal. Las llegadas a Lampedusa han estado ocurriendo de manera prácticamente ininterrumpida durante más de treinta años, un periodo en el que se han producido auténticas emergencias, como cuando durante la Primavera Árabe, en 2011, unas 30 000 personas que huían de la costa africana llegaron a la isla, con una población de unos 6 000 habitantes, en poco más de una semana. En esos días los ciudadanos de Lampedusa participaron activamente en el recibimiento, ofreciendo comida, ropa y asistencia material a los migrantes, así como juguetes para los niños que viajaban con sus padres.

Si descartamos las situaciones excepcionales, con los años el mecanismo de acogida se ha organizado y estructurado hasta el punto de que hoy en día puedes estar en la isla y no darte cuenta de que hay un desembarco. En este sentido, Lampedusa a menudo vive dos realidades paralelas: los migrantes que llegan en sus pateras y entran en el puerto, donde los reciben y rescatan inmediatamente, y, a unos cientos de metros, las playas de arena dorada llenas de turistas, tanto italianos como extranjeros, que visitan la isla por su extraordinaria belleza natural y su mar cristalino, para observar tortugas, delfines e incluso ballenas que pasan por la isla algunos meses del año: en el fondo, también son «migraciones».

Hay un centro de acogida en la isla que, sobre el papel, puede alojar poco más de 250 personas, pero que, en realidad, puede llegar a acoger a más de 1 000 en algunos casos: cuando hay muchas llegadas o cuando los procedimientos de traslado son lentos (lo que sucede especialmente cuando el mal tiempo y el estado marítimo impiden que los barcos atraquen para trasladar a los migrantes a otros centros, casi siempre a Sicilia). En cuanto los migrantes desembarcan en la isla o son rescatados en el mar, se les hacen reconocimientos médicos en el muelle de Favalaro. Cuando los migrantes llegan al centro de acogida, se llevan a cabo las identificaciones personales y, al cabo de unos días, son trasladados. En este sentido, Lampedusa es un territorio fronterizo que participa en la «acogida inicial». Antes de la emergencia por la covid-19, los migrantes no estaban obligados a quedarse en el centro de acogida durante su estancia en la isla, sino que se les permitía salir y, a menudo, se los veía recorriendo las calles de la ciudad. Pero, tras la pandemia, las reglas cambiaron debido a las restricciones sanitarias, de modo que ahora los migrantes deben permanecer dentro del centro hasta que los trasladan a otros centros fuera de Lampedusa o a «barcos de cuarentena» que suelen atracar frente a la costa de la isla.

El Ayuntamiento de Lampedusa no tiene competencia directa en los procedimientos de acogida ni en la gestión del centro de acogida: la gestión es responsabilidad del Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad del Estado, de acuerdo con las instituciones sanitarias. Aun así, Totò Martello nunca ha considerado que su función de alcalde sea «pasiva» respecto a estas cuestiones. Al contrario, ha supervisado constantemente cualquier situación relacionada con los flujos migratorios, ha señalado todas las deficiencias del sistema de acogida y ha hecho propuestas a las autoridades locales, al Gobierno nacional y a la Comunidad Europea. Y lo ha hecho activando el diálogo político e institucional, dirigido a asegurar y proteger los derechos humanos, así como las necesidades de la comunidad local (con el fin de compatibilizar la vocación humanitaria de Lampedusa con su vocación turística).

Por ejemplo, el envío por parte del Gobierno italiano de los «barcos de cuarentena» para la emergencia por la covid-19 se organizó precisamente a petición del alcalde Martello, que había reclamado esta medida porque los visitantes no podrían quedarse en el centro de acogida el tiempo suficiente para cumplir la cuarentena de acuerdo con la normativa sanitaria vigente. Pero, al mismo tiempo, y como ya se ha señalado, el compromiso del alcalde Martello tenía el objetivo de apoyar a la comunidad local, ya que la población de Lampedusa a menudo ha tenido que soportar sola la carga de la acogida humanitaria, incluso con un sacrificio considerable. Para resumir este concepto, podemos decir que el apoyo a la acogida humanitaria en un territorio fronterizo debe ir de la mano del apoyo a la comunidad local.

Sobre todo gracias a la generosidad de la comunidad local, con el paso de los años Lampedusa se ha convertido en un «símbolo de acogida» que disfruta del reconocimiento internacional. La experiencia de Lampedusa, junto con la de otros dieciocho territorios fronterizos de catorce países europeos, fue el «motor» del proyecto *Snapshots from the Borders* ('Fotos desde las fronteras'), que también reunió a otros diecisiete colaboradores de asociaciones de la sociedad civil. El proyecto, financiado por la Comunidad Europea, se inició en 2017 y terminó a finales de 2021 y estuvo dirigido precisamente por el Ayuntamiento de Lampedusa y Linosa. Gracias a este proyecto, salieron adelante iniciativas importantes para fortalecer la voz de los territorios fronterizos gracias a la creación de una red para dar a conocer sus necesidades y experiencias a los gobiernos nacionales y a Bruselas. Asimismo, se organizaron actividades para concienciar sobre cuestiones relacionadas con los flujos migratorios, la narración correcta de los hechos y la lucha contra las noticias falsas, el respeto por los derechos humanos y la protección de la memoria colectiva.

Desde 2020, el Ayuntamiento de Lampedusa y Linosa, por iniciativa del alcalde Totò Martello, forma parte de la CGLU, la principal asociación internacional de ciudades y gobiernos locales que agrupa a más de 1 000 miembros de más de 120 países de las Naciones Unidas. Tras la entrada de Lampedusa en la CGLU, se inició un proceso que, después de una larga labor de diálogo e intercambio entre cientos de gobiernos, autoridades locales y asociaciones internacionales, llevará a redactar la Carta de Lampedusa, una especie de «manifiesto» que recoge los principios rectores relativos a distintos aspectos complejos relacionados con los flujos migratorios y la movilidad humana, y, más en general, con la necesidad de proteger los derechos individuales de cada ser humano.

Toda esta experiencia en el fenómeno de los flujos migratorios, todos estos años en la primera línea de la acogida humanitaria por parte de la comunidad de una isleta de pescadores en medio del Mediterráneo, debe canalizarse en una acción destinada a ofrecer propuestas dirigidas a las distintas instituciones locales, nacionales e internacionales. Por este motivo, el alcalde Totò Martello ha puesto en marcha un proceso llamado *Lampedusa, isla de paz* con la intención de impulsar permanentemente iniciativas internacionales de diálogo, cooperación, formación y actos artísticos y culturales. Un proceso capaz de implicar a las instituciones, al mundo académico, a asociaciones y a organizaciones nacionales e internacionales para garantizar que el Mediterráneo sea por fin un «mar de paz».

BARCELONA: LA CIUDAD QUE QUIERE SER REFUGIO EN UNA EUROPA FORTALEZA

Marc Serra

Cualquier persona que ha migrado sabe que las ciudades y los municipios desempeñan un papel clave en los procesos de acogida. De hecho, así lo apunta una encuesta reciente del Eurobarómetro de la Comisión Europea, según la cual el 90% de los europeos creen que las autoridades locales y regionales juegan un papel «muy o bastante importante» en la inclusión de las personas inmigradas, un porcentaje que, en el caso de España, alcanza el 94%.

Lo que desconoce gran parte de la población es que en el Estado español las administraciones locales no tienen competencias en materia de inmigración y asilo. A pesar de ser la Administración más próxima y accesible para la población migrante, los municipios no disponen de herramientas para regular los flujos migratorios ni tampoco para conceder permisos de residencia ni de trabajo para que puedan desarrollar su proyecto migratorio.

Los gobiernos locales se encuentran con la difícil tarea de gestionar las necesidades de acogida más inmediatas —alojamiento, manutención, atención sanitaria, educación y formación laboral, aprendizaje de lenguas, etc.— con unos recursos que acaparan los Estados, y que demasiado a menudo escasean. Y es que, de las decenas de millones de euros de los fondos europeos que recibe el Estado español para la acogida e integración de inmigrantes, buena parte se acaba destinando a políticas de control de fronteras y expulsión.

La ciudad de Barcelona ha visto como la llegada de personas extranjeras ha crecido de forma progresiva a lo largo de los últimos veinte años: mientras que en el año 2000 había empadronadas en la ciudad cerca de 46.000 personas de origen extranjero —un 3,5% de la población barcelonesa—, en 2020 eran ya 360.000 personas, un 21% del total. Una cifra que se eleva al 29% si contabilizamos todos los vecinos nacidos fuera del Estado, aún lejos del 37% de ciudades como Nueva York o Londres, o del 62% de Bruselas.

Cuando Barcelona En Comú llegó al Gobierno de la ciudad en 2015, los recursos para los servicios de acogida se doblaron. Con ello, el gobierno municipal no solo reforzó los servicios de asesoramiento jurídico, de inserción laboral y de acompañamiento a las personas migradas, sino que se pudo poner en marcha un programa municipal de acogida para familias refugiadas, que es ya un referente a nivel europeo. Sin embargo, a pesar de que la población extranjera se ha incrementado en los últimos años, las aportaciones por parte del Estado y de la Generalitat se han mantenido congeladas.

Pero eso no es todo. A la falta de recursos para la acogida, hay que sumarle la irregularidad administrativa, que se ha convertido hoy en el principal obstáculo para que las personas inmigradas puedan desarrollar sus proyectos de vida de forma autónoma en nuestro país. Sin papeles no hay posibilidad de trabajar de forma legal, tampoco de acceder a coberturas sociales como el ingreso mínimo vital del Estado o la renta garantizada de ciudadanía de la Generalitat de Catalunya; y algo tan fundamental como alquilar un piso —o, más bien, una habitación— se convierte en una odisea.

Lo que sucede es que en la Europa Fortaleza la «frontera» no acaba cuando se consigue entrar en la Unión Europea, sino que sigue presente en redadas racistas, en los centros de internamiento de extranjeros o en una ley de extranjería que puede comportar las mismas consecuencias que las fronteras exteriores: truncar el proyecto migratorio y la posibilidad de ser sujeto de derechos en Europa, mediante el retorno al lugar de origen a través de la expulsión forzosa o la condena a la precariedad.

Ante este panorama, gobiernos como el de Barcelona se han reivindicado como ciudades refugio, garantizando un acceso universal a todos los servicios municipales para que, al menos en el ámbito local, no haya vecinos o vecinas de primera y de segunda. Facilitar el padrón como puerta de acceso a la atención social, la educación o la sanidad pública ha permitido lanzar un potente mensaje de solidaridad e inclusión en medio de una Unión Europea que flirtea con la política del miedo y la intolerancia de la ultraderecha.

Se calcula que 500.000 personas sobreviven en el Estado español en situación irregular. En Barcelona, cerca del 80 % de las personas atendidas en los servicios de acogida no tiene permiso de residencia ni de trabajo. Ante esto, desde el gobierno municipal se han impulsado programas pioneros para la regularización de inmigrantes, que, mediante una oferta pública de trabajo, han permitido regularizar a unos pocos centenares de personas. Una cifra considerable, pero claramente insuficiente para abordar un problema que solo va a resolverse con un cambio estructural de la legislación de extranjería.

500.000 son también las firmas necesarias para tramitar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Este es el objetivo que se ha marcado la campaña «Regularización Ya», que propone que se concedan permisos de residencia a todas las personas inmigrantes que residen en situación irregular en el Estado español. De acuerdo con un estudio reciente de la Fundación porCausa, una regularización incrementaría la aportación fiscal media de cada persona regularizada en más de 3.500€/año, además del impulso en el consumo agregado y, por ende, en el conjunto de la actividad económica y la creación de empleo.

La iniciativa legislativa popular «Regularización Ya» llega en un momento en que la falta de mano de obra en algunos sectores como el transporte, el campo, la hostelería o la construcción es tan evidente que es la propia CEOE la que exige una reforma de la legislación. De momento, el gobierno del Estado acaba de anunciar por sorpresa una reforma migratoria. De la movilización social y su capacidad de incidencia dependerá que se convierta en la enésima reforma que instrumentaliza a las personas inmigrantes como mano de obra barata o en un verdadero cambio que acabe con los ciudadanos y ciudadanas de segunda en nuestras ciudades.

ORGANIZACIONES Y CIUDADES EN CLAVE FEMINISTA

EL MOVIMIENTO FEMINISTA: PALANCA DEL CAMBIO SOCIAL

Eva Abril

En los últimos años hemos visto cómo el movimiento feminista crecía y se mostraba orgulloso en las calles y plazas de muchas ciudades del mundo. Miles de personas reivindicaban el derecho a visualizar existencias, realidades y experiencias propias que resultaban ser, en gran parte, colectivas. El movimiento feminista no era en absoluto una novedad, aunque a algunos les gustase tildarlo de moda. Lo novedoso era la fuerza que se demostraba en estas convocatorias.

Como no podría ser de otra manera, en el momento en que el sistema detecta una fuerte tendencia, el movimiento político-social que es el feminismo comienza a ser un peligro que debe neutralizarse. En un principio, los partidos conservadores intentan apropiarse del término, el mercado comienza a monetizar la tendencia con, por ejemplo, camisetas con frases, eslóganes y referencias a personajes históricos feministas. Mujeres de las más altas esferas sociales se suben al carro y se autodenominan «feministas», eso sí, como ellas mismas indican, «con matices».

Por otro lado, los partidos de derecha y ultraderecha que se denominan «conservadores», comienzan una cruzada que a día de hoy ya no esconden ni enmascaran. Las feministas somos el enemigo que batir porque, entre otras cosas, ponemos en peligro la estructura base de la sociedad: la familia. Esa familia imaginaria donde se conservan las esencias de la civilización eurocéntrica, blanca, capacitista, cristiana, heterosexual... El movimiento feminista siempre ha sido plural, sin voces únicas, con tendencias muy dispares que han tensado determinados debates. Los matices y las discrepancias son inherentes al propio movimiento aunque en este momento haya síntomas distintos que nos puedan poner en alerta.

La normalización de los discursos de odio es peligrosa por sí misma, pero hay algo aún más peligroso: que esta normalización impregna a toda la sociedad y se extiende como una mancha de aceite. Cuando se rompen los consensos

sociales más básicos de respeto y convivencia, nos encontramos réplicas de estas conductas en lugares tan dispares como institutos, comunidades de vecinos, organizaciones políticas... Y, como no podía ser de otra manera, en el feminismo. Tal vez es algo que tendríamos que repensar en comunidad.

En este capítulo se habla de políticas municipalistas feministas. Las preguntas que se plantean a continuación se refieren a si el feminismo es o sigue siendo un generador de transformación válido para transformar la sociedad: ¿Se puede transformar la sociedad si consideramos a la mujer como único sujeto válido del feminismo? ¿Podemos obviar, para abordar este reto transformador, cuestiones como *origen*, *clase social*, *color de piel*, *disidencias de sexo* y *género*? Otra cuestión importante sería saber si solo las mujeres podemos hacer políticas feministas. O si, al final, esto, solo va de identidad.

Entonces, ¿cómo aterrizamos el feminismo en lo cotidiano? ¿Qué puede hacer el municipalismo para implementar políticas feministas transformadoras? Si el municipio es el organismo más cercano a la gente, un gobierno de una ciudad que tenga como principal objetivo poner la vida de las personas en el centro será un gobierno municipalista que hará políticas feministas.

Hablemos de un caso práctico: las vecinas de un barrio han detectado que hay puntos inseguros por la noche. Conjuntamente con el Ayuntamiento, consiguen cambiar el diseño, eliminar puntos muertos e iluminar mejor esas zonas. Esta actuación mejora la vida de las mujeres, evidentemente, pero esta actuación es buena para toda la comunidad. También hay hombres que tienen miedo al caminar por la noche. Realizar esta actuación es claramente un beneficio para toda la comunidad.

Otro ejemplo: repensar las ciudades para evitar que haya tanto tráfico, intensificar las frecuencias del transporte público, bajar los niveles de polución, pacificar las calles, etc. Los beneficios serán para toda la sociedad, pero sobre todo para esas personas que van en transporte público, que caminan por la ciudad, que llevan a sus hijas e hijos a la escuela, independientemente del género, del sexo, etc.

Por último, responderemos a las cuestiones antes propuestas. El feminismo siempre será válido como palanca del cambio social; lo que debemos repensar son las estrategias para conseguirlo. Según mi forma de entender el feminismo, este no puede ser transformador si solo contamos con las mujeres, sobre todo si estas son blancas y de clase media. Mirar la sociedad de forma binaria deja fuera a la mayoría de la sociedad.

¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS FEMINISTAS? UNA APROXIMACIÓN DESDE LA RED FEMINISTA

Nieves Salobral Martín

Antes de abordar una definición aproximada de las políticas feministas, conviene resaltar el alcance de estas dentro de las iniciativas municipalistas o del cambio. Las plataformas ciudadanas incentivaron el diseño de un conjunto de propuestas feministas para empapar su ideario ético, para transformar con nuevas estrategias las relaciones y las estructuras de dichas organizaciones y, por supuesto, para incorporar objetivos y acciones, específicos y transversales, en el diseño de sus programas políticos.

Durante el periodo de los gobiernos del cambio, entre 2015 y 2019, muchas de aquellas propuestas programáticas fueron motivo de intercambio y reflexión entre responsables feministas de una red que llegaba a muchos municipios y ciudades del estado. Y, a pesar de este magnífico trabajo colectivo, no todas se implementarán en sus municipios ni obtendrán una acogida suficiente entre sus organizaciones. Así se ha destacado en una investigación realizada por integrantes de la red, que recoge el testimonio de más de cincuenta activistas sobre diferentes aspectos de su trabajo en estas organizaciones y en dichos gobiernos, en la que también se distinguieron aquellas políticas calificadas con el sello «municipalista».

Este proceso de investigación ha culminado no solo en el fortalecimiento de la red, denominada *Akafem*, sino en que sus participantes han aprobado el sentido sustancial de esta en el marco político local actual. Comprenden, por un lado, que es esencial que el feminismo sea el fluido principal de los programas, las estructuras y las estrategias de las iniciativas municipalistas —¡qué duda cabe!—; pero, por otro, convienen en que su principal propósito es transformar las relaciones políticas y económicas de los municipios y ciudades en aras de favorecer la igualdad de género y la libre expresión de la diversidad en los límites de lo ecológico y humanamente sostenible.

Esta aproximación feminista de las políticas municipalistas está encaminada a garantizar el derecho a unas relaciones libres de violencia machista, reforzando las políticas dirigidas a la prevención y atención de la violencia de pareja y expareja, recuperando la perspectiva de agencia de las mujeres atendidas. Además, apuesta claramente por visibilizar, prevenir y atender la violencia sexual a través de las siguientes propuestas:

- En sinergia con el movimiento feminista, impulsar los puntos violetas en los barrios con el objeto de sensibilizar en las fiestas populares sobre el ejercicio de dicha violencia.
- Establecer protocolos de prevención en colaboración con las organizaciones sociales del ocio nocturno.
- Abrir espacios de atención y acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia sexual.
- Formular nuevos modelos de seguridad policial y urbana en torno a la violencia sexual.

Otros dispositivos de encuentro, atención, información y asesoramiento más específicos que se impulsaron o crearon fueron los centros permanentes para el encuentro de mujeres y colectivos o centros de igualdad, otros dirigidos a las necesidades informativas y de apoyo mutuo de las empleadas del hogar y otros de información, asesoramiento y atención a la salud, gestionados por entidades LGTBI.

Ahora bien, el foco esencial de la red está en transformar la economía para colocar la vulnerabilidad de la vida en el centro a través de diferentes acciones:

- Impulsar las propuestas de la economía feminista del sostenimiento de la vida y visibilizar el trabajo de cuidados, diseñando políticas que incidan en su redistribución social y exigir la ratificación del convenio 189 sobre el empleo del hogar.
- Implementar planes y estrategias dirigidos a la ciudad para atender las necesidades de la interdependencia, la corresponsabilidad y la conciliación, conformando espacios urbanos sostenibles ecológicamente, para dedicarlos a favorecer los vínculos y la realización de los cuidados, ya sea transformando los entornos escolares, activando la programación de las actividades culturales con la comunidad o formulando programas de promoción comunitaria de la salud.

En esa misma línea de adhesión a las propuestas de la economía feminista, se han organizado medidas dirigidas a investigar sobre las condiciones estructurales y de desigualdad económica que han impuesto un contexto de feminización de la pobreza; con el fin de diseñar medidas orientadas a transformar las estructuras económicas para impulsar empleo digno para las mujeres y otros grupos sociales discriminados.

Finalmente, con el objeto de establecer un marco sólido político y jurídico suficiente para implementar dichas medidas específicas y transversales, los municipios o las ciudades proponen herramientas como ordenanzas, planes o estrategias de igualdad de género, que permitan o una planificación y priorización a largo plazo, o incluso una estabilidad jurídica de las medidas. Igualmente, plantean elaborar planes de igualdad dirigidos al interior del propio ayuntamiento como institución empleadora.

En sus políticas, la red incorpora también una reflexión estratégica sobre la complejidad del sujeto del feminismo en la actualidad, da cuenta de la jerarquía social entre los diferentes grupos sociales —que establece el patriarcado en complicidad con el capitalismo— y del impacto desigual que ejercen sus diferentes ejes de opresión o discriminación en cada uno de ellos. Todo ello exige una elaboración interseccional de las medidas, teniendo en cuenta la interacción entre las categorías de género, clase, racialización, origen migratorio, capacitismo y edad.

Para aterrizar todas estas políticas, esta red de iniciativas municipales del cambio ha contemplado siempre la necesidad no solo de la incidencia feminista en las organizaciones, sino también de mantener canales de comunicación fluida con el movimiento. Las políticas públicas o la distribución de los presupuestos pierden sentido sin este anclaje de reflexión y retroalimentación de la institución a través de espacios compartidos con el movimiento, donde, además, se puedan establecer sinergias para extender la lucha feminista a todos los rincones de las ciudades.

En definitiva, las políticas feministas municipalistas o del cambio articulan estrategias en varios sentidos: la transformación de las relaciones económicas con el sostenimiento de la vida como centro de la política pública, la garantía de derechos de un sujeto amplio y complejo del feminismo, la incidencia feminista en las organizaciones políticas y, sobre todo, una vinculación reflexiva con el movimiento para implementar de manera significativa las políticas públicas.

CIUDADES QUE CUIDAN EL PLANETA

TRANSFORMAR EL MODELO ECONÓMICO DESDE LOS AYUNTAMIENTOS

Tània Corrons y Álvaro Porro

En 2019, ante el rápido deterioro de la naturaleza (es decir, de las condiciones que posibilitan la vida en el planeta, incluida la nuestra), sin precedentes en la historia humana, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) pidió «una reorganización fundamental de todo el sistema, que abarque factores tecnológicos, económicos y sociales, incluyendo paradigmas, objetivos y valores». Después, vino el coronavirus, y se hizo todavía más urgente abordar esta reorganización, porque pudimos experimentar las debilidades del sistema-mundo y la ciudadanía empezó a exigir de forma generalizada mucho más protagonismo de las instituciones públicas para abordar la crisis. Aunque llega tarde, esta demanda de la ONU cuenta con un largo recorrido, con muchas políticas públicas implementadas (ejemplificadas en este artículo en las ciudades de Grenoble y Barcelona), movimientos sociales cada vez más fuertes que intensifican su presión a las instituciones y algunos planes de acción a nivel global.

Uno de estos planes de acción es El Nuevo Pacto Verde (Green New Deal, GND), que plantea un conjunto de propuestas políticas para lograr esa reorganización urgente de todo el sistema socioeconómico, integrando bajo un mismo paraguas la justicia económica, verde y social. A menudo, se presentan las políticas medioambientales y sociales como si fueran incompatibles, como si hubiera que escoger entre las unas y las otras, pero esta dicotomía es una cortina de humo que saca el foco del verdadero problema: nuestra economía está diseñada para mover enormes cantidades de dinero, que alimentan la producción y el consumo, sin importar adónde va ese dinero, para qué se usa, cómo se distribuye ni cuál es el impacto que tiene esta distribución en el medioambiente o los individuos. El sistema financiero y económico global tiende a priorizar los intereses del 1% rico, lo cual provoca elevados niveles de desigualdad, tanto social como climática, en todo el planeta.

Así pues, para abordar la emergencia climática hay que abordar también la injusticia social y económica que afecta a las mayorías más vulnerables, y el GND es un esfuerzo en esta dirección; un primer paso que se está comenzando a aplicar parcialmente en algunos lugares, tanto en Norteamérica como en Europa, con propuestas para construir vías para solucionar la crisis a la que nos aboca esta dinámica insostenible y altamente desigual. En esta lucha, lo local tiene un papel destacado, porque es imprescindible devolver la economía al territorio: desarrollar soberanía y autosuficiencia, mutualizar el riesgo y asegurarnos de que trabajamos juntos para proporcionar vivienda, educación, salud y todo aquello fundamental para el bienestar de las mayorías sociales. Un ejemplo de lo que se puede conseguir desde este poder local lo encontramos en las ciudades de Grande-Synthe, París y Grenoble, que, junto con cuatro organizaciones medioambientales, se unieron para presentar un recurso por la «inacción climática» del gobierno francés, a raíz del cual, en noviembre de 2020, el más alto tribunal administrativo dio tres meses al gobierno francés para demostrar que tras su abundante retórica medioambiental hay también un esfuerzo real para luchar contra el cambio climático y que, para 2030, será capaz de cumplir con sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

A pesar de asumir las limitaciones del poder local, dado que la desigualdad económica se estructura en los Estados nación, los ayuntamientos tienen capacidades para desempeñar un papel fundamental. En primer lugar, la capacidad de crear nuevos imaginarios, un primer paso imprescindible para que se produzcan cambios sociales. En segundo lugar, la capacidad de experimentar e innovar en la ejecución de políticas públicas, desde experimentos comunitarios hasta propuestas *bottom-up*. En tercer lugar, la capacidad para fortalecer tejidos económicos transformadores: la economía social y solidaria; las cláusulas sociales en la contratación y compra pública, aprovechando la elevada capacidad de demanda de los ayuntamientos; o la planificación urbana de las ciudades y cómo esta promueve el marco en el que se desarrollan las vidas y la economía —un ejemplo es «la España de las piscinas», que ha promovido un modelo de vida individualista, con escuelas concertadas, que acaba generando también un modelo de relación social muy individualista—. Y, por último, tienen la capacidad de tejer alianzas directas con la sociedad civil. En definitiva, desarrollando estas capacidades, las ciudades pueden desempeñar un papel fundamental en persuadir a los estados para recorrer nuevos caminos hacia una mayor justicia medioambiental, económica y social.

También pueden desempeñarlo en planes como el GND, que permite articular nuevos imaginarios y aplicar cambios prácticos en las políticas económicas. Para ello, en las administraciones que los apliquen, como en el caso de Barcelona, estos deben ir acompañados de: 1) una expansión en el gasto

público orientada a determinados campos que impulsan la transformación verde de la ciudad, como el urbanismo, la gestión de residuos, la movilidad y la construcción de vivienda pública, que pueden impulsar una transformación de la economía y de la ocupación; y 2) una reforma fiscal y una regulación financiera, como, por ejemplo, intentar poner cláusulas que dificulten que las empresas que tengan dinero en paraísos fiscales se presenten a concursos públicos. Es imprescindible empujar en ambos sentidos para hablar de políticas económicas redistributivas que pongan al mismo nivel la equidad social y la sostenibilidad.

Hoy por hoy, las grandes empresas y las personas ricas pueden mover su dinero fuera de los estados para no pagar los impuestos que les corresponden, lo que genera altos niveles de injusticia social, y las personas más vulnerables se refugian cada vez más en opciones políticas de ultraderecha con la esperanza de que alguien defienda sus intereses. Ante esta deriva, las fuerzas progresistas debemos aportar enfoques realistas y esperanzadores para reconstruir la economía y sus prioridades. Para ello, y a riesgo de hablar de problemas muy grandes y de soluciones muy pequeñas, como las municipalistas, debemos seguir impulsando proyectos en nuestras comunidades que nos permitan imaginar un futuro distinto, en el que compartimos prosperidad y protegemos el planeta. El gobierno local de Grenoble, por ejemplo, está cambiando las reglas del juego con una tarificación social del agua que está directamente vinculada al sistema social nacional y que no permite gastar más del 3% de los ingresos familiares en el recibo del agua, lo que tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y reduce las desigualdades. Mientras tanto, el gobierno local de Barcelona ha creado una eléctrica municipal con energía 100% renovable y una tarificación social, y ha desarrollado un modelo de construcción de vivienda a través de cooperativas que genera un nuevo modelo de urbanismo con suelo público que no podrá privatizarse.

Además de seguir impulsando cambios desde lo local, también hay que unirse en red con otras ciudades para ser más fuertes, luchar en los juzgados cuando no se cumplen las reglas y trabajar codo con codo, desde la sociedad civil, con los partidos políticos progresistas que impulsan estos cambios desde las instituciones. Aunque estos cambios nos parezcan pequeños e insuficientes, no podemos dejar las instituciones, donde los cambios sí pueden acontecer, en manos de las fuerzas que priorizan mantener los privilegios del 1% por encima de cuidar a sus ciudadanos y al planeta. ¡Que los grandes retos globales no impidan que las ciudades hagan lo que puedan, de forma creativa y valiente!

DESAFÍO CLIMÁTICO Y JUSTICIA SOCIAL: LAS CIUDADES PASAN A LA ACCIÓN

Eric Piolle

Nuestro modelo económico debe cambiar radicalmente

Nuestro sistema económico actual tiene como único horizonte el aumento del PIB, pero el coste medioambiental y humano de este aumento es enorme y pone en peligro nuestra existencia. La situación se ha vuelto crítica para los bosques, los océanos, la biodiversidad y también para nosotros mismos, los habitantes del planeta. Nos enfrentamos a fenómenos meteorológicos extremos que serán cada vez más frecuentes. Las consecuencias del cambio climático ya son muy visibles en Grenoble, en el corazón de los Alpes: las temperaturas suben, la innivación se reduce, los glaciares desaparecen, partes de algunas montañas se hunden...

La entidad reaseguradora Swiss Re ha calculado que un calentamiento de 3,4°C provocará una caída del 18% del PIB mundial de manera sostenible. Mientras que la crisis sanitaria ya ha tenido un fuerte impacto sobre la economía, la situación con el cambio climático será aún peor.

Ante estas observaciones, sería arriesgado quedarnos paralizados por el estupor, el miedo y el desánimo. Al contrario: creo que debemos actuar con celeridad y ambición. Nuestras sociedades tienden a polarizarse entre los «realistas» y los «utópicos», entre los «radicales» y los «pragmáticos». Para mí, el reto es ser todo eso a la vez. Me defino como radical y pragmático, como actor y partícipe del cambio. Estoy convencido de que debemos centrar nuestros esfuerzos en cómo podemos vivir mejor, haciendo hincapié en las relaciones con los bienes, actuando contra la desigualdad social y la explotación de los pueblos, y cuidando de nuestro entorno para proteger también el futuro de la humanidad.



Con este espíritu, del 29 de junio al 1 de julio de 2022 Grenoble acogerá por segunda vez el Foro Internacional del Bienestar. Queremos «contar lo que importa», cambiar el rumbo para valorar qué tiene sentido, lo que es posible usando indicadores de bienestar como el vínculo con los demás, la convivencia, la libertad de movimientos, la salud, la calidad de los servicios públicos, la ayuda mutua... Es hora de cambiar los registros.

El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) nos recuerda una verdad poderosa: el reto climático es también el reto de repartir de forma igualitaria el poder y los recursos

Cuanto mayores son las desigualdades, más vulnerables somos. El acaparamiento y la privatización de los recursos en manos de unos pocos amenazan la adaptación de todos. Los Estados con más emisiones deben ser más ambiciosos. Al mismo tiempo, es fundamental organizar la solidaridad mundial para ayudar a los países más expuestos a las consecuencias del cambio climático.

Las ciudades deben desempeñar un papel clave en la búsqueda de la justicia climática, social y económica

Hoy en día, los Estados se están quedando atrás, pero los movimientos civiles y políticos están ejerciendo presión para tomar otra vía. Las ciudades, en particular, pueden experimentar otras maneras de hacer las cosas: pueden emprender transiciones importantes para reducir su impacto medioambiental, crear una economía más inclusiva u ofrecer relaciones comerciales diferentes.

Desde luego, la corriente mayoritaria sigue siendo la del dogma del crecimiento, la competencia y la guerra comercial, pero podemos apostar por otras vías, especialmente por los circuitos cortos, la reutilización, los empleos verdes que no pueden deslocalizarse, la economía social y solidaria... Eso es lo que tiene sentido y lo que fomentamos en el territorio de Grenoble.

Nuestra experiencia local del Nuevo Pacto Verde

En Grenoble, tenemos un largo historial de innovación en los ámbitos social, tecnológico, democrático... Aquí nació la primera mutua de Francia, de ayuda y asistencia entre los trabajadores de las fábricas de guantes. Aquí nacieron las primeras formas de participación ciudadana. Continuamos inventando nuevas formas que sitúan a la ciudadanía en el centro de las decisiones, desde los presupuestos participativos hasta la construcción de

espacios abiertos al público, incluyendo un sistema para plantear preguntas y las votaciones ciudadanas.

También estamos comprometidos con la atención a los indicadores de bienestar. Además, avanzamos para integrar la dimensión medioambiental y la igualdad de género en nuestros contratos públicos.

Es una dinámica amplia que se está implantando y que también incluye a los agentes, las empresas, las universidades, los ámbitos académicos y los socios públicos locales para poder acelerar aún más en esta dirección.

Hay muchos instrumentos, pero está en nuestras manos usarlos... e inventar otros nuevos.

Grenoble es la Capital Verde Europea 2022: es una gran oportunidad para acelerar aún más nuestros proyectos de transición

La Comisión Europea otorgó el título de Capital Verde Europea a Grenoble. Para nosotros, es un gran reconocimiento de las innovaciones que estamos llevando a cabo en los ámbitos ecológico y social. Es también una oportunidad para estimular una dinámica aún más amplia con todo nuestro territorio y nuestras ciudades asociadas con el fin de reforzar aún más las transiciones.

Tenemos 12 meses, 12 temas y 54 desafíos para acelerar las transformaciones sostenibles relacionadas con el agua, la biodiversidad, los residuos, los alimentos orgánicos y locales accesibles para todos... Ahora es el momento e invito a todas las ciudades que deseen unirse a nosotros a intercambiar y confrontar ideas y proyectos, y a compartir las iniciativas que funcionan aquí o en otras partes.

Juntos, podemos devolver a las personas y al planeta al centro de nuestro sistema de reflexión, decisión y acción.

¿SON LOS LOBBIES TODOPODEROSOS?

¿CÓMO MOLDEAN NUESTRAS CIUDADES LOS LOBBIES?

Beatriz Gomes Dias. Profesora y concejal de Lisboa por el Bloco de Esquerda

Isabel Pires. Miembro de la Cámara de Lisboa por el Bloco de Esquerda

Vasco Barata. Abogado y miembro de la Cámara de Lisboa por el Bloco de Esquerda

Ricardo Moreira. Ingeniero y miembro del Bloco de Esquerda de Lisboa

Cada vez más personas quieren participar en la construcción de las ciudades donde viven. La gente quiere participar en las decisiones cotidianas sobre el tráfico, el transporte público, los carriles bici, la vivienda, la contaminación del aire, el espacio público, etc. La gente ya no está satisfecha con votar cada cuatro años y quiere participar en las decisiones estratégicas que se toman en sus ciudades.

Pero, a veces, la ciudadanía tiene la sensación de que el Ayuntamiento no escucha su voz. A veces, parece que hay otras fuerzas que impulsan una agenda oculta y que las decisiones se toman a puerta cerrada.

En Lisboa tenemos dos ejemplos de dichas fuerzas: el *lobby* automovilístico y el grupo de presión de Airbnb.

Desde octubre de 2021, el gobierno de Lisboa está en manos de un alcalde de derechas. Moedas prometió más plazas de estacionamiento, menos estacionamientos de pago y menos carriles bici. Dado que había sido comisario europeo, también prometió estudios independientes para respaldar este planteamiento, que suponía abandonar la política para reducir la dependencia del automóvil que se había aplicado durante los últimos años.

Por desgracia, esos estudios independientes no aparecieron y Moedas utilizó un artículo de una agencia de comunicación para demonizar una propuesta de la oposición que proponía reducir la velocidad máxima de los vehículos en

la ciudad. El presidente del Automóvil Club de Portugal (ACP) es miembro del parlamento municipal por el partido del alcalde y ha amenazado con tomar medidas si el Ayuntamiento aprueba algunas políticas para reducir la dependencia del automóvil. El *lobby* automovilístico de Lisboa está vivo.

El otro ejemplo es la empresa Airbnb. Lisboa atraviesa una crisis de la vivienda, es la tercera ciudad más cara del mundo en la que vivir y los precios de la vivienda crecen tres veces más deprisa que los salarios. Uno de los problemas es el número de alojamientos de Airbnb, especialmente en el casco antiguo de la ciudad, donde ocupan más del 50% de los pisos.

Pero, cuando la mayoría de izquierdas suspendió la concesión de nuevos permisos a Airbnb y propuso una reevaluación de la normativa, Moedas publicó en Twitter que frenar el emprendimiento privado era un gran error. En la misma línea, la reacción de la plataforma Airbnb fue inmediata: a empresa afirmó que una normativa más estricta costaría a la empresa y a la ciudad millones de pérdidas. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que una casa es para vivir y que Airbnb es un negocio, de ahí que el grupo de presión iniciase una campaña para modificar la ley y atacar la resolución del Tribunal. El *lobby* de Airbnb de Lisboa está vivo.

El derecho a la ciudad, el derecho de las personas a participar en la construcción de su ciudad, no es compatible con los *lobbies* corporativos que ostentan una influencia directa sobre el poder.

DENUNCIAS, NOTICIAS FALSAS Y ACOSO EN REDES: DEFENDER EL DERECHO A LA CIUDAD FRENTE A LOS GRANDES PROPIETARIOS DE BARCELONA

Janet Sanz

Mientras escribo estas palabras, una opaca entidad llamada Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática ha denunciado a la alcaldesa de Barcelona por subvencionar entidades sociales. Ada Colau deberá declarar como imputada ante el juez, a pesar de que la Fiscalía ya investigó estas subvenciones y no detectó ninguna irregularidad. Lo hará con todo lo que esto implica desde el punto de vista mediático, ahora y cuando vaya a declarar: una cascada de noticias falsas, titulares sesgados que pretenden poner bajo sospecha la integridad de la alcaldesa, el gobierno y el partido, para que parezca que todos somos iguales. Y no, no lo somos.

Todo esto pasará mientras esta Asociación por la Transparencia sigue, paradójicamente, operando en la sombra: las primeras investigaciones periodísticas han desvelado que su sede es una oficina sin identificar donde hay un despacho de abogados, desde el que se niegan a dar el nombre del presidente o portavoz de la asociación, aunque sí reconocen que «llevamos mucho tiempo detrás de la señora Colau». Las pesquisas también apuntan a una relación de la asociación con la Fundación Agbar, la empresa que gestiona el agua de Barcelona, y han revelado que esta entidad se dedica principalmente a perseguir aquellos municipios españoles, como Valladolid, que están inmersos en procesos de remunicipalización del agua.

En Barcelona, los ataques de Agbar empezaron en 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que la adjudicación del contrato de la gestión del agua no había respetado los criterios de contratación

pública. La empresa empezó una ofensiva en los tribunales con el objetivo de que la remunicipalización del agua dejara de estar en los planes del consistorio: recurrieron la sentencia al Supremo, denunciaron las subvenciones dadas a entidades que defendían la municipalización y denunciaron el reglamento de participación que permitía hacer una consulta sobre el agua.

Explico los hechos con cierto detalle porque, cuando se habla de *lobbies*, muchas veces se corre el riesgo de exotizar el funcionamiento de este tipo de procesos y de darle un cierto *glamour* de película, como si fueran grupos de poderosos capitalistas conspirando en la sombra. Pero la realidad es que no se trata de situaciones excepcionales ni espectaculares, sino de una máquina del fango que funciona constantemente y a plena luz del día: se utilizan los tribunales para desgastar a los servidores públicos, judicializando los procesos y persiguiendo penalmente a quienes intentamos cambiar las cosas desde las instituciones. Las denuncias de los *lobbies* no solo sirven para tumbar proyectos, sino también para dilatarlos y bloquearlos, consiguiendo que por el camino nazca la sospecha en la opinión pública de que el Ayuntamiento lleva a cabo políticas «denunciables». Una estrategia reforzada por la acción de medios de desinformación afines, en muchos casos subvencionados por esas mismas empresas, que multiplican sus mentiras en las redes sociales a través de ejércitos de bots.

Hace apenas un año, fui yo quien tuvo que ir a declarar ante el juez. En mi caso, se trataba de una denuncia de la London Private Company S. L., los nuevos propietarios de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, después de que un nuevo planeamiento participado con la ciudadanía impidiera que se convirtiese en un hotel de lujo y acordara adquirir la propiedad para proteger la finca y convertirla en un equipamiento público para la gente mayor. Todo el proceso había sido público y transparente, aprobado en comisión de gobierno y por mayoría absoluta en el pleno del Ayuntamiento: pocas cosas generan tanto consenso en la ciudad como la protección patrimonial.

Pero, mientras esperamos el veredicto del juez, la estrategia de denuncia de los propietarios ya ha cumplido su función: se empezaron a publicar noticias falsas (que solo rectificaron cuando el daño ya estaba hecho), equiparando mi imputación y la de los técnicos de la casa con casos de especulación y corrupción urbanística, exigiendo mi dimisión y tratando también de cuestionarme en lo personal, rebuscando en mis redes sociales. Se trata de una estrategia «de clase» que busca asustar y apartar de las instituciones a quienes venimos desde abajo, porque debemos afrontar un proceso penal sin los privilegios y los recursos de estos *lobbies*. Y sirve también para desmovilizar a la ciudadanía, sembrando la desconfianza en la política y en la capacidad de los partidos de cambiar las cosas.

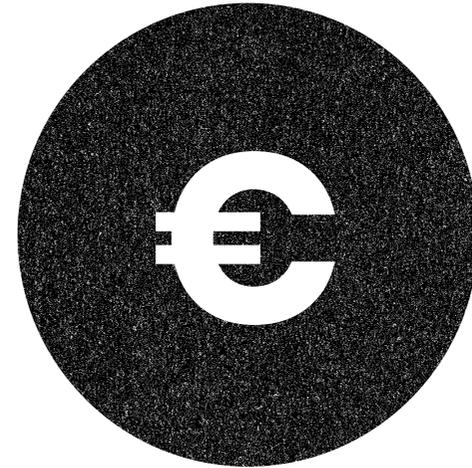
Con la Casa Buenos Aires se trataba de un solo hotel, de una sola propiedad. Pero en 2017 aprobamos el PEUAT, un plan especial urbanístico para prohibir la construcción de más hoteles en las zonas céntricas de la ciudad y acabar con el otorgamiento de nuevas licencias de pisos turísticos en toda la ciudad. Era una medida necesaria ante el hecho de que Barcelona estaba al borde del colapso turístico: una ciudad de 1,5 millones de habitantes había pasado de 7,8 millones de turistas en 2014 a 11,9 en 2019. El *boom* de la construcción de hoteles se parecía al *boom* inmobiliario que nos había llevado a la crisis de 2008, y la regulación de los alojamientos turísticos era una medida imprescindible para garantizar que Barcelona sea una ciudad con turistas pero no para los turistas.

Así, frente a una medida sin precedentes para asegurar el derecho a la ciudad de las vecinas y los vecinos, el *lobby* hotelero se organizó y decidió empezar la guerra en los tribunales, movilizándolo la opinión pública para presentar la regulación del turismo como una medida ilegal que podría causar un apocalipsis económico. Esta forma de proceder es la constante que hemos visto en la relación con los *lobbies*: lo que no pueden ganar por la vía política intentan ganarlo en los tribunales, bloqueando cualquier intento de defender los bienes comunes y el interés público frente a la propiedad privada.

El tribunal intentó tumbar el PEUAT alegando la inexistencia de una evaluación económica del planteamiento, pero el Ayuntamiento desarrolló esta evaluación, salvando así esta regulación tan necesaria. Ha sido un proceso largo y difícil, pero finalmente hemos podido actualizar y aprobar un nuevo PEUAT, blindándolo frente a los ataques jurídicos de los *lobbies* y ampliándolo para poder hacer frente a nuevos retos, como el salvaje crecimiento de habitaciones turísticas por culpa de plataformas como Airbnb: actualmente hay unos 7.700 anuncios de habitaciones en plataformas digitales, pero sin esta regulación podrían ser casi 700.000.

Ahora bien, no solo nos enfrentamos a los intereses del *lobby* hotelero, hoy somos muchas ciudades las que debemos gobernar la actividad de multinacionales como Airbnb o Blackstone. Estos gigantes empresariales tienen los recursos, los medios y el tiempo suficiente para bloquear judicialmente a los gobiernos locales y acumular denuncias contra las representantes públicas que intentamos defender el derecho a la ciudad, a la vivienda o al agua. Es un David contra Goliat que debe revertirse con iniciativas como la que en 2019 hizo que nos movilizáramos junto a París, Viena o Bruselas para exigir a la Comisión Europea que corrigiera la legislación actual que dejaba a las ciudades sin ningún poder frente a los agentes económicos globales. O con el establecimiento de redes políticas como Fearless Cities, para establecer espacios comunes de resistencia.

Y es igualmente imprescindible reflexionar colectivamente sobre los métodos que utilizan estos *lobbies* como hacemos aquí, en este libro, para elaborar estrategias conjuntas contra unas ofensivas empresariales que van mucho más allá de la persecución judicial. Solo así, desde la colaboración entre ciudades e instituciones, podremos acabar con la impunidad que rodea estos métodos de presión antidemocrática y asegurar la defensa del interés general y los bienes comunes frente a los beneficios y propiedades de unos pocos.



¿ES POSIBLE UNA POLICÍA MUNICIPALISTA?

UNA RESPUESTA MUNICIPALISTA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

Lucia Morale

Aunque deseamos un mundo sin violencia, sin crimen, y trabajamos por él, esa no es nuestra realidad ni jamás lo ha sido en la historia de la humanidad. Por eso, debemos trabajar para generar seguridad, pero también debemos saber que la seguridad no es un estado permanente que se alcance, no es un puerto en el que atracar. Al contrario, es un proceso constante, siempre abierto y cambiante, como la sociedad. Y eso es importante para gestionar las expectativas, los objetivos y las promesas respecto a las políticas de seguridad.

Quizás parezca obvio, pero tenemos que pensar en la política de seguridad como lo hacemos en cualquier otro ámbito político. Y eso significa dar todos los pasos que implican hacer una política pública: diagnosticar, diseñar una actuación, ejecutarla y evaluarla. Y esto, que a primera vista parece un camino fácil, no lo es tanto cuando se trata de la política de seguridad.

Las cuestiones relativas a la seguridad aparecen mucho en la prensa y en los medios de comunicación. Son cuestiones que tienen que ver con aspectos primitivos de la condición humana, como la supervivencia y el miedo, y son muy cercanas a los conceptos de «transgresión», «injusticia» y «castigo», así que es muy fácil usarlas para manipular y provocar agitación. Además, es mucho más fácil «vender» una fórmula rápida e instantánea de «vigilancia, encarcelamiento y cero tolerancia para los malos» que un discurso de «soluciones a largo plazo, comprender y analizar los problemas y cooperar para alcanzar una solución». Sin embargo, ha quedado demostrado que las fórmulas tradicionales son ineficaces para resolver los problemas de violencia y, en general, solo los trasladan a otro lugar o los agravan. En consecuencia, si creemos en una política municipalista, debemos intentarlo, y contamos con algunos elementos que podrían servirnos.

En primer lugar, la seguridad debe administrarse, como cualquier otra área de la política pública. La seguridad no es una cuestión que pueda dejarse en manos

de la policía para que decida por sí sola. Las políticas de seguridad y protección necesitan definición y coordinación políticas. Por supuesto, cuando decimos «política» nos referimos a la política pública, no a la política de partidos.

La policía es un actor de la seguridad y tiene un papel que desempeñar, pero este no incluye definir la política pública. Del mismo modo, definir las tareas de la policía y redefinir la organización policial forma parte de la política de seguridad pública. Por lo tanto, es necesario asumir la responsabilidad de gestionar la policía, definir su ámbito de actuación y establecer unos criterios para su intervención.

También, debemos dejar de lado el prejuicio de que la izquierda es contraria a la policía. La izquierda prioriza el servicio público a la ciudadanía y el lugar donde encaje la policía en esa definición dependerá de las circunstancias y de la fuerza policial en concreto. De modo que es un error decir que buscar un mejor servicio público es estar en contra de la policía.

En segundo lugar, en un modelo municipalista debemos desarrollar estrategias integradas de intervención para responder a los problemas de violencia a corto y largo plazo. La policía podría ser una actuación a corto plazo, pero inevitablemente debemos trabajar para resolver el origen de la violencia estructural y cultural si queremos resolver el problema a largo plazo, y para ello necesitamos otros actores.

Así pues, la policía es o debería ser un actor dentro de un ecosistema en el que tenemos o deberíamos tener otros actores que piensan y actúan en la seguridad pública. Además, debemos analizar qué problema tenemos que resolver y valorar si la policía es el actor idóneo para intervenir en este ámbito.

Una vez más, es fácil enviar patrullas, pero la pregunta es la siguiente: ¿el problema al que nos enfrentamos necesita policía? Y, de ser así, ¿hasta qué punto y haciendo qué? Es muy importante no convertir un problema que no es de la policía en un problema que sí lo es; si no, nos alejaremos aún más de la solución.

Tenemos que pensar en los problemas desde una perspectiva más amplia y prever o diseñar acciones a corto, medio y largo plazo, lo que también requiere utilizar datos más allá de las estadísticas policiales e integrar en el debate todos los servicios que puedan participar en la solución, como los servicios sociales, la sanidad, la vivienda, etc.

Para ello es importante tener y dimensionar otros servicios. Es imposible ampliar el enfoque si tenemos mil agentes de policía, pero solo contamos con diez trabajadores sociales y un mediador. Por lo tanto, debemos dimensionar

los servicios que queremos que intervengan para que sean capaces de responder adecuadamente a los problemas que abordamos.

En tercer lugar, es fundamental incrementar el número de actores que contribuyen al proceso de la política pública y participan en él. Tradicionalmente, la política de seguridad tenía el objetivo de proteger al Estado y a la clase social dominante, y por eso las esferas conservadoras y dominantes de la sociedad se han encargado de desarrollarla.

Es necesario incorporar a los sectores que hasta ahora han tenido una participación limitada, como las mujeres, las personas migrantes, las minorías, etc., y establecer prioridades, acciones y evaluaciones con ellos. Es necesario centrarse en las necesidades reales de los barrios y trabajar con ellos.

En cuarto lugar, existe una necesidad urgente de incorporar una perspectiva de género y de derechos humanos a la política de seguridad pública. Pero no solo en términos de vigilancia, que evidentemente es importante, sino también en todo el proceso de creación y ejecución de una política. ¿Los datos que utilizamos tienen esta perspectiva? ¿Los objetivos que planteamos tienen esta perspectiva? ¿Medimos el impacto de nuestra política sobre diferentes personas? ¿En qué problemas y en los problemas de quién pensamos cuando hablamos de seguridad pública?

Necesitamos que los valores de los derechos humanos estén presentes no solo en el discurso político, sino también en el diseño de las políticas y en las directrices que se dan a la policía.

Si pensamos, por ejemplo, en la gestión del orden público, muchas veces hemos visto que las autoridades políticas piden que se controle una situación «a cualquier precio» o se muestran indiferentes a los impactos de las intervenciones policiales. Eso no ayuda a prevenir los abusos. En Barcelona, lo vimos muy claramente con los sucesos del 1 de octubre de 2017 en torno al referéndum catalán: se mostraron dos modelos opuestos de intervención ante el mismo conflicto, pero no es el único ejemplo en este sentido.

La elaboración de los protocolos policiales y la formación deben ser realistas y factibles, y, si es posible, debe implicar a actores externos.

Sin embargo, aun teniendo unos objetivos claros, unos buenos protocolos y una formación adecuada, estos mecanismos tienen límites. La formación no hará magia: puede ayudar a mejorar la actuación y establecer un marco para actuar, pero debe existir también un buen sistema de rendición de cuentas en caso de abuso.

Debe implantarse un sistema de rendición de cuentas no solo interno, sino también externo y con participación social. Las tecnologías actuales, los teléfonos móviles y las redes ayudan a conseguirlo, pero en la sociedad no hay todavía una visión homogénea de esta necesidad de control.

Y no dejamos de oír a los partidos de derechas diciendo que, si controlamos la acción de la policía, le «atamos las manos» y «tendremos que atenernos a las consecuencias», o que «la criminalidad aumentará» y «debemos dejar que la policía haga su trabajo».

Esto no es aceptable. Ningún servicio público puede ejercerse sin control democrático, y aún menos uno que puede afectar gravemente a la integridad y a los derechos fundamentales de las personas. Es primordial incorporar la idea de que la responsabilidad no es una cuestión de ideología, sino de ratificación del sistema democrático.

En conclusión, debemos aceptar que el conflicto, la violencia y la inseguridad son realidades que siempre existirán y deben ser gestionadas. Debemos escuchar cuáles son los problemas y cuestionar las recetas antiguas, porque es evidente que no han sido eficaces, en parte porque siempre han sido diseñadas por y para una minoría poderosa. En este sentido, debemos estar atentos ante el hecho de que las cuestiones relativas a la seguridad serán un instrumento de la derecha para consolidar una oposición basada en prejuicios sobre el modelo de la izquierda.

En este contexto, con el fin de abordar los problemas con mayor eficacia, la única manera de avanzar es crear alternativas con la ciudadanía y ampliar la participación, incluida la participación de profesionales de otros ámbitos, además de la policía. Y establecer una gobernanza del sistema de seguridad que incluya la responsabilidad en todas las esferas de dicho sistema y la protección de los derechos en el núcleo de la política pública.

CAMPAÑAS POR LA RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LOCAL EN EL LONDRES DE LOS AÑOS OCHENTA

Nadine Finch

A finales de los años setenta y principios de los ochenta había un debate muy activo en Londres, y en otras ciudades inglesas, sobre la necesidad de reformar la manera en la que se vigilaba a algunas comunidades. Margaret Thatcher y un gobierno inequívocamente de derechas estaban en el poder y veían a las comunidades negra e irlandesa, a los sindicalistas y a los activistas políticos cada vez más como «el enemigo en casa» de un país que se preparaba para servir a los intereses empresariales y de la clase dirigente.

En los archivos se conservan muchos documentos elaborados en los años ochenta por la Unidad de Apoyo del Comité Policial del Consejo del Área Metropolitana de Londres y su sucesor, el Grupo de Supervisión e Investigación de la Policía de la Unidad de Política Estratégica de Londres (UPEL)⁶, pero estos representan el resultado del análisis y las campañas de un conjunto más amplio de individuos y grupos.

Cuando una administración radical del Partido Laborista liderada por Ken Livingstone se puso al mando del área metropolitana de Londres en mayo de 1981, en algunos barrios londinenses ya se habían creado grupos de supervisión de la policía. Este hecho llevó a que algunos consejos municipales de distrito, como Islington, crearan sus propios comités de supervisión de la policía después de las elecciones de distrito en 1982. El avance se reflejó también a escala nacional, y en el programa de los laboristas para las elecciones generales de 1983, que no ganó, se afirmaba lo siguiente:

⁶ Unidad fundada entre 1986 y 1988 por los barrios londinenses laboristas de Camden, Ealing, Greenwich, Hackney, Haringey, Islington, Lambeth, Lewisham y Southwark.

«Nuestro objetivo es velar por tener unas fuerzas policiales verdaderamente transparentes, comprometidas con el mantenimiento del orden público a partir del respeto real de las libertades individuales de todos los sectores de la comunidad.

«También velaremos por que los agentes de policía respondan por sus acciones».

En ese momento, el Partido Laborista nacional y muchos partidos locales estaban muy influidos por sindicalistas radicales, académicos que habían entrado en la universidad a finales de los años sesenta y, lo que es más importante, grupos de la comunidad local que se oponían a lo que a menudo eran acciones policiales racistas y violentas. Había habido alzamientos populares en las comunidades predominantemente negras de Brixton (Londres), Toxteth (Liverpool), Handsworth (Birmingham) y Chapeltown (Leeds). El Newham Monitoring Project se había creado para llevar a cabo un seguimiento de los ataques racistas y la falta de respuesta policial tras el asesinato de Aktar Ali Baig en 1980, y se formaron otros grupos parecidos que rechazaban los abusos policiales en Southall (Londres), Bradford (Yorkshire) y otros lugares.

Mientras tanto, el ejército británico y la Real Policía del Ulster usaban técnicas cada vez más violentas de vigilancia paramilitar, perfeccionadas en los conflictos coloniales anteriores, para controlar a los habitantes de Irlanda del Norte y, en concreto, a la comunidad nacionalista, que se consideraba también un «enemigo en casa». Al mismo tiempo, el aumento desmesurado de los índices de desempleo y pobreza sacó a las calles a la población local y a los sindicalistas para protestar y estos vivieron en primera persona las acciones policiales que antes habían vivido las comunidades negra, irlandesa, nómada y gitana.

Las unidades de supervisión de la policía del Consejo del Área Metropolitana de Londres (CAML) y la UPEL no solo documentaron estos sucesos, sino que también elaboraron sus propias propuestas para crear unas fuerzas policiales democráticas y transparentes, que satisfarían al conjunto de la comunidad y no solo a las élites. Eran contrarias a la ley de orden público y argumentaban que la libertad de reunión, manifestación y acción solidaria era fundamental en una democracia liberal. Se movilizaron contra la militarización de las fuerzas policiales, tanto en Irlanda del Norte como en otros lugares del Reino Unido, como se vio en la manera de controlar la huelga de mineros de 1984-1985.

Todo ello se basaba en la creencia de que la policía debía rendir cuentas ante las comunidades a las que vigilaba, no solo siendo contratada por políticos elegidos más o menos cada cinco años, sino sometiendo las operaciones

ordinarias de la policía al escrutinio local de la comunidad. Existía la idea, basada en la investigación académica, de que los miembros más vulnerables de la comunidad (las mujeres, las personas mayores, las víctimas de ataques racistas) eran quienes necesitaban más protección policial contra la delincuencia organizada y la ultraderecha. Por eso, debían expresar su opinión sobre cómo se vigilaba a la comunidad.

Las unidades de supervisión de la policía de la CAML y la UPEL contrataron a investigadores académicos y abogados, y estaban bien financiadas. Por consiguiente, publicaron numerosos trabajos sobre temas que abarcaban desde la vigilancia de las comunidades negra e irlandesa hasta la necesidad de la responsabilidad policial⁷. Señalaron el número de errores judiciales que se habían producido porque la policía tendía a «detener a los sospechosos habituales» y a utilizar la violencia para sacarles una confesión, y defendían que la acción policial debe basarse en pruebas y que ganarse el respeto de las distintas comunidades y trabajar con (y no contra) ellas ayudaría.

Las unidades también reunieron a un amplio grupo de habitantes locales en talleres y conferencias que permitieron conocer mucho mejor las condiciones sociales y la represión sobre las que se cimentaban algunos enfrentamientos con las autoridades. Acontecimientos como la huelga de mineros salían en la televisión nacional y muchas personas que habían tenido poco contacto con la policía descubrieron que a los agentes se les permitía actuar con impunidad.

Las experiencias municipales positivas de Londres no sobrevivieron a los años ochenta ni a los largos años de Thatcher, y también fueron abandonadas por un Partido Laborista nacional cada vez más de derechas, pero las ideas perduraron en los proyectos de supervisión que sobrevivieron y en algunos grupos, como el Instituto de Relaciones Raciales y Statewatch. También resurgieron en el trabajo de algunos comisarios de policía y de algunos centros de protección en los que participaban varios organismos y en los que la policía formaba parte de un equipo junto con los servicios sociales y sanitarios y otros organismos.

La creencia en el derecho de la comunidad a fiscalizar la conducta de la policía y el Estado se ha traducido también en campañas permanentes para pedir responsabilidades a la policía y en una serie de revelaciones recientes sobre la ilegalidad de la conducta policial, ya fuera en Irlanda del Norte, en la tragedia del estadio de Hillsborough o en relación con los abusos sexuales

⁷ Por ejemplo: GRUPO DE SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA. *Police Accountability and a New Strategic Authority for London* (Responsabilidad policial y una nueva autoridad estratégica para Londres). Documento informativo n.º 2.

perpetrados por agentes encubiertos que se hacían pasar por activistas políticos⁸. Es de esperar que se creen campañas de este tipo y que estas triunfen cuando entremos en otro periodo en el que el gobierno conservador considera ilegales las protestas y reduce el poder de jueces y abogados para exigir responsabilidades al gobierno electo.



⁸ Sir John Mitting dirige la investigación sobre los policías encubiertos.

¡DESAFIEMOS LA EXTREMA DERECHA!

ENFRENTAR EL ODIO EN LAS REDES DIGITALES

Javier Toret

Allá entre 2011 y 2013, cientos de millones de personas en todo el mundo utilizaron las redes sociales como Twitter, Facebook o YouTube para movilizarse en la calle y manifestarse contra la falta de democracia, por una mayor justicia social frente a los poderes económicos y mediáticos. Este uso tecnopolítico de la redes digitales fue determinante para que grandes movimientos en red estallaran y tomaran el espacio público de manera impugnadora. La Primavera Árabe fue la chispa, después el 15M y los Occupy: en 2012, el YoSoy132 mexicano o, en 2013, el Occupy Gezi en Turquía. Todo un ciclo de revueltas interconectadas, donde se combinaban redes digitales y la toma de plazas y calles. Se generaron procesos de autoorganización a gran escala, dando un gran impulso a las fuerzas de transformación social; la tecnopolítica del 99%.

A todo esta acción-movilización le vino una contrainsurgencia del poder. Una tecnopolítica del 1%. En 2013, nace la empresa de consultoría de *big data* Cambridge Analítica (CA), fundada por el multimillonario conservador Robert Mercer y el estratega de la comunicación y ultraderechista Steve Bannon. La empresa estaba dedicada a la minería y al análisis de datos, se centraba en suministrar herramientas y análisis orientados a la estrategia de comunicación política para campañas políticas. La primera vez que la tecnología desarrollada por CA se empleó a escala masiva se produjo en la campaña del Brexit en el Reino Unido, en 2016. El resultado e impacto del trabajo de CA fue clave para que millones de personas desearan dejar la Unión Europea, movilizándolo tanto a los convencidos como a los desencantados que dudaban, entregándoles información en las frecuencias adecuadas (según la personalidad e intereses de cada persona) para que cambiaran de conducta. La mezcla entre perfilación de personalidad, *matching* de datos y publicidad digital dinámica consiguió afectar de manera determinante la mente de millones de personas para que apoyaran el Brexit. Unos meses más tarde, Bannon fue el director de la campaña de Trump en las elecciones estadounidenses y CA diseñó una estrategia de captación de datos fraudulenta que consiguió más de cincuenta millones de datos de personas de los Estados Unidos con el

objetivo de impactar a través del análisis de personalidad de publicidad mediante inteligencia artificial. Se decía que CA tenía un perfil de cada uno de los estadounidenses con derecho a voto. En este contexto, las *fake news* tuvieron una gran importancia en campañas muy duras de desprestigio. El propio Trump empezó una guerra contra los medios de comunicación, acusando a toda la prensa crítica de difusión de *fake news* (popularizando el término), al mismo tiempo que lanzaba una campaña basada en ataques con mentiras flagrantes. Cuanto más fuerte era la mentira, más captaba la atención y más lograba que los medios se centraran en él, capitalizando paradójicamente la atención mediática a su favor. Trump ganó su primera campaña inaugurando y consolidando un estilo de hacer política basado en la polarización, el enfrentamiento agresivo contra los rivales políticos y haciendo campaña a partir de *fake news*.

En 2018 en Brasil, seis meses antes de las elecciones, Bannon fue a visitar a Flavio Bolsonaro, hijo, mano derecha y estrategia digital del candidato a la presidencia brasileña Jair Bolsonaro. Con un manual similar al desarrollado por el trumpismo, la campaña se convirtió —visto lo visto hasta ahora— en las elecciones donde más brutalmente se llevaron a cabo las prácticas de guerra híbrida y las técnicas de desinformación masiva. En estas elecciones, WhatsApp representó la estrategia de expansión de las *fake news* a escala masiva.

Podríamos decir que hasta hoy, en 2022, la *tecné* o la tecnopolítica del 1%, la proliferación del odio, el «matonismo digital», o sea, el acoso en redes digitales a mujeres, al colectivo LGTBI, a activistas y a la izquierda es una constante. Se han extendido y normalizado en las redes sociales digitales la violencia y el odio, que funcionan como destructores de la conversación social, como cultura de la intimidación y como miedo a expresarse libremente en el espacio público digital.

Los desafíos de las fuerzas transformadoras del mundo pasan por saber cómo es posible desactivar el ruido, protegerse de la intimidación y recuperar la iniciativa comunicativa bajo formas de innovación que puedan articular, como en la fase de 2011 a 2013 con las revueltas interconectadas, nuevas formas de autoorganización y comunicación social que puedan desmontar la trama digital y mediática del 1%.

LA NEUROSIS DE LA EXTREMA DERECHA Y LA ALEGRÍA DEL VÍNCULO

María Eugenia R. Palop

I

En estos tiempos, la extrema derecha ha sabido vehicular la rabia y el resentimiento de los que se han considerado perdedores y también el miedo de los que tenían algo que perder. Nosotros tenemos que canalizar esas emociones hacia una contestación de signo radicalmente opuesto.

Hay que combatir el miedo con alegría. Construir comunidades alegres que fomenten lo bueno que hay «entre» nosotros, que se alimenten de cada una de nuestras particulares periferias. Hay que construir esperanza y confiar en el futuro.

II

La misma conciencia de vulnerabilidad y de dependencia que ha dado lugar a la extrema derecha puede encontrar en la filosofía relacional un tejido bien trabado para derribar sus fronteras. Un imaginario de lo común que ponga en valor la revolución de los cuidados y los afectos, que se mueva con el mismo material humano, pero apelando a una semántica de la experiencia completamente diferente.

La filosofía relacional no parte de una autosuficiencia perdida por razones coyunturales, sino de la vulnerabilidad y de la dependencia como condición estructural de lo que significa ser humano. Y no culpa a los pobres o a los extranjeros de la inestabilidad sistémica ni de la escasez de recursos, sino a la descontrolada codicia de los ricos y los especuladores. Por eso, en lugar de apoyar los procesos de desposesión, las privatizaciones y el *nuevorriquismo* —como hace la ultraderecha, más o menos explícitamente— se articula desde una política de lo común; una política para el sostenimiento de la vida consciente de la necesidad de los bienes comunes y de las prácticas relacionales que favorecen su gestión compartida.

No hay duda de que tenemos buenas razones para tener miedo, pero no al pobre, sino a la pobreza; no al extranjero, sino al exilio; no a los migrantes, sino a la precariedad y a la intemperie; es a los pocos ricos opulentos, y no a los muchos desarraigados, a los que tenemos buenas razones para temer. De manera que nuestro refugio no puede ser esa abstracta y fantasiosa comunidad nacional clasista, jerarquizada, excluyente y expulsiva, sino nuestras vivencias cotidianas de interacción, nuestras relaciones afectivas, o los vínculos que reconocemos como valiosos y queremos cultivar.

III

Siempre hay razones para tener miedo. Seas quien seas, tengas mucho o tengas poco, siempre puede ser lícito y razonable el temor a perderlo todo. El problema es que, cuando articulamos un mundo desde el miedo, suelen darse las profecías autocumplidas. Esperamos que se nos haga daño y nos defendemos preventivamente, y, si los demás actúan bajo la misma lógica, es fácil pasar de la defensa preventiva a la guerra preventiva, la legítima defensa y la guerra total.

El miedo no nos lleva a soluciones óptimas, sino, en el mejor de los casos, a soluciones subóptimas. Lo demuestra bien el dilema del prisionero: cada jugador quiere que el otro coopere y, sin embargo, le tienta desertar. La codicia, la desconfianza y el miedo impiden al sujeto realizar su propio bien y lo alejan indefectiblemente de los demás. Lo inquietante del dilema del prisionero es la manera en que el bien común pierde terreno frente al individualismo. La falta de confianza en los otros destruye de antemano cualquier forma de acción colectiva.

Cuando renunciamos a la ética de la generosidad y dejamos de cooperar, se acaba la interrelación y el encuentro, y desarrollamos esas personalidades paranoicas que solo generan pasiones tristes. Atemorizados e incapaces de reconocernos como partes de un todo, nos vamos agostando, y ese círculo vicioso anula nuestros deseos, nuestra libertad y nuestra capacidad de ser felices.

IV

Somos más libres en la medida en que nos asumimos como el resultado de sinergias relacionales en permanente estado de (re)generación, fruto de un continuo proceso de reflexión, revisión y diálogo con los otros. La autonomía es, por definición, relacional porque es inseparable de la interdependencia; porque, como Taylor subraya a menudo, el reconocimiento mutuo se da en la experiencia del nosotros, entendida como una experiencia dialógica de

identidad. Y esas relaciones no son solo las que cada uno entabla a lo largo de su vida, sino las que tenemos con sujetos a los que no identificamos por sus nombres, relaciones estandarizadas y lazos no escogidos que hemos heredado y con los que tenemos que lidiar a diario. Hace años, en *Postures of the Mind: Essays on Mind and Morals*, decía A. Baier: «[...] las personas son esencialmente segundas personas [...], vienen después y antes de otras personas [...], son esencialmente sucesoras, herederas de otras personas que las formaron y cuidaron de ellas [...]. Mi primer concepto de mí misma es como el referente de un “tú”, pronunciado por alguien a quien yo me voy a dirigir como “tú”».

De manera que el miedo nos roba libertad y autonomía porque nos aísla y nos fragmenta, y ese aislamiento, además, es una fuente inagotable de tristeza.

V

La tristeza, como dice Deleuze, siguiendo a Spinoza, no nos hace más inteligentes, sino más ignorantes, torpes y sumisos. Por eso los poderosos nos quieren tristes y por eso la alegría es la resistencia de los pobres.

La alegría es el antídoto del miedo y nos dota de potencialidad y agencia. Cuando apelamos a la alegría, no dejamos de ser víctimas, pero dejamos de depender de nuestros victimarios.

La extrema derecha, sin embargo, con sus constantes apelaciones al miedo, no nos deja salir de la dicotomía víctima-victimario porque solo ofrece una salida securitaria y punitivista. La reacción punitivista, por más comprensible que sea, individualiza un problema estructural y acaba debilitando el énfasis en la coerción social a la que todos estamos sometidos. Es decir, cuando lo único que se busca es criminalizar y castigar a un agresor concreto, la referencia deja de ser la clase o el «nosotros», y pasa a ser, simplemente, el «yo», la víctima. Si el derecho nos protege solo mediante el uso de sanciones, nos divide, nos despolitiza y nos deja sin protección como grupo.

Además, un proyecto legal desligado de un programa político-económico redistributivo, de una agenda social más amplia en torno a las violencias y centrado únicamente en la justicia penal tiene un alcance muy limitado, confirma el *statu quo* y alimenta las dinámicas utilitaristas del sistema. Es, en buena parte, estéril: estas dinámicas pueden llevar a castigos espectaculares para los agresores señalados mediáticamente, represalias individualizadas de enorme calado para disuadir a terceros, pero resultan inútiles una vez eliminadas unas cuantas manzanas podridas.

En fin, el Estado policial y el militarismo que la extrema derecha activa frente a las emergencias que ella misma crea o amplifica nos revictimiza, nos aísla, nos deja desprotegidos, tristes y sometidos.

VI

La risa es la espada más victoriosa, decía Miguel Hernández. Frente a la neurosis de la extrema derecha, defendamos la alegría, pluma por pluma.

ALGUNAS REFLEXIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA EXTREMA DERECHA

Gerardo Pisarello

Me gustaría plantear mi lectura del actual ascenso de la extrema derecha a partir de una clave personal: soy latinoamericano de origen. Llegué a Barcelona en el año 2001, después de vivir un tiempo en Madrid. Desde entonces, combino la docencia universitaria con el activismo social. De pronto, en 2015 me convertí en vicealcalde de la ciudad.

Mis orígenes no presagiaban algo semejante. En realidad, hubiera sido imposible sin un largo proceso de movilizaciones que cuestionaron la política tradicional y abrieron nuevos procesos de democratización, en las instituciones y fuera de ellas. En un ciclo largo, en el cual habría que incluir el movimiento contra la guerra y por una Europa alternativa de 2003, y, de manera muy señalada, las huelgas y mareas ciudadanas que rodearon la irrupción del movimiento del 15M en las plazas en 2011.

Hoy soy diputado en el Congreso de Madrid, pero el contexto ha cambiado notablemente: por una parte, hay movimientos como el feminista, el LGTBI o el ecologista que han ganado un nuevo empuje. Por otra parte, sin embargo, asistimos a una contraola, una de cuyas expresiones más acabadas la hallamos en el ascenso de una nueva derecha con tintes neofascistas. Esta nueva derecha, que puede tomar cuerpo en uno o más partidos, sigue defendiendo el modelo neoliberal y lo hace con formas y objetivos cada vez más violentos, recurriendo al discurso del odio y a *fake news* que estigmatizan a los mismos colectivos que ganaron peso durante la oleada democratizadora: migrantes, racializados, de mujeres, feministas, sindicatos...

En realidad, esta extrema derecha necesita de la violencia contra cualquier alternativa que pueda suponer salir de esta crisis con un mínimo de justicia social y ambiental, de redistribución y de reconocimiento a quienes han sido estigmatizados o violentados por razones de clase, de género o de origen étnico.

Al mismo tiempo, observamos como hay un cierto desconcierto a la hora de resolver cómo enfrentarse a esa extrema derecha. A veces se apela al miedo, a la gravedad que supone su avance, y, ciertamente, es importante que la cuestión no se banalice, que no se piense que esta extrema derecha es una opción política más. Hay que dejar claro que esta gente está dispuesta a utilizar formas de violencia mafiosa para conseguir sus objetivos: apalea a personas LGTBI o a migrantes, a utilizar matones para desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad, a asaltar sindicatos o a realizar auténticas prácticas de persecución y asedio de opositores políticos en las redes y en sus medios digitales. Eso no puede perderse de vista ni se puede minimizar. Los hemos visto dar apoyo a golpes de Estado, como en Bolivia. Los hemos visto disparar contra la población negra, como en los Estados Unidos o en la frontera sur de Europa. Los hemos visto señalar y perseguir a la población LGTBI, como en Brasil o en Hungría.

Nada de eso es menor. Ahora bien, apelar al miedo o, incluso, a un discurso antifascista simple también puede ser un problema porque muchas de las causas que producen el crecimiento de la extrema derecha tienen que ver con la incapacidad de las izquierdas, de las alternativas progresistas, para llevar adelante políticas sociales, fiscales o económicas que realmente confronten el aumento de la desigualdad. La extrema derecha cabalga sobre este malestar con una gran capacidad mediática, propagandística, para reconducirlo a actitudes de odio y de desprecio contra los más vulnerables, a políticas de enfrentamiento entre pobres o del penúltimo con quien llegó último.

Y no es solo eso: para defender su programa, la extrema derecha no ha dudado en jugar la carta de la rebeldía y de la burla, sobre todo, dirigida contra lo que define como el «pensamiento políticamente correcto». En este sentido, hemos visto mucha creatividad (y mucho dinero) en youtuberos de la extrema derecha, versiones muy modernas en TikTok, con canciones o bailes.

Dicho de otro modo, la extrema derecha se ha esforzado en no aparecer reducida a una imagen color sepia de señores mayores anclados en el pasado. Ha sabido diversificar sus ofensivas y, cuando ha hecho falta, ha sabido agregar al discurso un punto que pudiera resultar festivo para los suyos. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia intentaron resignificar y dar centralidad al concepto de «libertad» presentándolo como el derecho a hacer lo que a cada uno le plazca, a desarrollar al máximo las propias aspiraciones, aunque eso pudiera tener consecuencias nefastas en la salud o en el libre desarrollo del resto, comenzando por quienes se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad.

Esta idea de libertad opera sin duda como una suerte de capricho de quienes más recursos tienen. A veces, eso le ha permitido a la extrema derecha

despotricar contra los controles sanitarios; otras, contra cualquier tipo de regulación de la propiedad o del mercado —control de alquileres o precios abusivos, políticas fiscales progresivas, reducción de las emisiones de efecto invernadero...— que se presentan como limitaciones «tristes» a la «alegre» capacidad de hacer lo que el individuo quiera.

El peligro de esta concepción «aspiracional» de la libertad radica en que conecta con un cierto individualismo arraigado a ciertas prácticas cotidianas y en las propias redes sociales después de décadas de neoliberalismo. La promoción exclusiva del sí, de la propia imagen, resulta funcional a la necesidad neoliberal de disolver los vínculos comunitarios, cooperativos, sobre todo en el mundo del trabajo. Pero no solo eso: quitarse las mascarillas o tomarse una cerveza al aire libre en plena pandemia, transportarse, consumir sin límites y sin preocupación alguna por las consecuencias de todo ello en lejanas poblaciones campesinas indígenas también quedan presentados como la expresión más acabada de la libertad, cuando en realidad esconden privilegios con un claro sesgo de clase —y la más de las veces, de género y de origen étnico—.

Seguramente, no existe una receta única para hacer frente a todo esto. Sabemos, eso sí, que hay algunas respuestas que no acaban de funcionar: por un lado, lo que la filósofa política estadounidense Nancy Fraser llama «progresismo neoliberal». La idea de que basta reivindicar ciertas cuestiones de reconocimiento —la diversidad de género, étnica o de opciones sexuales—, opacando las cuestiones redistributivas o de clase. Es decir, la defensa de un discurso antirracista, feminista, LGTBI, que no cuestiona las raíces económicas, de clase, que sí genera la extrema derecha. O, dicho de otro modo, un discurso de la diversidad que renuncia a hablar de economía política y de la necesidad de contrarrestar la acumulación y la concentración de propiedad —financiera, rentista, inmobiliaria—.

Dicho lo cual, no es menos cierto que la respuesta tampoco puede ser una especie de populismo de izquierdas, que simplemente oponga a las personas de abajo contra los de arriba, como única confrontación, perdiendo de vista el papel que desempeñan ciertas cuestiones fundamentales de reconocimiento. Todo esto no tiene solo una resolución doctrinaria. La extrema derecha no tiene ese problema, porque intenta reducirlo todo a una única cuestión. Se siente más cómoda con la uniformidad: una idea de nación, una idea de familia o una idea única de relaciones afectivas —todas excluyentes—. Frente a eso, hay que insistir en lo que, desde hace tiempo, viene planteando Boaventura de Sousa Santos: encontrar un proyecto de cambio que pueda defender la igualdad cuando las diferencias jerarquizan y defender la diversidad cuando la igualdad uniformice.

Por lo tanto, hoy tenemos muchos elementos sobre los que construir una alternativa progresista, de izquierdas, comprometida con el reconocimiento, con la redistribución y con la profundización de la participación democrática en diferentes esferas de la vida. Y aquí es donde hay que reivindicar los ámbitos concretos en los que esto puede fructificar mejor. El municipalismo es uno de los más importantes porque es el laboratorio democrático por excelencia; porque es el ámbito donde mejor se puede lidiar con los miedos, con las ansiedades, con la inseguridad social sobre la que la ultraderecha construye su proyecto. Un municipalismo robusto, capaz de desarrollar relaciones e instituciones propias, cercanas, es fundamental para plantearse la democratización de los estados, para conjurar sus elementos más burocratizadores y mercantilizadores.

Y, junto al municipalismo, obviamente, está el internacionalismo. La necesidad de un internacionalismo solidario que tenga en cuenta también esas cuestiones de clase, de origen étnico, de género, que marcan las relaciones internacionales. Esto es algo que nos incumbe especialmente a quienes vivimos en Europa. A veces, solemos invisibilizar las alternativas que vienen del Sur, cuando, en realidad, es en la periferia donde se están produciendo algunas de las experiencias de resistencia a la extrema derecha más ásperas, pero, al mismo tiempo, las más interesantes.

Ser internacionalistas además de municipalistas es especialmente importante porque las propias derechas radicalizadas están articuladas a escala internacional. En el caso de España, cabe señalar todo el despliegue alrededor de lo que Vox denomina la «iberoesfera», esto es, una zona de influencia política, económica y cultural concebida de manera neocolonial con un proyecto claro: impulsar alianzas, operaciones de *lawfare*, golpes de Estado si es necesario, para evitar que otras alternativas con un contenido emancipador puedan abrirse camino.

A mí, el *fearless* me gusta precisamente porque es una promesa de estar juntas y juntos de manera muy diversa. Es la oportunidad de sorprendernos entablando conexiones entre lo local y lo internacional, y poniendo en común las oportunidades y los límites que plantean las mediaciones estatales. Durante la pandemia hemos descubierto las potencialidades que tiene construir esos vínculos de manera virtual, telemática, pero también hemos constatado que los vínculos que mueven a la acción necesitan de presencialidad, de corporalidad.

Es en esos encuentros donde tenemos que poner a prueba el tipo de reacción «afectiva» con la que enfrentar a la extrema derecha. A veces, se tratará de denunciar con seriedad y gravedad lo que está ocurriendo para no

banalizarlo e incluso para recordar los antecedentes históricos de lo que la extrema derecha plantea como «nuevo» —el fascismo, las dictaduras clásicas, etc.—, pero lo cierto es que esa utilización de la denuncia «seria», «grave», no puede tampoco hacernos perder la alegría. Ninguna resistencia, ninguna movilización sostenida, es posible sin esa dimensión festiva, sin esa conexión con pasiones alegres que contrarresten y que, incluso, ridiculicen las necropasiones que moviliza la ultraderecha.

MUNICIPIOS TRANSPARENTES Y JUSTOS: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO

MUNICIPIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Júlia Miralles de Imperial

La corrupción es un problema que afecta a todos los países y, por tanto, a todas las ciudades del mundo. Es un error habitual pensar que los países desarrollados y democráticos estamos exentos o que nos afecta menos ese problema, pero se ha demostrado que la insuficiente integridad de gobierno es un problema público generalizado. España es un ejemplo obvio de que las economías más avanzadas también tienen mucho que mejorar en calidad de gobierno, pero Suecia, por ejemplo, es un caso menos evidente y, en cambio, también ahí se han destapado casos importantes de corrupción, en concreto en las ciudades.

Además, la corrupción es un problema especialmente presente a nivel local, un hecho que se ha observado en países muy diferentes como España, Italia, Estados Unidos o, como comentábamos, Suecia. Los motivos por los cuales es en los gobiernos municipales donde más habitualmente se desarrollan conductas corruptas y, sobre todo, cómo combatir esa realidad, son dos de las cuestiones centrales que abordaremos en este capítulo.

Pero ¿por qué es fundamental luchar contra la corrupción? Se ha comprobado que la corrupción genera una asignación ineficiente de recursos, menoscaba la libre competencia, expulsa a algunos actores del mercado y crea un clima de inseguridad jurídica que desalienta la actividad empresarial. No obstante, para justificar las políticas anticorrupción, los efectos sobre la economía son un fundamento claramente insuficiente, ya que la corrupción genera otras lesiones tan o más graves en nuestro sistema social y político.

La corrupción impacta negativamente en las bases mismas de nuestra democracia, ya que debilita el funcionamiento de las instituciones y hace que estas dejen de responder a los objetivos establecidos a partir de la participación democrática.

A su vez, reduce la confianza de la ciudadanía en el sistema político y genera desafección. Se produce, de esta manera, un círculo vicioso que debilita el sistema democrático, dado que las personas que perciben altos niveles de

corrupción dejan de confiar en las instituciones, lo que, a su vez, las hace menos proclives a exigir la debida integridad institucional.

Por otro lado, la corrupción tiene impactos relevantes sobre la igualdad social. En un gobierno o una administración corruptos, los recursos públicos no se asignan respetando los principios de la promoción de la equidad o la igualdad ante la ley, sino que aquellos individuos o actores que pueden usar su influencia, que pueden pagar sobornos y que están dispuestos a hacerlo son los que controlan las decisiones finales sobre quién se beneficia de las políticas públicas.

La corrupción, además, está ligada a otras lacras de nuestras democracias, que las convierte en sistemas más desiguales y que reducen la capacidad de los gobiernos para impulsar políticas públicas para mejorar la vida de la ciudadanía, como los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el blanqueo de dinero e, incluso, el crimen organizado.

Sirva lo anterior como un breve resumen para explicar que hay muchísimos motivos por los que seguir luchando contra la corrupción y que estos van mucho más allá de los económicos, que son los más reivindicados desde algunos sectores. Luchar contra la corrupción es luchar a favor de nuestra democracia.

Por lo tanto, no debemos entender la corrupción como un elemento que incomoda solamente a los liberales por sus efectos negativos sobre el crecimiento económico, sino que unas instituciones igualitarias y que trabajen para el bienestar de toda su ciudadanía sin duda deben tener entre sus objetivos principales construir gobiernos íntegros y de calidad.

En este capítulo, tres expertos que han trabajado en políticas de integridad de gobierno desde la academia y desde las instituciones nos explican cuáles son las características de la corrupción actual, sobre todo en pueblos y ciudades a nivel global, y las formas para combatirla tanto desde el nivel local como desde las instituciones europeas.

¿EN LAS CIUDADES HAY MÁS RIESGO DE CORRUPCIÓN? ¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE LA CORRUPCIÓN EN LAS CIUDADES?

Eliška Drápalová

Desde que en 1995 se publicó el Índice de Percepción de la Corrupción, incluso los ciudadanos corrientes son conscientes de que la corrupción varía mucho según la región y el país. La mayoría puede nombrar los países mejor clasificados y adivinar los que ocupan los últimos puestos. Aun así, muchos desconocen las grandes diferencias entre ciudades y regiones del mismo país, que pueden ser mayores que las diferencias entre continentes. Por ejemplo, algunas ciudades y regiones de Italia son célebres por la penetración de la mafia y la corrupción, mientras que otras la han erradicado de manera eficaz. Y esto puede aplicarse a otras ciudades del mundo.

Esta variación local es fundamental para comprender cómo se propaga la corrupción, porque las consecuencias de esta se materializan especialmente en las ciudades. El dinero público que los políticos se embolsan se pierde de los presupuestos locales: falta de infraestructuras, deficiencias en Educación o Sanidad. En cambio, el dinero va a parar a estadios excesivamente caros y desproporcionados, aeropuertos vacíos u otros monumentos de la corrupción que no tienen ningún valor público, pero que generan déficit. La corrupción influye en el emprendimiento, en el desarrollo económico local y en las oportunidades laborales. Los gobiernos corruptos discriminan más a las mujeres y a las minorías, y se asocian a elevados niveles de informalidad y violencia. Como consecuencia, los ciudadanos migran de las ciudades con gobiernos precarios a otras ciudades mejor gobernadas, con lo que se acentúan aún más las diferencias en el territorio (Drápalová, 2021). La investigación demuestra que la diferencia entre las ciudades bien gobernadas que

prosperan económicamente y aquellas en las que predomina la corrupción ha ido en aumento en la última década. Las crecientes diferencias territoriales que la corrupción genera han contribuido a una gran variedad de problemas actuales, como el auge del populismo (Agerberg, 2017).

Los gobiernos locales presentan un mayor riesgo de corrupción, incluso en los países donde esta es escasa. Por ejemplo, los ayuntamientos suecos son más vulnerables a la mala gestión que los organismos gubernamentales a escala nacional. Este alto riesgo se debe a la combinación exclusiva a escala local de más oportunidades y menos defensas contra la corrupción. La democratización de los países de Europa central y oriental, de América Latina y de otros lugares fortaleció a muchos gobiernos locales. En las últimas décadas, los gobiernos locales (ciudades grandes y medianas, pueblos) han (re) conquistado más autonomía, más poder político, más responsabilidades y, en algunos casos, más ingresos y más personal. Sin embargo, el incremento de los recursos (impuestos propios) y de las competencias (licitación) también incrementa las oportunidades de mala gestión y corrupción.

Esa mayor vulnerabilidad se explica por una combinación de factores políticos e institucionales de ámbito local, como la concentración de los recursos (escasos), la proximidad de los actores y la mayor discrecionalidad de los burócratas locales responsables de la ejecución. Los gobiernos locales suelen desempeñar un papel destacado en la licitación y la prestación de servicios a la ciudadanía. Los funcionarios locales se encargan del registro y la autorización, y prestan servicios básicos, asistencia sanitaria y educación, y, en algunos casos, asumen funciones intersectoriales en el desarrollo económico o la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, las licitaciones públicas y la prestación de servicios son cada vez más complejas. Con la implantación de la Nueva Gestión Pública y la privatización, han proliferado los organismos semiautónomos encargados de la ordenación territorial, el transporte y otras áreas políticas lucrativas. La complejidad creciente implica que sea más difícil controlar la licitación y la oferta de bienes públicos, y protegerlas contra la mala gestión. Un segundo factor que influye en que los gobiernos locales sean más vulnerables es la mayor discrecionalidad de los políticos y los burócratas locales, que se encargan de la implantación, la regulación y las autorizaciones. Los políticos locales se interesan por lugares concretos para obtener apoyo electoral. Allí, tienen contacto con sus seguidores y crean un caldo de cultivo para la compra de votos, el clientelismo y el favoritismo. A escala local, las conexiones entre los políticos y las empresas o las personas con influencia son estrechas. Viven en el mismo lugar, fueron juntos a la escuela, se ven en el mismo bar o incluso son parientes.

Al mismo tiempo, las ciudades (sobre todo las pequeñas) cuentan con menos defensas contra la corrupción. Los pueblos tienen menos probabilidades de que el gobierno central los audite, y la administración local tiene menos capacidad para supervisar sus operaciones y controlar a los políticos con eficacia. Salvo en la capital y las ciudades más grandes, el escrutinio de los medios de comunicación es menor, como también lo es la acción fiscalizadora de organizaciones y ONG. Filipe Campante y Quouc-Ahn Do (2014) señalan que los medios de comunicación estadounidenses prestan menos atención a las ciudades más alejadas de la capital, por lo que son más corruptas. Las ciudades pequeñas en particular no tienen organismos anticorrupción y cuentan con una menor capacidad administrativa (tecnologías obsoletas, falta de personal especializado y cualificado) para controlar eficazmente la corrupción desde dentro.

Aun a riesgo de simplificar mucho, podemos afirmar que los mecanismos corruptos que operan a escala local se aprovechan de unas oportunidades y debilidades específicas:

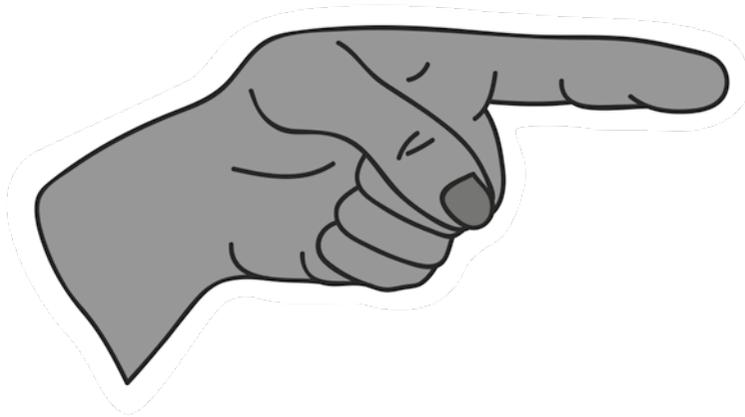
- Explotación de los recursos (escasos). Los actores que quieren participar en la corrupción se aprovechan de la complejidad de las licitaciones públicas y la escasez de recursos públicos. Es importante señalar que el problema no es que haya demasiados recursos, sino su escasez en combinación con su uso discrecional y personal. La escasez crea oportunidades para la corrupción. Las largas listas de espera para recibir tratamiento en un hospital y los presupuestos insuficientes y limitados de las ciudades las empujan a utilizar el terreno para financiar el presupuesto municipal, lo que se traduce en especulación del suelo, corrupción y abusos del sector inmobiliario. Unos fondos discrecionales considerables en manos del alcalde pueden utilizarse para financiar a sus simpatizantes, así como a un poder legislativo y ejecutivo ilimitado.
- Instrumentalización de la discrecionalidad de políticos y funcionarios. Los representantes políticos locales tienen mucho poder a la hora de distribuir los beneficios económicos en el municipio, pero no se les presiona mucho para que den cuenta de sus acciones (Mungiu-Pippidi y Johnston, 2017). Además, los funcionarios municipales tienen una discrecionalidad mayor al conceder permisos, autorizaciones y subsidios. Muchos investigadores argumentan que, en el caso de España, un número insuficiente de mecanismos de control sobre las actividades de los representantes locales entre 1997 y 2007 explica bien la intensidad y la extensión de la corrupción a escala local (García Quesada et al., 2013).

- Las redes corruptas suelen aprovecharse de los mecanismos limitados de los órganos de control centrales e internos. Las tramas de corrupción operan sin vigilancia por la falta de presión social y de escrutinio por parte de organizaciones fiscalizadoras y ONG. Una falta de transparencia convierte la información en un capital privilegiado para quienes detentan el poder y sus asociados. La falta de información (transparencia) relativa al presupuesto local y los programas de gastos facilita que los fondos destinados a colegios, hospitales o ayudas en caso de catástrofe natural se gasten en fines con un beneficio social menor, como estadios enormes, aeropuertos o puentes a ninguna parte (della Porta y Vannucci, 1999; Reinikka y Svensson, 2005).
- Instrumentalización de la politización de los funcionarios. Rebecca Weitz-Shapiro investigó el clientelismo en las ciudades argentinas y observó que los funcionarios politizados apoyaban a la alcaldía actuando como intermediarios y distribuyendo subsidios y bienes a los ciudadanos leales (Weitz-Shapiro, 2014). Se observó que los funcionarios también actuaban como intermediarios de la corrupción en zonas rurales de Rumanía, Bulgaria y Hungría (Mares et al., 2016, 2017). Es poco probable que los funcionarios politizados controlen eficazmente el gasto público o las licitaciones y den la alarma cuando detecten irregularidades.
- Instrumentalización de la dependencia (política y económica) vertical del territorio. Tanto si el país tiene un modelo centralizado como si es federal, habitualmente los gobiernos locales forman parte de redes y tramas de corrupción vertical organizadas desde el centro. Estas redes verticales utilizan las ciudades como oficinas de cobro subsidiarias que reciben sobornos y favores, o conceden contratos a empresas vinculadas o colaboradores leales.

Por todo ello, las medidas para limitar la corrupción o mantener el buen gobierno son una tarea para cambiar el sistema que incluye a todo el mundo y debe estar dirigida a restringir el poder discrecional de los políticos, reducir la complejidad de la normativa, aumentar la independencia y la profesionalidad de la administración, empoderar e integrar a la prensa local y la ciudadanía en coaliciones amplias (Mungiu-Pippidi, 2013). Parece difícil de conseguir, pero la existencia de ciudades virtuosas, como islas del buen gobierno, incluso en entornos institucionalmente inestables de países muy corruptos, demuestra que las ciudades pueden luchar con éxito contra la corrupción. Las ciudades cambian muy deprisa y tienen ventajas singulares como el capital social y la colaboración ciudadana para impulsar el cambio.

Bibliografía

- > AGERBERG, Mattias. (2017). «Failed expectations: Quality of government and support for populist parties in Europe». *European Journal of Political Research*, vol. 56, n.º 3, p. 578600. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12203>
- > CAMPANTE, Filipe. R.; DO, Quouc-Ahn. (2014). «Isolated Capital Cities, Accountability, and Corruption: Evidence from US States». *American Economic Review*, vol. 104, n.º 8, p. 2456-2481. <https://doi.org/10.1257/aer.104.8.2456>
- > DELLA PORTA, Donatella; VANNUCCI, Alberto. (1999). *Corrupt exchanges: Actors, resources, and mechanisms of political corruption*. Transaction Publishers.
- > DRÁPALOVÁ, Eliška. (2021). «Down-to-earth. What we can learn from studying corruption at the local level». *Oxford Handbook of Quality of Government*. Oxford University Press.
- > GARCÍA QUESADA, Mónica; JIMÉNEZ-SÁNCHEZ, Fernando; VILLORIA, Manuel. (2013). «Building Local Integrity Systems in Southern Europe: The case of urban local corruption in Spain». *International Review of Administrative Sciences*, vol. 79, n.º 4, p. 618-637. <https://doi.org/10.1177/0020852313501125>
- > MARES, Isabela.; MUNTEAN, Aurelian; PETROVA, Tsveta. (2016). «Economic Intimidation in Contemporary Elections: Evidence from Romania and Bulgaria». *Government and Opposition*, p. 1-32. <https://doi.org/10.1017/gov.2016.39>
- > MARES, Isabela.; MUNTEAN, Aurelian; PETROVA, Tsveta. (2017). «Pressure, Favours, and Vote-buying: Experimental Evidence from Romania and Bulgaria». *Europe-Asia Studies*, vol. 69, n.º 6, p. 940-960. <https://doi.org/10.1080/09668136.2017.1364351>
- > MUNGIU-PIPPIDI, Alina; JOHNSTON, Michael. (2017). *Transitions to Good Governance Creating Virtuous Circles of Anti-corruption*. Elgar.
- > MUNGIU-PIPPIDI, Alina. (2013). «Controlling Corruption by Collective Action». *Journal of Democracy*, vol. 24, n.º 1, p. 101-115.
- > REINIKKA, Ritva; SVENSSON, Jakob. (2005). «Fighting Corruption to Improve Schooling: Evidence from a Newspaper Campaign in Uganda». *Journal of the European Economic Association*, vol. 3, n.º 2-3, p. 259-267.
- > WEITZ-SHAPIRO, Rebecca. (2014). *Curbing Clientelism in Argentina*. Cambridge University Press.



LA CIUDAD Y LA CORRUPCIÓN

Joan A. Linares

La corrupción deteriora el Estado de derecho e impide su funcionamiento normal amenazando los principios constitucionales que lo inspiran, especialmente el del sometimiento de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico, el de la igualdad de todos ante la ley o el de la obligación de la Administración pública de servir con objetividad los intereses generales.

En una reciente conferencia dentro de las actividades formativas de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), el catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, José Luís Villacañas, afirmaba que la corrupción nos roba dinero y dignidad a partes iguales y que su enquistamiento sistémico abre el camino a la tiranía.

El malogrado profesor José Vidal-Beneyto sostuvo siempre que la lucha contra la corrupción es el desafío fundamental de nuestra democracia y llamaba a un movimiento general de reprobación contra las prácticas corruptas en el que se implicara la ciudadanía.

El primer fiscal anticorrupción que tuvo España, Carlos Jiménez Villarejo, también en una conferencia pronunciada en Valencia con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, sostenía que el fenómeno de la corrupción en los estados democráticos tiene causas estructurales que guardan relación con la organización del Estado y sus administraciones públicas y con la ordenación de los poderes públicos; entre otras razones, por la insuficiencia de los controles que abdican de sus funciones bien por pasividad, bien por complicidad, más o menos encubierta con los gobernantes.

Y podríamos seguir con citas sobre ética pública e integridad de Victoria Camps, Manuel Villoria o Adela Cortina, quienes confluyen en situar en el eje fundamental de cualquier sistema político el de la ejemplaridad de sus gobernantes. De nada sirve exigir al ciudadano comportamientos éticos si quienes están en la cúspide del poder no dan ejemplo. La integridad se construye por arriba.

El marco de la integridad pública es un sistema jurídico que se construye a partir del propósito de los gobernantes de combatir la corrupción. Se necesitan normas legales seguidas de conductas ejemplares y de firme cumplimiento. Sin normas y sin cultura de cumplimiento es imposible poner fin a las inercias que nos vienen de siglos de abusos y desvíos de poder y de apropiación de lo público en beneficio de intereses privados. Con normas pero sin cultura de cumplimiento le abrimos las puertas al cinismo social.

La Administración municipal es la que está más próxima a la ciudadanía y una buena gobernanza de la ciudad es un buen camino para luchar contra una de las lacras que más daño hace a la democracia y a la economía. La corrupción detrae recursos públicos para entregarlos a mafias incrustadas en nuestras administraciones y gobiernos. Según la OCDE, entre un 10% y un 30% de los grandes proyectos de obras se pierden por ineficacia de los controles y por mala gestión. Ciudad y urbanismo es sinónimo de un ecosistema donde la ciudadanía ha estado marginada en favor de los grandes grupos de interés que han tomado las decisiones al margen de las estructuras democráticas y pensando únicamente en su beneficio. El urbanismo depredador y especulativo se ha construido sobre la captura de las instituciones municipales que, en muchas ocasiones y aun resistiéndose, han sucumbido al inmenso poder de las alianzas entre promotores, bancos y especuladores.

Asimismo, buena parte de los servicios que una ciudad debe garantizar a la ciudadanía ha ido perdiendo con el tiempo su naturaleza de servicios municipales para pasar a ser concesiones privadas de gestión opaca y objetivo apetitoso para grandes empresas, cuya capacidad de influencia y de poder son en muchas ocasiones superiores a la propia capacidad de las administraciones municipales. Este desequilibrio se ha traducido en la captura de lo público por corporaciones que no rinden cuentas ante nadie y que extraen rentas de los ciudadanos y ciudadanas a través de tasas y precios con escaso y deficiente control público.

La forma de luchar contra la corrupción en nuestras ciudades pasa por establecer un marco de integridad y medidas para prevenir la corrupción, que se articulen desde arriba hacia abajo: desde el firme propósito de los equipos de gobierno de luchar contra la corrupción hasta el establecimiento de sistemas de transparencia en la contratación y la gestión en general; códigos éticos y de conducta para todos, cargos electos y funcionarios con comités de ética con amplia capacidad de actuación; mapas de riesgos estructurados para fortalecer los puntos débiles; canales de denuncia y alertas que permitan la participación ciudadana y de los propios empleados públicos en la detección de irregularidades; sistemas de protección para los alertadores y sobre todo el establecimiento de una unidad como la que constituyó el Ayuntamiento

de Barcelona en 2016, la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas o la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid, desde donde se operen programas y sistemas que ayuden a la prevención, la detección, la corrección y la persecución de fraudes y corruptelas en conexión con las agencias anti-fraude donde las haya. Estos órganos deben contar con los medios necesarios y con los recursos suficientes para ejercer sus tareas de control, garantizar su independencia del resto de los órganos municipales y que su rendición de cuentas se lleve a cabo ante los máximos órganos representativos de la democracia municipal.

Solo un firme convencimiento por parte de los representantes políticos de la ciudadanía de que la democracia municipal está íntimamente unida a la lucha contra el fraude y la corrupción nos conducirá a unas ciudades más eficientes y alineadas con el interés general y el bien común.

BLANQUEO, FRAUDE FISCAL Y CORRUPCIÓN FINANCIERA EN LA UE: QUÉ ES Y CÓMO PODEMOS COMBATIRLO

Ernest Urtasun y Jesús Hernández

Los escándalos relacionados con casos de corrupción financiera, blanqueo y evasión fiscal en la Unión Europea (UE) son, lamentablemente, recurrentes. En los últimos ocho años dan prueba de ello los papeles de Luxemburgo (LuxLeaks), los papeles de Panamá o los de Pandora, Offshore Leaks, Football Leaks, las filtraciones de Bahamas, OpenLux, el caso Cum-Ex o el más reciente Suisse Secrets. Estos escándalos han ido acompañados de reacciones normativas de mayor o menor calado y, a su vez, han ido definiendo claramente las reformas necesarias para avanzar en una agenda política que consiga una verdadera justicia fiscal y económica.

Para empezar, debemos destacar el papel del periodismo de investigación y de las personas *insiders* que han denunciado los escándalos. Ha sido fundamental para radiografiar el problema real y, a la vez, captar la atención pública y política necesaria para desarrollar las normas europeas en esta materia durante los últimos años. Por eso, su labor se merece siempre un reconocimiento cuando se habla de este tema, teniendo en cuenta que algunos de ellos, como Falciani, Deltour o Halet, han sufrido persecuciones judiciales, y, en los casos más extremos, como los de Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak, han pagado con sus propias vidas.

Cuando intentamos definir una dimensión europea de los problemas de blanqueo de capitales, fraude fiscal y otros delitos relacionados con la corrupción financiera, podemos destacar dos niveles diferenciados. El primero es aquel que hace referencia a los problemas de los fondos gestionados directamente por la UE. La segunda dimensión, mucho más compleja, es la relacionada con una economía global y con actores que se aprovechan de un mercado europeo único plenamente integrado, pero con unas administraciones tributarias fraccionadas y sin las herramientas necesarias para garantizar que se cumple

el principio de que se paguen los impuestos allá donde se ejerce de forma efectiva la actividad económica.

Respecto a las normas que permiten controlar el dinero gestionado por la UE, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo son organismos relativamente eficientes y modernos que han reducido las irregularidades y el uso indebido de los fondos europeos.

Con todo, sigue existiendo un talón de Aquiles: la política agraria común. Un análisis de 2021⁹ de la aplicación de los fondos PAC en Bulgaria, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y Rumanía demuestra la opacidad y la corrupción en su gestión. En los últimos años, los fondos de la Unión Europea para subvenciones agrícolas en dichos países tienden a acabar en manos de oligarcas locales relacionados con las élites gobernantes o los grandes conglomerados agrícolas y macrogranjas, en lugar de ayudar a los pequeños y medianos agricultores. Hay casos documentados que incluyen conflictos de intereses, nepotismo, así como de flagrante corrupción y fraude.

El nuevo gran reto de la UE en cuanto a una gestión limpia y transparente es el desembolso de los fondos europeos para la recuperación ante la crisis provocada por la pandemia: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por el momento, la Comisión está buscando un equilibrio entre un seguimiento estricto o prescriptivo de las inversiones y una flexibilidad de gasto para los estados que les permita acelerar el gasto y absorber los fondos, contribuyendo a una más rápida recuperación.

En este contexto, cabe destacar el mecanismo de defensa del Estado de derecho, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Por primera vez disponemos de un mecanismo que vincula el desembolso de fondos de la UE con el cumplimiento del Estado de derecho. Sin embargo, el mecanismo no es tan efectivo como se reclamaba cuando se logró su aprobación a finales de 2020, después de la feroz resistencia de varios Estados miembro.

El segundo nivel donde se hace necesario intervenir en profundidad para garantizar la justicia fiscal y económica es en el desajuste entre las competencias y las capacidades de los Estados miembro desde un punto de vista tributario y la realidad de un mercado interior cada vez más integrado. El caso más evidente son los mecanismos de planificación fiscal agresiva, con lo que grandes multinacionales se aprovechan de un mercado interior más integrado en la UE para pagar menos impuestos. Son un reflejo de las limitaciones estatales y la necesidad de más integración europea en materia de lucha contra el fraude fiscal y, sobre todo, de la necesidad de más voluntad política.

⁹ <https://www.greens-efa.eu/en/article/document/where-does-the-eu-money-go>

Durante los últimos años, se han realizado mejoras a nivel mundial y europeo en las normas contra el blanqueo y el estándar para el intercambio automático de información (CRS, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero muchos Estados miembro de la UE no aplican adecuadamente las directivas europeas en la materia y la Comisión tiene abiertos varios procesos de infracción por no transposición. Un claro ejemplo es Luxemburgo, cuya transposición de las normas contra el blanqueo, que precisamente se crearon a raíz de LuxLeaks, ha sido muy deficiente. Otro ejemplo es Malta, sometido en principio a esta legislación y que, sin embargo, fue señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional como jurisdicción de alto riesgo.

También debemos referirnos al decepcionante ejercicio de la lista de paraísos fiscales de la UE. Empezó como un ejercicio ambicioso y de calado, que consiguió cambios significativos en varios paraísos fiscales. Pero durante los últimos años el proceso ha estado cada vez más politizado. Actualmente, la lista incluye Panamá, que en 2018 fue incomprensiblemente eliminado de ella para ser reintroducido en 2020. Pero no incluye jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas, sede de dos tercios de las sociedades descubiertas en la investigación de los papeles de Pandora. Ni la OCDE ni la UE se han atrevido jamás a señalar a Estados Unidos, a pesar de que, al incumplir el criterio de intercambio de información fiscal, debería figurar en la lista de paraísos fiscales de la UE. Estados Unidos no está adherido al CRS de la OCDE porque aplica su propio estándar llamado FATCA; pero bajo este régimen no hay reciprocidad total ni se comparte información sobre el beneficiario final de los activos no estadounidenses. Además, los regímenes fiscales de Nevada, Delaware, Dakota del Sur y Alaska son muy agresivos en la imposición a impuestos sobre las ganancias de capital.

La lista tampoco incluye ningún país de la UE, a pesar de que según Oxfam¹⁰, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos tienen indicadores económicos típicos de paraísos fiscales, como altos niveles de inversión extranjera directa, pagos de propiedad intelectual, intereses, dividendos... Luxemburgo es un caso paradigmático de paraíso fiscal en el corazón de la UE: el 90% de las sociedades allí son extranjeras; 50.000 sociedades pantalla gestionan hasta 6 billones de euros, sin que el 20% de ellas haya tenido ninguna actividad en los últimos años; y el 80% de los fondos de inversión no dicen quién es su beneficiario último.

La mayoría de los esquemas de evasión fiscal internacionales podrían evitarse implementando un tipo mínimo de impuesto de sociedades. En estos momentos, gracias al acuerdo global alcanzado en el G20 de Roma en octubre de 2021,

¹⁰ <https://www.oxfam.org/es/node/15757>

existe una cierta voluntad política global para avanzar hacia un tipo mínimo global del impuesto de sociedades, con lo que se combatiría la elusión. La directiva de tipos impositivos mínimos efectivos del impuesto de sociedades en la UE transpone uno de los pilares del acuerdo global de la OCDE, y prevé un tipo impositivo mínimo efectivo del 15% para las multinacionales. Sin embargo, no se ha podido aprobar por el voto contrario de un único país: Hungría.

Este revés a la justicia fiscal demuestra nuevamente que la regla de la unanimidad en materia tributaria en la UE es un problema fundamental. Al ser una competencia estatal, las decisiones fiscales deben tomarse por unanimidad, pero, en el actual marco de cada vez mayor integración económica, no tiene ningún sentido. Por eso, llevamos años insistiendo a la Comisión en que debe hacer nuevas propuestas en virtud del artículo 116 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), único mecanismo que realmente hace posible eludir el bloqueo de la unanimidad, estableciendo una mayoría cualificada en su lugar, para evitar los vetos individuales de los Estados miembro. No podemos aceptar que la oposición de un país secuestre una propuesta global dirigida a aumentar la justicia fiscal en Europa; en este caso ha sido Hungría, como en otros fueron Irlanda o Luxemburgo.

Los intermediarios como abogados, consultoras, gestores de carteras o agentes inmobiliarios han ayudado activamente a blanquear dinero, evitar impuestos y ocultar la riqueza a grandes fortunas. En el caso LuxLeaks, se demostró que PwC (PricewaterhouseCoopers) estaba en el centro de la maquinaria de evasión fiscal en la UE, igual que los papeles de Pandora demostraron una función similar de McKensey en Estados Unidos. Teniendo en cuenta el papel desempeñado por estos intermediarios en todos los escándalos destapados, nuestro marco de lucha contra el blanqueo también debe ocuparse de su actividad, sobre todo en el contexto de acciones contra la riqueza de la oligarquía rusa escondida mayoritariamente en la UE. En este sentido, hay una conclusión clara: necesitamos un registro de activos de la UE, incluyendo propiedades inmobiliarias, obras de arte o aviones y yates, con la información de los beneficiarios finales.

En resumen, la diagnosis y la hoja de ruta están claras: reforzar las normas de transparencia y contra el blanqueo, aprobar la directiva de tipos mínimos, reformar a fondo la lista negra de la UE, llevar a cabo un registro de los activos de la UE, mejorar la aplicación de la legislación contra el blanqueo con procedimientos de infracción contra aquellos estados que la incumplen. Ahora lo realmente necesario es la voluntad política para aplicar estas reformas, porque sin justicia fiscal no hay ni justicia económica ni igualdad social posibles.

EPÍLOGO

MUNICIPALISMO Y FEMINIZACIÓN DE LA POLÍTICA: LA ESPERANZA GLOBAL

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona
Manuela D'Ávila, Escritora,
periodista y profesora de Políticas
Públicas
Irací Hassler, alcaldesa de Santiago
de Chile

En julio de 2021, y ahora escribiendo este libro, volvemos a encontrarnos todas para animar un proceso municipalista internacional que es más necesario que nunca. Este movimiento desde luego no es perfecto y los grandes cambios estructurales que hay que impulsar en este momento de crisis global múltiple van a llevar años, incluso décadas, pero el camino se hace andando. En este sentido, el Fearless Cities 2021, con más de 1.200 participantes de 50 países, mostró que la red municipalista se consolida y crece.

En estos años, el municipalismo ha demostrado la capacidad de transformación real, trasladando las demandas de los movimientos sociales a los gobiernos y a las instituciones. Hoy, hace años que Barcelona es la ciudad de toda España con más inversión social. Hemos aumentado la inversión social en un 50%, duplicando las ayudas económicas de inclusión e impulsando programas de innovación social como las salidas para las personas sin hogar a través de Primer Hogar o el proyecto Vínculos contra la soledad. Los servicios públicos que habían sido debilitados los hemos reforzado con nuevos servicios de salud mental como el Konsulta'm, para ofrecer apoyo psicológico con un enfoque preventivo, con un servicio de dentista municipal o con la creación de VilaVeïna, para facilitar el acceso a los recursos y servicios públicos de cuidado.

Hemos creado una nueva institucionalidad que no existía, impulsando las políticas deliberativas a través de Decidim o con medidas decididas contra el fraude fiscal y con las que hemos recuperado 150 millones de euros de grandes empresas. En el ámbito de la vivienda, hemos construido más de 2.100 pisos sociales, estamos impulsando las promociones público-comunitarias y, con el uso de contenedores marítimos reciclados, hemos creado los APROP, viviendas dotacionales de rápida construcción. Por otro lado, plantando cara a una fuerte oposición por parte de los lobbies, estamos regulando los pisos turísticos y hemos cerrado 7.500 viviendas turísticas ilegales. Para luchar contra la masificación turística, también hemos exigido límites al crecimiento de infraestructuras como el aeropuerto y estamos proponiendo reducir a tres el número máximo de cruceros diarios que lleguen a la ciudad. Con el plan Superilla ('supermanzana'), también estamos construyendo una nueva Barcelona verde para recuperar un millón de metros cuadrados de espacio público para la ciudadanía.

Y todo esto solo podemos hacerlo juntas. La cuestión de la vivienda ha sido el gran ejemplo de la importancia de trabajar en red con otras ciudades, pues ha permitido dar un pulso a las grandes plataformas digitales. Juntas hemos sido capaces de lograr muchas cosas por las que nos han votado, cosas que no se habían hecho antes —que nos decían que eran imposibles—, y que hoy empiezan a ser una realidad.

En Chile, estamos viviendo un momento histórico que ha significado poder generar cambios reales. Estamos en un momento constituyente. Hemos visto que nacen transformaciones profundas justamente en un país donde el modelo neoliberal se implementó a rajatabla, donde todos nuestros derechos sociales se han mercantilizado. Este momento de cambio surge a partir del movimiento feminista, del movimiento social, del movimiento estudiantil, del movimiento ambientalista que nos brindan la posibilidad de empoderarnos y decir que ya basta de este modelo desigual excluyente y que necesitamos generar cambios profundos. Pero no lo hemos logrado solas: recogemos el ejemplo de muchas otras mujeres y otros movimientos en el mundo y en Latinoamérica, que esperamos que hoy día puedan significar en Chile una transformación hacia un nuevo Chile; un Chile más justo; un Chile seguro; un Chile verde; un Chile mejor.

El *buen vivir* es la palabra que ha estado en el centro en nuestro país; un buen vivir es lo que buscamos actualmente en Chile y en nuestra comuna barrial y capital, en donde contamos con una tremenda riqueza: nuestras comunidades, su historia, su patrimonio, sus parques urbanos.

En este año de gestión hemos propuesto nuevas formas de hacer política, con perspectivas nuevas para la seguridad comunitaria, la creación de la primera institucionalidad en Chile de carácter interseccional, como es nuestra Subdirección de Igualdad de género, diversidad sexual e inclusión; además de procesos de cogestión para la implementación de mejoras en nuestros barrios, desde una perspectiva sustentable, donde la construcción de un plan de gestión de residuos ha sido fundamental. También hemos concentrado esfuerzos en la planificación de nuestro Sistema Barrial de Cuidados “Stgo te cuida”, que contará con el primer Edificio de Cuidados de Chile, convirtiéndose en la inversión más grande de nuestra gestión, y que busca como objetivo central poner la vida de nuestras vecinas y vecinos en el centro.

Además, hemos abordado la educación en nuestros 44 establecimientos desde un punto de vista dialogante, no sexista y comunitario. Somos también la ciudad capital de la educación en Chile, con una cantidad importante de escuelas y liceos emblemáticos para nuestro país, que buscan hoy dar respuesta a demandas históricas para el fortalecimiento de la educación pública.

Desde los gobiernos locales, buscamos aportar a la generación de cambio en el momento constituyente que nos toca vivir. Sabemos que en muchos casos somos el primer encuentro de las personas con la institucionalidad, por lo que se vuelve fundamental generar acciones concretas que puedan cambiar la vida cotidiana de todas y todos, que permitan transformaciones que mejoren nuestro día a día y que den pie a veces hacia un buen vivir.

En Brasil, hay un movimiento social muy joven de generación de nuevas ideas, cuyos protagonistas son las mujeres y los negros. La regeneración de la izquierda en Brasil debe tener en el centro a nuestras mujeres, pero sobre todo a nuestras mujeres y hombres negros. Si queremos un país donde la

justicia social exista, tiene que ser enfrentando al racismo que estructura la desigualdad económica. Estos nuevos movimientos sociales de izquierda están en la calle, donde están los trabajadores más precarizados, los trabajadores *uberizados*, trabajadores sin ningún derecho.

Hoy, las comunidades de los barrios pobres están muy movilizadas y tiene una visibilidad política que nunca antes han tenido, en gran parte gracias a Internet. Se trata de una generación que nunca ha vivido sin tecnología, sin ese poder de movilización política que les proporcionan sus teléfonos inteligentes. Estas nuevas generaciones empoderadas han llegado a la universidad durante los gobiernos de Lula y Dilma, ya que antes solamente teníamos un 1% de los jóvenes en la universidad. Hoy, la mitad de los estudiantes de las universidades públicas son de comunidades periféricas o jóvenes negros. Ahí radica una base fundamental del cambio de los movimientos sociales. Hoy es imposible pensar en un movimiento de transformación social y político que no pase por los dos espacios al mismo tiempo: que esté en las calles y que esté en las redes.

Barcelona, Santiago y los movimientos de Brasil son ejemplos de esperanza en un contexto de crisis global. Atravesamos un momento de crisis que debemos convertir en una oportunidad para la transformación radical, porque las viejas estructuras han quedado obsoletas y amenazan la vida entera en el planeta. En la salida de la pandemia, en un escenario de guerra y crisis humanitarias, no necesitamos una simple recuperación, necesitamos una transformación para alcanzar ciudades justas, feministas y sostenibles que queremos para nuestros vecinos y vecinas. Este cambio no lo vamos a poder alcanzar fácilmente, habrá que abordar grandes retos globales que tienen también su traducción local, y para ello hace falta imaginación y mucha innovación: juntas vamos a generar mejores ideas que cada una por separado.

Hay que fortalecer el hacer política con la gente: ahí está nuestro poder, ahí está nuestra fuerza. Cuando no tienes el poder mediático, no tienes el poder oligárquico, no tienes el poder judicial; el único poder es el de la gente. A lo largo de la historia, se demuestra un poder imparables cuando la gente se organiza y persigue unida los objetivos de transformación y de justicia social.

Recientemente, hemos tenido que enfrentar momentos difícilísimos; sin embargo, la fortaleza siempre ha recaído en que la gente se ha organizado en común y ha logrado cosas increíbles y que nadie podía imaginar. Por ejemplo, en Barcelona se organizó una red para fabricar mascarillas con impresoras 3D, y desde el Ayuntamiento se proporcionaron recursos, otras pequeñas empresas pusieron el transporte y los materiales, y entre todos y todas acabamos fabricando miles de mascarillas y de protecciones para los profesionales sanitarios.

Esta es la comunidad resiliente que consigue mantener los lazos en todas las dificultades. Somos capaces de alcanzar logros que los Estados jamás podrían conseguir, porque la fuerza del municipalismo es esta idea de compartir el espacio común, la extensión de nuestras casas, que se fusionan con el espacio público que es la ciudad, una ciudad que nos permite encontrarnos y trabajar juntas para cambiar la realidad. Es precisamente esta política de la proximidad de la vida cotidiana la que nos lleva a enfrentar los retos pensando siempre en el bienestar de las personas.

Los municipios somos quienes tenemos menos recursos y menos competencias. No tenemos competencias legislativas para cambiar las reglas del juego, pero poseemos la grandísima fuerza de la cooperación de la comunidad. Las ciudades son espacios de nuevas ideas, de creatividad e innovación, de inventar lo que no existía; nuevas soluciones, nuevas formas de responder a viejos problemas. Vivimos un momento de grandes amenazas, como el cambio climático o la extrema derecha, de un sistema capitalista patriarcal que agoniza, pero que sigue generando sufrimiento a tantas personas. Ahora bien, como en todos los momentos de crisis, este es también un momento de oportunidades de transformación profunda.

Hay que dejar espacio a esas experiencias comunitarias, cooperativas, feministas, ecologistas; darles espacio y fortalecerlas con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para impulsar esos ejemplos concretos de transformación, que, poco a poco, van demostrando que hay otras maneras de hacer las cosas y de resolver los problemas, desde la proximidad y desde lo cotidiano.

En un mundo en crisis y cambios como el actual, vemos como hay movimientos transversales a escala global, cargados de esperanza, como el feminismo y el municipalismo. Entre todas, desde el municipalismo y desde el feminismo, podemos impulsar muchas experiencias de renacimiento, de un nuevo humanismo feminista, donde los municipios sean ese espacio común que se abra a todas esas transformaciones, a esa innovación y a esa defensa de la vida sin excusas. **Nos quieren en soledad, pero nos tendrán en común.**

BIOS

› **Eva Abril Chaigne**

Eva Abril Chaigne (Madrid, 1974) es madrileña, nacida en un barrio al sur de la ciudad, y desde hace cinco años, vecina del Poble-sec, en Barcelona. Es fotógrafa de profesión, pero trabaja como profesora de Secundaria desde hace dieciséis años y, afortunadamente, le encanta. El activismo LGTBI+ es una de sus grandes pasiones, junto con la política. En los últimos años, ha tenido la suerte de poder combinarlas como activista en el eje de feminismos LGTBI+, donde ha aprendido muchísimo. Como miembro de la Dirección Ejecutiva de Barcelona En Comú, está comprometida en hacer todo lo posible para ayudar con la transformación y la revolución que se está llevando a cabo en la ciudad de Barcelona.

› **Eloi Badia Casas**

Eloi Badia Casas (Barcelona, 1983) es ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya, es concejal del Ayuntamiento de Barcelona desde 2015 y, desde 2019, está al frente del área de Emergencia Climática y Transición Ecológica, encargada de impulsar la *Declaración de emergencia climática de Barcelona*, un documento que contiene más de 350 compromisos de la ciudad para combatir el cambio climático. También ha promovido la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (la más grande del sur de Europa, con unos 95km² de extensión) para combatir la contaminación, el problema de salud más importante de Barcelona. Además, entre otros objetivos, trabaja para que la ciudad pueda avanzar en la transición energética, incrementar el reciclaje de residuos, asegurar la gestión pública del agua y mejorar la naturalización y la biodiversidad de la ciudad.

› **Luisa Broto Bernués**

Luisa Broto Bernués (Huesca, 1965) es trabajadora social con experiencia en formación de personas adultas, educación familiar y apoyo a personas con VIH. Trabaja en los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza desde 1998. Es miembro de la Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales y del Espacio de Derechos Sociales, activista LGTBI+ y delegada electa de personal. Fue vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el periodo 2015-2019, y en la actualidad es concejala de Zaragoza En Común en el mismo ayuntamiento.

› **Gabriela Cabaña**

Antropóloga y doctoranda en la London School of Economics and Political Science. Actualmente, investiga la política y la planificación energéticas en Chile desde una perspectiva etnográfica. Es miembro del Centro de Análisis Socioambiental (CASA), organización que investiga y elabora perspectivas críticas para la transformación socioecológica de Chile, y del observatorio Energía y Equidad, además de ser presidenta de la Red Chilena de Ingreso Básico. Sus intereses giran en torno a las confluencias entre el decrecimiento, la renta básica, la energía y la ética del trabajo.

› **Christo Casas**

Christo Casas (Cuenca, 1991), periodista por la Universitat de València y politólogo por la Universitat Autònoma de Barcelona, es asesor en el área de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona desde 2022. Ha participado en diversas plataformas y proyectos municipales relativos a la participación ciudadana, la emergencia climática, la salud, los derechos civiles y la diversidad. También ha coordinado la comunicación del Consell de la Joventut de Barcelona y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación desde una perspectiva de clase y derechos humanos.

› **Emily Marion Clancy**

Emily Marion Clancy (Bologna, Italia, 1991), italo-canadiense graduada en Derecho por la Università di Bologna, certificada en Estudios Jurídicos por el King's College de Londres y especializada en Administración Pública por la escuela de posgrado SPISA, de la Università di Bologna. Actual teniente de alcalde y responsable de vivienda, asambleas climáticas y oficina del clima, políticas nocturnas y de igualdad de oportunidades y antidiscriminación de la ciudad de Bologna. Elegida concejala por primera vez en 2016, fue reelegida en 2021 con la plataforma municipalista Coalizione Civica tras obtener el mayor número de votos entre todos los candidatos del resto de los partidos que se presentaban a las elecciones municipales.

› **Pierre Clavel**

Profesor emérito de la Cornell University AAP (Architecture, Art, Planning) de Ithaca (Nueva York, EE.UU.), escribe sobre política de ordenación urbanística. Considera que los planificadores representan a todas las personas y le irritan

quienes se oponen a ellos, especialmente cuando se afirma que el mercado o la pluralidad siempre son mejores. Descubrió «ciudades progresistas» que cuestionaban esta idea y escribió sobre ellas, convencido de que escribir sobre los «planificadores progresistas» es lo mejor que puede hacer un académico. Sus publicaciones más destacadas son *The Progressive City* (1986) y *Activists in City Hall* (2010). Otras de sus obras están disponibles en www.progressivecities.org y en la colección digital de la biblioteca de Cornell sobre ciudades progresistas y ordenación urbana (ecommons.cornell.edu).

› **Ada Colau**

Ada Colau Ballano es la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Barcelona. Comprometida con los valores de la ciudad y próxima a las necesidades de la gente, en sus mandatos ha cambiado las prioridades de la agenda, incorporando políticas de proximidad (por ejemplo, con el Plan de Barrios y las políticas de vivienda) y, al mismo tiempo, afrontando retos globales como la emergencia climática o el feminismo.

› **Tània Corrons Mellado**

Tània Corrons Mellado (Manresa, 1978), economista especializada en derechos humanos y cooperación internacional, ha trabajado en la gestión de distintas empresas y entidades los últimos veinte años. Desde enero de 2020, es miembro de la Dirección Ejecutiva de Barcelona En Comú, donde ha asumido el área de Logística, Finanzas y Recursos Humanos, además de la portavocía.

› **Manuela D'Ávila**

Manuela es periodista, magíster en políticas públicas y estudiante de doctorado en políticas públicas de la UFRGS. Fue la concejala más joven de Porto Alegre, la diputada federal más votada de Brasil y la diputada estatal más votada en 2014. Se postuló para la vicepresidencia del país en 2018. Fundó el Instituto *E Se Fosse Você*, destinado a combatir la desinformación y las redes de odio. Publicó tres libros *Revolução Laura*, *Por que lutamos? Um livro sobre amor e liberdade* y *E Se Fosse Você? Sobrevivendo às redes de ódio e fake news*, también es editora y autora de *Coletâneas Sempre foi sobre nós: relatos da violência política de gênero no Brasil*, e *Rede de Mentira e ódio: e se o alvo fosse você?*.

› **Eliška Drápalová**

Doctora en Economía Política por el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia), fue becaria posdoctoral en el grupo Organizaciones, Gestión y Liderazgo de la Hertie School de Berlín y en la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Desde enero de 2022, es becaria del grupo de investigación Política de la Digitalización del Centro de Ciencias Sociales de Berlín (WZB, por sus siglas en alemán), aunque antes había sido investigadora invitada. Es una politóloga comparativa e investigadora de la Administración interesada en la calidad del gobierno y la normativa de las ciudades, las ciudades inteligentes y el efecto de la tecnología sobre la Administración pública. Codirige un proyecto financiado por la Fundación Alemana para la Investigación (DFG, por sus siglas en alemán) sobre la regulación de las compañías de plataforma en ciudades y regiones de la UE, junto al profesor Kai Wegrich de la Hertie School de Berlín.

› **Ana Fernández Borsot**

Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona y certificada por la Cour D'Appel de Douai (Francia) con el Certificado de Aptitud para la Profesión de Abogado (CAPA), es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad (Buenos Aires) y participa en diversos espacios para defender el acceso a una vivienda digna. Actualmente, reside en Barcelona y es miembro activo de la Alianza Internacional de Habitantes.

› **Nadine Finch**

Investigadora honoraria sénior en la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol y profesora de CHILD CIRCLE, un centro de especialización y acciones de interés público para la protección de la infancia y las medidas europeas. Antes había sido abogada de derechos humanos especializada en derechos de la infancia, migración, tráfico de menores y derecho familiar internacional; más adelante, fue jueza en el Tribunal de Apelación de la Cámara de Inmigración y Asilo (Reino Unido). Es síndica de Statewath y, entre 1984 y 1987, trabajó en temas relacionados con la raza y la vigilancia en el Consejo del Área Metropolitana de Londres y la Unidad de Política Estratégica de Londres.

› **Francesco Gentilini**

Francesco Gentilini (Bologna, Italia, 1992) es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Bologna, máster en Análisis Económico en la Solvay Business School de Bruselas y, actualmente, doctorando en Sociología del Trabajo en la Universidad de Florencia, con una tesis sobre las adquisiciones por parte de trabajadores. Es miembro de la junta vecinal de Santo Stefano, uno de los seis barrios de Bologna, desde octubre de 2021, cuando salió elegido con la plataforma municipalista Coalizione Civica.

› **Quique Gornés Cardona**

Ingeniero técnico de Obras Públicas por la Universitat Politècnica de Catalunya, es asesor en el área de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona desde 2019. Ha participado en diversos proyectos de promoción del derecho humano al agua y a la gestión pública del agua desde Ingeniería Sense Fronteres (ESF). Fue responsable técnico del servicio de agua y del alcantarillado en Arenys de Munt desde la remunicipalización del servicio entre 2012 y 2017. También ha participado en la elaboración del Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua del Área Metropolitana de Barcelona, en la agencia municipal Barcelona Regional de 2017 a 2019.

› **Elia Gran Lostau**

Licenciada en Periodismo y amante del reportero de investigación e independiente, es responsable de comunicación de la Concejalía de Salud, Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona. Redactora en Estados Unidos en medios escritos y radiofónicos, y corresponsal de publicaciones catalanas y del Estado español. Creadora de contenidos digitales y de redes para *The Independent* de Nueva York y locutora del programa semanal de noticias en la emisora de radio WBAI también de Nueva York. Cocreadora de la plataforma Mínimo, observatorio municipalista. Sigue de cerca los movimientos por el derecho a la ciudad, la lucha por una vivienda digna, los movimientos locales y las corrientes feministas.

› **Irací Hassler Jacob**

Irací Hassler Jacob, Alcaldesa de la Comuna de Santiago. Su trayectoria política nace al alero del movimiento social y estudiantil, en donde fue Senadora Universitaria y Secretaria

General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En ese marco, se insertó en el debate por el derecho a la educación, y progresivamente, en el movimiento feminista del cual es parte activa, abogando por los derechos sexuales y reproductivos, y en la actualidad impulsando políticas municipales con enfoque de derechos en pos de la igualdad de género.

Su actual rol de Alcaldesa es parte de la construcción política de una trayectoria que ha ido de la mano de las organizaciones sociales y políticas. De esa forma, pudo ser Concejala en el periodo anterior. Es así como en el marco de las movilizaciones sociales del 2019, nace Alcaldía Constituyente, proyecto colectivo que elaboró una propuesta programática y política que ha situado en el centro el buen vivir para todos quienes habitan Santiago.

En la actualidad, y cumpliendo un año de gestión, se han trazado nuestros objetivos políticos hacia el derecho a la ciudad, la seguridad comunitaria, el fortalecimiento de la educación pública, la transversalización de la perspectiva de género y un nuevo modelo de gestión de residuos.

› **Owen Hatherley**

Owen Hatherley (Southampton, Reino Unido, 1981) es Doctor por la Universidad Birkbeck en 2011, con una tesis que se publicó en 2016 con el título *The Chaplin Machine* (Pluto Press). Escribe periódicamente sobre arquitectura, cultura y política para *Architectural Review*, *The Guardian* y *London Review of Books*, entre otras publicaciones. Ha publicado los libros *Militant Modernism* (Zero, 2009), *A Guide to the New Ruins of Great Britain* (Verso, 2010), *Uncommon – An Essay on Pulp* (Zero, 2011), *Across the Plaza* (Strelka, 2012), *A New Kind of Bleak* (Verso, 2012), *Landscapes of Communism* (Penguin, 2015), *The Ministry of Nostalgia* (Verso, 2016), *Trans-Europe Express* (Penguin, 2018), *The Adventures of Owen Hatherley in the Post-Soviet Space* (Repeater, 2018), *Soviet Metro Stations* (con Christopher Herwig, Fuel, 2019), *Red Metropolis* (Repeater, 2020), una colección de ensayos, *Clean Living Under Difficult Circumstances* (Verso, 2021), *Modern Buildings in Britain: A Gazetteer* (Penguin, 2022) y *Artificial Islands* (Repeater, 2022). También es editor de *The Alternative Guide to the London Boroughs* (Open House, 2020).

Editó y prologó una edición actualizada de *Nairn's Towns*, de Ian Nairn (Notting Hill Editions, 2013). Es autor de los textos para la exposición *Brutalust: Celebrating Post-War Southampton* en la galería K6 y del prologó de *How I Became A Socialist*, de William Morris (Verso, 2020). Entre 2006 y 2010, escribió el blog *Sit Down Man, You're a Bloody Tragedy*. Es redactor de la revista *Jacobin* y editor de la sección de cultura de *Tribune*.

› **Jesús Hernández**

Político y máster en Fiscalidad, especializado en asistencia parlamentaria en materias como fiscalidad y asuntos económicos y financieros. Actualmente, asesora al diputado Ernest Urtasun sobre cuestiones relativas a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Ha trabajado como asesor de Izquierda Plural en el Congreso español.

› **Steve Hughes**

Con más de veinte años de experiencia como activista en los EE.UU. y Europa, vive en Praga y trabaja en varias iniciativas de sindicalización transeuropeas y transatlánticas. Con raíces en el movimiento obrero estadounidense, se pasó al activismo político con el Working Families Party (WFP) en 2010. En 2014, se trasladó a Europa, pero sigue apoyando el activismo del WFP. Ha asumido un papel de liderazgo en la creación de la European Community Organizing Network (ECON) y colabora estrechamente con el Grassroots Power Project. En todas estas acciones, ejerce de enlace entre los sectores activistas estadounidenses y los europeos.

› **Patrick Kappert**

Patrick Kappert, ingeniero del conocimiento, después de estudiar Ciencia Cognitiva, cursó un máster en Gestión Pública Ambiental. En 2002, se trasladó de los Países Bajos a España y se instaló en el barrio del Poblenou de Barcelona con su pareja, con quien ha tenido dos hijos. Sigue yendo en bicicleta, trabaja como informático en Qubiq y forma parte de la junta del colectivo Superilla Poblenou, así como de algunas asociaciones de alimentación ecológica del distrito de Sant Martí de Barcelona. Vivir en la Superilla cambió su perspectiva sobre el espacio público urbano y su función.

› **Anke Kleff**

Psicóloga y máster en desarrollo organizacional, colabora con organizaciones privadas y públicas en la implementación de procesos de cambio como la creación de culturas más participativas, nuevas formas de liderazgo o la feminización del mundo de la investigación científica. Es miembro de la coordinadora de Barcelona En Comú como representante del Comú y, como cocordinadora del grupo de cuidados de Barcelona En Comú, ayuda a concienciar sobre la importancia de los vínculos afectivos y la empatía como herramientas de transformación política.

› **Joan A. Llinares Gómez**

Joan A. Llinares Gómez (Alzira, 1953), Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional (FHN), es actualmente director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF). Fue gerente de recursos del Ayuntamiento de Barcelona, impulsor y responsable de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas; con anterioridad, como director del Palau de la Música Catalana, detectó y denunció la trama de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (caso 3%). Como gestor cultural ha sido administrador del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

› **Lara Lussón**

Lara Lussón (Madrid, 1988), periodista y trabajadora social, se mudó a Lesbos (Grecia) en 2017, donde trabajó como coordinadora de equipos en una ONG de salvamento marítimo. Ha trabajado también en la frontera entre Serbia y Hungría, y en la frontera de Marruecos con Ceuta —en ambas en contextos de emergencia y ayuda humanitaria—. Asimismo, regularmente viaja al norte de Argentina, donde colabora en proyectos de prevención de la violencia contra la mujer. En España, forma parte del equipo de Atención Social de Refugees Welcome y participa en conferencias y debates sobre cuestiones migratorias.

› **Beatriz Martínez Alonso**

Activista de barrio y vecina del Guinardó, nacida en A Coruña, es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y máster

en Gestión y Resolución de Conflictos. Consejera de distrito entre 2017 y 2019, actualmente forma parte de la Dirección Ejecutiva de Barcelona En Comú, donde es responsable de cuidados y del área de participación y movilización como referente de territorio.

› **José Manuel Mejías Vega**

Psicólogo social y empleado público desde hace 35 años, ha desarrollado su trabajo profesional en ámbitos de participación ciudadana, animación sociocultural, educación social y desarrollo comunitario, especialmente en materia de formación. Como activista de barrio, trabajó con menores y jóvenes en distintos colectivos; como pacifista, participó del movimiento de objeción de conciencia e insumisión; ha sido integrante de diferentes iniciativas sociales, sindicales y políticas. Participó en el 15M y fue miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC). En 2014, participó en la creación de Ganemos Jerez, agrupación municipalista en el Ayuntamiento de Jerez. Integra la Comisión de Coordinación y asume el trabajo de contacto y relación habitual con otras redes municipalistas en España.

› **Júlia Miralles de Imperial Pujol**

Licenciada en Ciencias Políticas y en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona, donde imparte clases de Políticas Públicas y donde está desarrollando el doctorado sobre políticas anticorrupción. Participa en Barcelona En Comú y Catalunya En Comú en los ámbitos de economía e internacional, especialmente en proyectos vinculados a la justicia fiscal y a la política europea. Es miembro de las ejecutivas de ambas organizaciones.

› **Maga Miranda Díaz**

Maga Miranda Díaz (Chile, 1991), historiadora del arte, gestora cultural, feminista y activista del patrimonio, desde hace cinco años, forma parte del Comité Patrimonio Barrio Las Rejas, que busca defender la vida de barrio frente al avance de las inmobiliarias, y, desde hace tres, milita en el partido Revolución Democrática, en el territorio de Estación Central y en el Frente Feminista, del cual es presidenta regional de la Región Metropolitana para el período 2021-2023. En las

pasadas elecciones nacionales, fue elegida concejala por la comuna de Estación Central, para el período 2021-2024.

› **Maurice Mitchell**

Maurice Mitchell (Nueva York, EE. UU.) es estratega político y referente del Movement for Black Lives reconocido en todo los Estados Unidos. Criado en Nueva York por unos padres caribeños de clase obrera, empezó a hacer activismo cuando era adolescente y ya nunca lo dejó. Después de trabajar en varias organizaciones populares de defensa en su estado natal, dirigió la Mesa de Participación Ciudadana del estado de Nueva York. Tras el asesinato de Michael Brown por parte de la policía, se trasladó a Ferguson y ayudó a crear el Movement for Black Lives. También cofundó y lideró Blackbird, una organización pilar del movimiento. En 2018, tomó las riendas del Partido de las Familias Trabajadoras como director nacional.

› **Lucía Morale**

Abogada especializada en políticas públicas de seguridad, trabaja la relación entre policía y ciudadanía, y la incorporación de la perspectiva de género y de derechos a las políticas de seguridad. Entre Argentina y Barcelona ha trabajado en organizaciones de derechos humanos, como Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H. I. J. @S.), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e Iridia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, y también en el Ministerio de Seguridad de Argentina y el área de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona. Participa de diferentes proyectos internacionales y es cofundadora de la Red Internacional para la Innovación en Seguridad (RISE), así como integrante de Barcelona En Comú, donde fue miembro de la coordinadora del partido y actualmente es jefa de gabinete del área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento.

› **César Ochoa Díez**

Licenciado en Matemáticas por la Universitat de Barcelona y profesor de instituto público, desde donde participa en proyectos de pacificación del entorno escolar y creación de una comunidad energética, ha ejercido diversas responsabilidades en la organización de Barcelona En Comú, desde la coordinación de barrio y distrito a la presencia en la Ejecutiva.

Actualmente, es consejero de Catalunya en Comú y miembro activo del Eje de Urbanismo y Movilidad. Ha colaborado en la redacción del programa en ese ámbito, ha escrito diversos artículos en prensa y ha impartido ponencias sobre movilidad sostenible y urbanismo táctico.

› **Eric Piolle**

Eric Piolle (Pau, Francia, 1973), ingeniero y graduado en Ingeniería Civil en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, se involucró en la vida pública en 2009, tras una carrera como ejecutivo sénior en la industria. Empezó como consejero regional del Partido Verde francés (Europa Ecología Los Verdes) en la región de Ródano-Alpes entre 2010 y 2014. Fue elegido alcalde de Grenoble en 2014 y reelegido en 2020. Grenoble es una ciudad francesa pionera en democracia local, desarrollo de la movilidad «suave» (peatonalización, transporte público y en bicicleta), alimentos locales y orgánicos, comprometida con la lucha contra la pobreza y con una política ambiciosa para combatir la contaminación del aire. Bajo su mandato, la ciudad de Grenoble y sus socios ganaron el título de Capital Verde Europea 2022.

› **Gerardo Pisarello**

Político y jurista hispanoargentino, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona. Fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona del grupo municipal de Barcelona En Comú entre 2015 y 2019, período durante el cual ejerció de primer teniente de alcalde. Diputado electo por la circunscripción de Barcelona en el Congreso de los Diputados en las XIII y XIV legislaturas, en ambas elegido como miembro de la Mesa del Congreso.

› **Álvaro Porro González**

Álvaro Porro González (Madrid, 1978), economista de formación, es activista y experto en diferentes campos: consumo sostenible, economía social y solidaria, economías comunitarias y colaborativas, soberanía alimentaria, mercado social, fiscalidad verde y procesos participativos. Actualmente, ostenta el cargo de comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Política Alimentaria del Ayuntamiento de Barcelona. Director del proyecto Barcelona Capital Mundial de la Alimentación Sostenible 2021, cuyo objetivo era desarrollar

proyectos y políticas para fomentar la alimentación sostenible en la ciudad.

› **Alicia Puig**

Alicia Puig (Barcelona, 1995) es Graduada en Humanidades y máster en Historia Económica, cuya investigación académica se centra en la vivienda y el desarrollo económico. Trabajó en la Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología de la Universitat Oberta de Catalunya hasta que en 2018 entró a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona, primero en el equipo de Ciutat Vella y el Eixample y actualmente en el área de Ecología Urbana, llevando temas de transformación urbana.

› **Guillem Pujol Borràs**

Guillem Pujol Borràs, politólogo, filósofo y periodista, es coautor de *CARTHA on making Heimat* (editorial Park Books) y actualmente dirige *Cataluña Plural*, diario de referencia de los medios editados por la Fundación Periodismo Plural: *El Diario de la Educación*, *El Diario de la Sanidad*, *El Diario del Trabajo* y la *Revista XQ*.

› **Pamela Radcliff**

Pamela Radcliff (Passaic, Nueva Jersey, EE. UU., 1956), Profesora del departamento de Historia de la Universidad de California, en San Diego, desde 1990. Se graduó en la Universidad Scripps en 1979 y se doctoró en la Universidad de Columbia en 1990. Es autora de varios libros y numerosos artículos sobre la movilización popular, la política de género y de la mujer, y la sociedad civil en la España del siglo XX. Ha publicado tres libros en solitario: *From Mobilization to Civil War: The Politics of Polarization in the Spanish City of Gijón* (Cambridge University Press, 1996), *Making Democratic Citizens in Spain: Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-1978* (Palgrave, 2011) y *La España contemporánea: desde 1808 hasta nuestros días* (Ariel, 2018; edición en inglés, *History of Modern Spain, 1808-Present*, Wiley Blackwell, 2017). Actualmente, investiga la historia del discurso municipalista en la cultura política española.

› **Antonello Ravetto Antinori**

Antonello Ravetto Antinori (Palermo, 1974), periodista, es portavoz del alcalde de Lampedusa y Linosa Totò Martello desde 2018. Trabajó para el diario *Il Mediterraneo* y para la

estación de radio y televisión TRM de 1998 a 2000. Trabajó para el diario *L'Ora* de 2000 a 2001. Trabaja en el Parlamento Regional de Sicilia, donde se ocupa de noticias políticas y parlamentarias, desde 2001. Colabora con la agencia de prensa ANSA desde 2004. Trabajó en el proyecto europeo *Snapshots from the Borders* entre 2018 y 2021, donde se ocupó de la comunicación en temas relacionados con los flujos migratorios y los territorios de frontera.

› **Carolina Recio Cáceres**

Carolina Recio Cáceres (Barcelona, 1980), Doctora en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha sido profesora asociada e investigadora y consultora de políticas públicas en esa misma universidad. Está especializada en sociología del género y del trabajo. Trabaja en la Concejalía de Salud, Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona, desde donde se han impulsado planes innovadores como el Plan de Salud Mental o el Servicio de Odontología Municipal. Ha sido consejera de distrito en Nou Barris y, con anterioridad, ha estado vinculada al tejido asociativo del distrito. Madre de un hijo y vecina de Barcelona.

› **Toni Ribas**

Activista medioambiental especializado en cambio climático, energía, contaminación y residuos. Ejerce como defensor del decrecimiento como herramienta para reducir las desigualdades y frenar la degradación de las condiciones de vida. Ha participado en el Movimiento por la Justicia Climática, en la Plataforma por la Calidad del Aire y en 350.org. Como miembro de Barcelona En Comú ha participado en el proceso de creación de Barcelona Energía (la empresa pública de electricidad de Barcelona) y ha representado a la organización en encuentros como el congreso *Growth in Transition* (Viena), *Can Cities Change the World?* (Estocolmo), *Systems Change-Ecological Challenges* (Oslo) y el proyecto *Cities of Change*.

› **María Eugenia Rodríguez Palop**

María Eugenia Rodríguez Palop (Llerena, 1970) es jurista, profesora, investigadora, ensayista y articulista. Militante feminista, ecologista y especialista en derechos humanos. Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente, es eurodiputada, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

(FEMM) e integra la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Ha publicado varios libros, entre ellos, recientemente *Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha* (Icaria-Clacso, 2019).

› **Nieves Salobral Martín**

Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en materia de género y feminismos y activista feminista desde hace varias décadas, es también miembro de Akafem, una red feminista-municipalista cuyo objetivo es incidir en las políticas institucionales locales para que sitúen en el centro el sostenimiento de una vida digna de ser vivida.

› **Janet Sanz Cid**

Janet Sanz Cid (Tamarite de Litera, 1984), Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra, es teniente de alcaldía del área de Ecología, Urbanismo y Movilidad, desde donde se ha impulsado el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) y el plan Superilles Barcelona. Es vecina del Poblesec y la mayor parte de su actividad asociativa se ha dedicado al movimiento juvenil, a la defensa de derechos humanos como el agua y la energía y al movimiento feminista. Es miembro de Ecologistas en Acción, SOS Racisme y del sindicato CC. OO.

› **Marc Serra Solé**

Marc Serra Solé (Barcelona, 1986), jurista y sociólogo, como concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, ha trabajado estrechamente en la creación de la nueva Oficina por la No Discriminación y ha sido uno de los impulsores de las políticas de empadronamiento activo de la ciudad de Barcelona. Asimismo, ha sido técnico de acogida en el Ayuntamiento de Barcelona y ha colaborado con diversas entidades de defensa de los derechos humanos de la ciudad. Ha codirigido el documental *Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur*.

› **Kate Shea Baird**

Kate Shea Baird (Londres, Reino Unido, 1985) trabaja en el ámbito de las relaciones internacionales para gobiernos locales y ha escrito sobre municipalismo en publicaciones como *elDiario.es*, *Nació Digital*, las revistas *ROAR*, *Red Pepper* y *La futura*, entre otras. Entre 2017 y 2021, fue miembro de la Dirección Ejecutiva de Barcelona En Comú y, como tal, trabajó en la campaña del partido para las elecciones municipales de 2019 en Barcelona. Continúa participando en Barcelona En Comú como activista desde la asamblea vecinal de Poblenou.

› **Gemma Tarafa Orpinell**

Concejala de Salud, Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona desde donde se ha impulsado el primer Plan de Salud Mental Municipal del estado español o el dentista municipal. Es doctora en Biología Molecular por la UB y postdoctorada por la Universidad Yale. Ha sido investigadora de Salud Pública en la UPF, como subdirectora del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET) e investigadora del Institut Català d'Oncologia. Ha sido desde hace más de 15 años activista del movimiento por la abolición de la deuda externa y por la sanidad pública y universal. Madre de un hijo y una hija.

› **Elena Tarifa Herrero**

Elena Tarifa Herrero (Barcelona, 1973), periodista experta en comunicación corporativa y relaciones públicas, y en información con perspectiva de género, con experiencia en gestión de políticas públicas de igualdad, es madre de dos hijas, feminista, europeísta, activista social y sindical. Desde 2015 participa activamente en el proyecto municipalista de Barcelona En Comú en diversos espacios activistas como la Comisión Internacional, desde su creación, y de la cual es cocoordinadora, o la Sectorial Internacional de Catalunya en Comú, donde también forma parte de su Consejo Nacional. Es concejala del distrito de Horta-Guinardó en Barcelona desde 2016, donde desarrolla políticas locales innovadoras desde la proximidad para contribuir a los cambios globales.

› **Gabe Tobias**

Cofundador de la Movement School, durante una década, trabajó por todo el mundo con Oxfam y otras ONG en programas

de desarrollo urbanístico y educación. Al regresar a los EE.UU., trabajó con Justice Democrats para contribuir a la elección de Jamaal Bowman, Cori Bush y Alexandria Ocasio-Cortez, y también fundó la Movement School para formar a la futura generación de activistas. En 2021, dirigió el proyecto Our City para ayudar a elegir a los paladines progresistas locales de la ciudad de Nueva York, donde vive.

› **Javier Toret Medina**

Psicólogo, investigador, activista social, experto en estrategia digital, comunicación política y tecnopolítica, es miembro promotor del colectivo Democracia Real Ya, el colectivo que lanzó las movilizaciones del movimiento de los indignados en 2011. Es autor del libro *Tecnopolítica y 15M: la potencia de las multitudes conectadas*, prologado por Manuel Castells. Tiene una amplia experiencia en formación, capacitación de equipos y empoderamiento digital de base en distintos países del sur global, como Brasil, México, India, Sudáfrica, etc. Es uno de los iniciadores del proyecto municipalista de Barcelona En Comú que en 2015 llevó a la alcaldía a la activista Ada Colau, trabajando en la estrategia digital de sus campañas electorales. Ha trabajado como asesor tecnológico de la empresa Thoughtworks y también como asesor de comunicación y estrategia digital del Ministerio de Universidades del Gobierno de España, con el ministro Manuel Castells. Actualmente, es promotor de un nuevo canal de comunicación para la transformación social: La Futura Channel.

› **Ernest Urtasun**

Ernest Urtasun (Barcelona, 1982) es Licenciado en Economía, cursó un posgrado en Relaciones Diplomáticas y completó los estudios en la Escuela Diplomática española. Desde 1998 es un político activo a escala local e internacional con Joves d'Esquerra Verda (JEV, Jóvenes de Izquierda Verde), la Federación de Jóvenes Verdes Europeos (FJVE) y el Partido Verde Europeo (PVE). Es miembro del Parlamento Europeo por En Comú Podem, vicepresidente del Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, miembro de la Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) y miembro suplente de la Comisión de Asuntos Exteriores.

En 2017, el movimiento municipalista internacional se reunió en Barcelona para construir redes globales de solidaridad y esperanza. Aquella cumbre sirvió para catalizar el municipalismo y expandirlo por todos los continentes. En los años siguientes, se celebraron encuentros regionales Fearless Cities en Varsovia, Nueva York, Bruselas, Valparaíso, Nápoles y Belgrado, mostrando la fuerza organizativa del movimiento global por el derecho a unas ciudades y pueblos para la gente común.

Este libro recoge parte de los debates que tuvieron lugar en julio de 2021, en la segunda edición mundial de Fearless Cities, que nació con la ambición de abordar los temas más desafiantes y provocativos con los que se enfrentan actualmente las ciudades, los pueblos y las zonas rurales.

Para nosotras, *Fearless* significa ser lo suficientemente valientes para tender la mano a quien piensa de manera diferente; lo suficientemente fuertes para ser vulnerables; lo suficientemente audaces para involucrarnos en la realidad, en lugar de mirarla desde la barrera.

Entre todas, desde el municipalismo y desde el feminismo, podemos impulsar muchas experiencias de renacimiento, de un nuevo humanismo feminista, donde los municipios sean ese espacio común que se abra a todas esas transformaciones, a esa innovación y a esa defensa de la vida sin excusas.

Ada Colau, Manuela D'Ávila e Irací Hassler

**NOS QUIEREN EN SOLEDAD,
PERO NOS TENDRÁN EN COMÚN.**

www.fearlesscities.com

